

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN  
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Vigésima Tercera Reunión del Comité de Expertos  
Del 18 al 21 de marzo de 2014  
Washington, D.C.

OEA/Ser.L.  
SG/MESICIC/ doc.410/13 rev.4  
21 marzo 2014  
Original: inglés

GUYANA

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 21 de marzo de 2014)

## SUMARIO

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en la República Cooperativa de Guyana del artículo III, Párrafo 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a la República Cooperativa de Guyana en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario; la información suministrada por organizaciones de la sociedad civil; la información recogida por la Secretaría Técnica; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 8 y el 10 de octubre de 2013 por los miembros del subgrupo de análisis de la República Cooperativa de Guyana, integrado por Haití y Trinidad y Tobago, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por la República Cooperativa de Guyana y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas y facilitó la obtención de información sobre buenas prácticas.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si éste es adecuado para los propósitos de la Convención y si existen resultados objetivos; y teniendo en cuenta lo observado se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de la República Cooperativa de Guyana analizados en este informe son: la Oficina de Auditoría de Guyana (AOG), la Dirección de la Fiscalía (DPP), las Comisiones del Servicio, en particular la Comisión del Servicio Público y la Comisión del Servicio Judicial, y la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones (NPTA).

Algunas de las recomendaciones formuladas a la República Cooperativa de Guyana en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

Dotar a la Oficina de Auditoría, a la Dirección de la Fiscalía, a la Comisión del Servicio Judicial y al Tribunal de Apelaciones del Servicio Público con los recursos presupuestales y humanos necesarios para el adecuado desempeño de sus facultades y funciones, dentro los recursos disponibles.

Considerar el establecimiento de una estrategia anticorrupción articulada, que podría incluir el establecimiento de unidades especializadas anticorrupción en el Departamento de Policía de Guyana y en la Dirección de la Fiscalía.

En relación con la Auditoría General, promover campañas de difusión entre el público en general sobre la manera en que puede colaborar con la Oficina de Auditoría en sus funciones, en especial las

de la Unidad de Auditoría Forense, para identificar y disuadir el fraude y la corrupción en Guyana; y mejorar el sitio Web de la Oficina de Auditoría incluyendo un número telefónico específico o un formato electrónico (seguro) para quejas, para las personas interesadas en presentar informes, quejas o denuncias de fraude o corrupción. Asimismo, ofrecer orientación en el sitio Web sobre la forma de enviar informes, quejas o denuncias útiles y cómo los interesados pueden obtener un seguimiento de su estado.

Con respecto a la Dirección de la Fiscalía, fortalecer las habilidades y capacidades de los funcionarios de la Dirección de la Fiscalía para procesar casos de fraude y corrupción y proveer asesoría jurídica oportuna para las investigaciones de estos casos realizadas por la Oficina de Auditoría, el Departamento de Policía y cualquier otro órgano, a través de oportunidades más amplias de capacitación a los miembros del personal de la Dirección de la Fiscalía, en especial sobre el procesamiento de actos de corrupción y la cooperación internacional conexa; e implementar mecanismos de coordinación formales entre la Policía y la Dirección de la Fiscalía, para crear procedimientos o lineamientos establecidos para dirigir las investigaciones relacionadas con actos de corrupción, de manera que se pueda colaborar más tempranamente y se preste asesoría jurídica antes de la institución de los cargos.

En relación con las Comisiones del Servicio, fortalecer la Comisión del Servicio Judicial suministrándole los recursos presupuestales y humanos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones, incluyendo la preparación y la implementación de programas de capacitación para los magistrados, jueces y funcionarios jurídicos y judiciales, dentro de los recursos disponibles; considerar modificar el Reglamento del Servicio Público en el sentido de que el hecho de que un funcionario haya sido absuelto de un cargo penal presentado en cualquier corte no impida que se instituya un proceso en su contra con base en el Reglamento del Servicio Público con respecto de un supuesto acto de mala conducta implícito en dicho cargo penal; establecer y publicar pautas y procedimientos por escrito antes de cualquier delegación de las facultades de la Comisión del Servicio Público, a fin de permitir la vigilancia y supervisión de manera que se asegure que las funciones delegadas por la Comisión se ejerzan correctamente; y reestablecer el Tribunal de Apelaciones del Servicio Público.

En lo relativo a la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones, emitir un nuevo Reglamento para la Ley de Adquisiciones 2003 a fin de establecer procedimientos y mecanismos de inhabilitación claros y eficientes, incluyendo sanciones pecuniarias, particularmente para las empresas que se determine que han pagado sobornos a cualquier funcionario o servidor público guyanés, asegurándose, a la vez, contar con salvaguardias contra la aplicación abusiva o injustificada de la sanción de inhabilitación; y mantener y publicar una lista constantemente actualizada de las empresas y particulares inhabilitados en la Gaceta Oficial así como en el sitio Web de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones y requerir que las instituciones de los tres poderes y todas las esferas del gobierno verifiquen dicha lista antes de adjudicar contratos a oferentes, proveedores, contratistas o consultores.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a la República Cooperativa de Guyana en la Primera Ronda sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por la República Cooperativa de Guyana en su respuesta al cuestionario y en la visita *in situ*, se determinó cuáles de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente, cuáles requerían atención adicional y cuáles precisaban ser

reformuladas. Se hizo además un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como Anexo I del informe.

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones se destacan: la promulgación de la Ley de Asistencia Recíproca en Materia Penal 2009 y de la Ley de Acceso a la Información 2011, así como la ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.

Algunas de las recomendaciones formuladas a la República Cooperativa de Guyana en la Primera Ronda que están todavía pendientes o se han reformulado apuntan a propósitos como: Llevar a cabo un análisis exhaustivo de las causas de los persistentes sobrepagos a contratistas y al personal señalados en los informes anuales de la Oficina de Auditoría y adoptar las medidas necesarias para hacer frente a este asunto, cerciorándose de que existan sistemas para evitar la reocurrencia de estos sobrepagos, además de perseguir vigorosamente la recuperación de los montos pagados en exceso; Hacer cumplir las sanciones existentes en la Ley de la Comisión de Integridad y considerar la implementación de sanciones adicionales y otros tipos de penas, como la inhabilitación del servicio públicos en aquellos casos en que el funcionario declarante hubiese dejado su cargo sin haber presentado la declaración final, con vistas a asegurar que las sanciones vigentes sean suficientemente disuasivas, tomando en cuenta los artículos pertinentes de la “Ley modelo sobre declaración de intereses, ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas”;<sup>1</sup> y dotar al Comisionado de Información con los recursos humanos y financieros que requiere para el desempeño adecuado de sus funciones, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos.

---

<sup>1</sup> Texto disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/model\\_law\\_declaration.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_declaration.pdf).

**COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE  
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

**INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS A DICHO PAÍS EN LA PRIMERA RONDA<sup>2</sup>**

## **INTRODUCCIÓN**

### **1. Contenido del informe**

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis integral de la implementación en la República Cooperativa de Guyana de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fue seleccionada por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Cuarta Ronda de Análisis. Dicha disposición es la prevista en el Artículo III, Párrafo 9, de la Convención, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, examinará las buenas prácticas que la República Cooperativa de Guyana ha deseado voluntariamente compartir en relación con los órganos de control superior objeto de análisis en el presente informe.

[3] En tercer lugar, como lo acordó el Comité de Expertos del MESICIC en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9(a) de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC a la República Cooperativa de Guyana en la Primera Ronda que ha estimado que requieren atención adicional en los informes que adoptó para este país en la Segunda y la Tercera Ronda, los cuales pueden consultarse en la siguiente página Web: <http://www.oas.org/juridico/spanish/guy.htm>.

### **2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo**

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República Cooperativa de Guyana depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el 15 de febrero de 2001.

[5] Asimismo, la República Cooperativa de Guyana suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el 4 de junio de 2002.

## **I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA**

### **1. Respuesta de la República Cooperativa de Guyana**

---

<sup>2</sup> El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 21 de marzo de 2014, en el marco de su Vigésima Tercera Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 18 al 21 de marzo de 2014.

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República Cooperativa de Guyana en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Oficina del Asesor Presidencial sobre Gobernanza, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. La República Cooperativa de Guyana envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos pueden consultarse en: [www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_guy.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_guy.htm).

[7] El Comité deja constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la realización de las visitas in situ*.<sup>3</sup> En su calidad de integrantes del subgrupo de análisis, los representantes de la República de Haití y la República de Trinidad y Tobago llevaron a cabo la visita *in situ* del 8 al 10 de octubre de 2013, con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la *Metodología para la realización de las visitas in situ*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República Cooperativa de Guyana hasta el día 10 de octubre de 2013 y la que le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del subgrupo de análisis, para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento*; la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda*; y la *Metodología para la realización de las visitas in situ*.

## **2. Información recibida de organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, de las organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores**

[9] El Comité también recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, un documento del Transparency Institute of Guyana Inc. (capítulo de Transparencia Internacional de Guyana). Este documento fue presentado por dicha organización de conformidad con lo previsto en el artículo 34(b) del Reglamento del Comité.<sup>4</sup>

[10] Asimismo, con ocasión de la visita *in situ* al país analizado, se recabó información de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado y de asociaciones profesionales que fueron invitadas a participar en las reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la realización de las visitas in situ*. Se incluye una lista de los invitados en la agenda de dicha visita, que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo.

## **II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA**

---

<sup>3</sup> Documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, que puede consultarse en la siguiente página Web: [http://www.oas.org/juridico/english/met\\_onsite.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/met_onsite.pdf).

<sup>4</sup> El documento se presentó en formato electrónico el 20 de junio de 2013 y está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_sc.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_sc.pdf).

## **ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)**

[11] La República Cooperativa de Guyana cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que cabe destacar los siguientes: la Oficina de Auditoría de Guyana, la Dirección de la Fiscalía, las Comisiones de Servicio y el Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones.

[12] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cuatro órganos seleccionados por la República Cooperativa de Guyana que serán analizados en el presente informe:

[13] La Oficina de Auditoría, responsable de la auditoría de las cuentas públicas de Guyana y de todos los funcionarios y autoridades del Gobierno de Guyana (incluyendo las Comisiones establecidas por la Constitución) y de las cuentas del Secretario de la Asamblea Nacional y de todas las cortes del país.

[14] La Dirección de la Fiscalía, responsable de instituir y llevar a cabo los procesos penales contra cualquier persona ante cualquier corte, excepto los tribunales militares, con respecto a cualquier infracción de las leyes de Guyana.

[15] Las Comisiones de Servicio, integradas por la Comisión del Servicio Público, la Comisión del Servicio de Policía, la Comisión del Servicio Judicial y la Comisión del Servicio de Docencia, responsables de nombrar, ascender, transferir, confirmar y destituir a funcionarios públicos bajo su ámbito, así como ejercer control disciplinario sobre ellos.

[16] El Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones, cuya misión es facilitar el establecimiento y la implementación de un entorno normativo que favorezca la transparencia, la economía, la eficiencia, la apertura, la justicia y la rendición de cuentas en las adquisiciones del sector público; maneja las adquisiciones de bienes y servicios en Guyana de acuerdo con lo previsto en la Ley de Adquisiciones

### **1. LA OFICINA DE AUDITORÍA DE GUYANA**

#### **1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.**

[17] La Oficina de Auditoría de Guyana cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[18] En relación con sus objetivos y funciones, el artículo 223 de la Constitución de la República Cooperativa de Guyana establece que las cuentas públicas de Guyana y de todos los funcionarios y autoridades del Gobierno de Guyana (incluyendo las Comisiones establecidas por la Constitución) y las cuentas del Secretario de la Asamblea Nacional y de todas las cortes en el país, deberán ser auditadas por el Auditor General, quien deberá rendir informes al respecto. El Auditor General le

entregará sus informes al Presidente de la Asamblea Nacional, quien se encargará de que se presenten ante la Asamblea Nacional.<sup>5</sup>

[19] La Ley de Auditoría 2004<sup>6</sup> dispone, en su artículo 4, que el Auditor General será el auditor externo de las cuentas públicas de Guyana y, en el desempeño de sus funciones, dispondrá de facultades discrecionales plenas para examinar y rendir informes sobre la recepción, el desembolso y el control de los fondos públicos y de la economía, eficiencia y eficacia en el uso de tales fondos.

[20] La Ley de Auditoría 2004 establece además, en su artículo 24, que, como auditor externo de las cuentas públicas de Guyana, el Auditor General será responsable de realizar (a) auditorías financieras y de cumplimiento;<sup>7</sup> y (b) auditorías de desempeño y valor por dinero,<sup>8</sup> con respecto a (i) los estados financieros consolidados;<sup>9</sup> (ii) las cuentas de todas las agencias consideradas en el presupuesto; (iii) las cuentas de todos los órganos gubernamentales locales; (iv) las cuentas de todos los órganos y entidades en los que el Estado tiene participación mayoritaria; y (v) las cuentas de todos los proyectos financiados mediante préstamos o subvenciones de cualquier Estado u organismo extranjero.

[21] Asimismo, el artículo 25(1) de la Ley de Gestión y Auditorías Financieras<sup>10</sup> dispone que “*el Auditor General examinará de la manera que considere necesaria las cuentas de todos los funcionarios contables y receptores principales de ingresos, y de todas las personas encargadas de la recaudación, recepción, custodia, emisión o pago de fondos públicos o de la recepción, custodia, emisión, venta, transferencia o entrega de sellos, valores, suministros u otros bienes del erario*”.

[22] Según el artículo 74(2) de la Ley de Administración Fiscal y Rendición de Cuentas 2003, el Auditor General debe entregar los estados financieros consolidados dentro de un plazo de nueve meses del final del ejercicio fiscal al que corresponden, junto con el informe de auditoría respectivo

---

<sup>5</sup> Constitución de la República Cooperativa de Guyana, [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_constitution.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_constitution.pdf).

<sup>6</sup> Ley de Auditoría 2004, [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2\\_guy\\_audit\\_act\\_2004.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_guy_audit_act_2004.pdf).

<sup>7</sup> Según la sección 24(2) de la Ley de Auditoría 2004, “*En la realización de las auditorías financieras y de cumplimiento, el Auditor General examinará de la manera que considere necesaria los estados financieros y cuentas correspondientes y verificará que: (a) los estados financieros se hayan preparado correctamente, de acuerdo con la legislación aplicable, y que presenten correctamente las operaciones y negocios del organismo en cuestión; (b) la contabilidad se haya llevado fiel y correctamente; (c) las reglas, procedimientos y controles administrativos internos sean suficientes para asegurar el control eficaz de la valuación, cobranza y asignación correcta de los ingresos; (d) todos los fondos que se hayan gastado y cargado a una cuenta se hayan aplicado para el fin o fines para los que se hayan programado; y (e) se mantengan los registros esenciales, y los controles administrativos internos y las reglas y procedimientos establecidos y aplicados sean suficientes para salvaguardar el control de suministros y otros bienes públicos.*”

<sup>8</sup> Según la sección 24(3) de la Ley de Auditoría 2004, “*Durante la realización de auditorías de desempeño y valor por dinero, el Auditor General examinará en qué está aplicando sus recursos el organismo público y si está llevando a cabo sus actividades económicas eficaz y eficientemente, con la debida atención a asegurar el control administrativo interno.*”

<sup>9</sup> Según la sección 73(3) y (4) de la Ley de Administración Fiscal y Rendición de Cuentas 2003, el Ministro de Finanzas debe entregarle los estados financieros consolidados al Auditor General dentro de los cuatro meses siguientes al final del ejercicio fiscal al que corresponden. Si el Ministro no le ha presentado los estados financieros consolidados al Auditor General dentro de los cuatro meses siguientes al final del ejercicio fiscal al que corresponden, el Ministro debe suministrarle a la Asamblea Nacional una declaración sobre las razones por las que no se le han entregado los estados financieros consolidados al Auditor General.

<sup>10</sup> La Ley de Administración Fiscal y Rendición de Cuentas 2003, sección 86, deroga las partes II, III y V de la Ley de Gestión y Auditorías Financieras. Sin embargo, también dispone que “*todas las leyes subsidiarias y las circulares expedidas con base en la Ley de Gestión y Auditorías Financieras vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, en tanto no sean incongruentes con la misma, mantendrán su vigencia como si hubieran sido expedidas con base en esta Ley mientras no sean enmendadas, sustituidas o derogadas con base en esta Ley*”.



y, de acuerdo con la ley, al Presidente de la Asamblea Nacional, quien se encargará de que se presenten ante la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 223(3) de la Constitución.

[23] Hay dos excepciones a las funciones del Auditor General, que figuran en el artículo 223 de la Constitución de la República Cooperativa de Guyana: (1) el gobierno puede promover la realización de una auditoría adicional por otro auditor que no sea el Auditor General cuando así lo dicte un acuerdo celebrado entre el gobierno y una institución financiera internacional; y (2) el Ministro responsable de las finanzas puede solicitar que el Comité de Contabilidad Pública<sup>11</sup> promueva la realización de una auditoría adicional por otro auditor que no sea el Auditor General. Durante la visita *in situ*, el Auditor General informó que estas dos excepciones no se han ejercido en los últimos cinco (5) años.

[24] Según el artículo 223(4) de la Constitución, el Auditor General, en el ejercicio de sus funciones, no está sujeto a la dirección ni al control de ninguna persona o autoridad. No obstante, el artículo 223(5) de la Constitución establece que el Comité de Contabilidad Pública puede ejercer supervisión general sobre el funcionamiento de la Auditoría General, de conformidad con el Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos para el funcionamiento de la Auditoría General, producido por el Auditor General y aprobado por el Comité de Contabilidad Pública.

[25] El artículo 223(2) de la Constitución dispone asimismo que el desempeño de su trabajo, el Auditor General o cualquier persona autorizada por él para ello, tendrá acceso a todos los libros, registros, declaraciones y demás documentos relativos a dichas cuentas. Los artículos 30 a 34 de la Ley de Auditoría 2004 detallan más las atribuciones del Auditor General al respecto. Por ejemplo, en el ejercicio de sus funciones, el Auditor General está facultado para requerir que un órgano público o cualquier funcionario o empleado de un órgano público, entregue un documento que se encuentre bajo la custodia, cuidado o control de dicho organismo o persona y que le suministre al Auditor General información o explicaciones sobre cualquier dato. El artículo 32 faculta al Auditor General, durante el desempeño de sus funciones, para exigir que una persona presente pruebas, ya sea oralmente o por escrito.

[26] Adicionalmente, el artículo 33 de la Ley de Auditoría 2004 autoriza al Auditor General, para los fines del desempeño de sus funciones, a examinar o auditar las cuentas de cualquier persona en cualquier banco si tiene motivos para creer que *“se han depositado fondos pertenecientes a un órgano público fraudulenta o irregularmente a la cuenta de dicha persona, salvo que: (a) para ejercer esta facultad, el Auditor General dejará claro que la información obtenida no se utilizará para ningún otro propósito y deberá obtener previamente una orden de la corte que autorice dicho examen; (b) cuando se le presente la orden, el banco, a través de su funcionario, deberá entregar cualquier documento o suministrar la información solicitada en relación con la cuenta respectiva; y (c) el Auditor General podrá hacer copias de cualquier documento entregado con esta base”*.

[27] De conformidad con el artículo 4(1) del Reglamento de la Ley de Auditoría 2004, la Oficina de Auditoría consta de las siguientes divisiones: (a) División de Recursos Humanos; (b) División de

---

<sup>11</sup> De acuerdo con la sección 82 del Reglamento de la Asamblea Nacional, el Comité de Contabilidad Pública (PAC) es un Comité Permanente integrado por no menos de seis (6) ni más de diez (10) miembros, presidido por el miembro de la oposición principal en la Asamblea. El Comité de Contabilidad Pública tiene el deber de examinar la contabilidad relativa a la apropiación de los montos otorgados por la Asamblea para cubrir los Gastos Públicos y demás cuentas presentadas a la Asamblea que la Asamblea le remita al Comité junto con el informe respectivo del Auditor General.

Finanzas y Contabilidad; (c) División de Tecnología de Información; y (d) División de Operaciones de Auditoría. El artículo 4(2) faculta al Auditor General a establecer en la Oficina de Auditoría las divisiones adicionales que considere convenientes para la realización de sus funciones.

[28] Asimismo, el artículo 8(1) del Reglamento de la Ley de Auditoría de 2004 señala que: “*El Auditor General establecerá una Unidad de Auditoría Forense al interior de la Oficina de Auditoría.*” Durante la visita *in situ*, el Auditor General explicó que esta unidad se estableció en 2008.

[29] El artículo 204(1) de la Constitución dispone que el Auditor General es designado por el Presidente actuando de acuerdo con la asesoría de la Comisión del Servicio Público. El Artículo 204(2) establece además que si el cargo de Auditor General queda vacante o su ocupante por cualquier razón es incapaz de cumplir las funciones del puesto, el Presidente, actuando de acuerdo con la asesoría de la Comisión del Servicio Público, puede nombrar a una persona para que ocupe el cargo interinamente, y cualquier persona así nombrada continuará ocupándolo hasta que se designe a una persona para el puesto de Auditor General y dicha persona haya asumido las funciones del cargo o, según sea el caso, hasta que el ocupante del mismo haya reasumido dichas funciones. El artículo 204(3) dispone que el Auditor General debe dejar su cargo cuando alcance la edad prescrita por el Parlamento.<sup>12</sup> Los artículos 204(4) y 225(2) disponen además que el Auditor General puede ser destituido de su cargo solamente por incapacidad para desempeñar las funciones de su puesto (ya sea por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa de cualquier índole) o por mala conducta. Los detalles de los procedimientos de destitución se establecen en los artículos 204(4) y 225(3)(4)(5) y (6) de la Constitución.

[30] Además, el artículo 6(1) de la Ley de Auditoría 2004 prohíbe que el Auditor General desempeñe cualquier papel oficial directo o indirecto en cualquier institución privada o profesional así como cualquier actividad de la cual podría extraer beneficios o en la cual podría influir a través de sus atribuciones como Auditor General y requiere que declare ante el Comité de Contabilidad Pública cualquiera de sus compromisos, obligaciones o inversiones que pudiera presentar un conflicto de intereses real o percibido.

[31] Con respecto al personal del Auditor General, el artículo 12 de la Ley de Auditoría 2004 faculta al Auditor General a establecer e implementar sistemas y políticas de gestión de recursos humanos. El artículo 13 dispone además que el Auditor General producirá descripciones de puestos con competencias, responsabilidades y expectativas de desempeño claramente establecidas para todos los cargos de la Oficina de Auditoría.

[32] Según el artículo 14(1) de la Ley de Auditoría 2004, dentro del marco del presupuesto aprobado para la Oficina de Auditoría, el Auditor General evaluará las necesidades de dotación de personal y nombrará, pagará, capacitará, asignará, ascenderá y disciplinará a los funcionarios y empleados de conformidad con la Constitución, la Ley de Auditoría, el Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos y cualquier otra ley. Sin embargo, el nombramiento y la disciplina de todos los altos funcionarios y altos empleados en la Oficina de Auditoría están sujetos a la aprobación del Comité de Contabilidad Pública.

---

<sup>12</sup> Durante la visita *in situ*, el Auditor General explicó que la sección 8 de la Ley de Auditoría 2004 establece que “*el sueldo, la pensión, las prestaciones y otras condiciones de servicio del Auditor General serán los mismos que los del Presidente de la Corte*”. Así pues, el Auditor General deberá dejar su puesto al alcanzar los sesenta y cinco (65) años de edad, la misma edad de jubilación que se prescribe para el Presidente de la Corte en la sección 197 de la Constitución.

[33] Según el artículo 17(1) de la Ley de Auditoría 2004, los funcionarios y empleados de la Oficina de Auditoría no son funcionarios públicos y no forman parte de la nómina del servicio público pensionable. De acuerdo con el artículo 14(2), son nombrados con la remuneración y bajo los demás términos y condiciones que el Auditor General decida, dentro del marco del presupuesto aprobado para la Oficina de Auditoría, tomando en consideración el Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos.<sup>13</sup> El Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos (volúmenes I-IV) incluye los cargos, sus descripciones de puesto correspondientes y las competencias requeridas,<sup>14</sup> además de establecer el proceso para la selección de los funcionarios y empleados de la Oficina de Auditoría.<sup>15</sup>

[34] El trabajo de la Oficina de Auditoría está organizado en tres unidades operativas:<sup>16</sup> (a) la Unidad de Negocios I, que actualmente comprende las Unidades Forense y de Control de Calidad, de Auditorías Sindicales y las Divisiones 1 y 2 de Operaciones de Auditoría; (b) la Unidad de Negocios II, que comprende la División de Finanzas y Contabilidad, el Departamento de Recursos Humanos, la División de Tecnología de Información y las Divisiones 4, 5 y 6 de Operaciones de Auditoría (responsables de las auditorías de los ministerios y departamentos); y (c) la Unidad de Negocios III, que comprende las Divisiones 7, 8 y 9 de Operaciones de Auditoría, así como la supervisión y revisión de las auditorías contratadas a Contadores Certificados en la Práctica Pública, las auditorías de las empresas públicas, instituciones estatutarias, consejos democráticos regionales, municipales y vecinales.<sup>17</sup>

[35] El Auditor General informó además que al 7 de octubre de 2013 se han aprobado 227 puestos para la Oficina de Auditoría y 212 de ellos se han cubierto. Se prevé cubrir los 15 puestos restantes en los próximos meses e incluir, entre otros, un puesto de Director de Auditoría,<sup>18</sup> un puesto de Director de Obras y Estructuras, un puesto de Subgerente de Recursos Humanos y cuatro puestos de Gerentes de Auditoría. Adicionalmente, la Oficina de Auditoría contrata a dos consultores, uno de los cuales (el gerente interino) es investigador de fraudes. Además del investigador de fraudes, la Unidad de Auditoría Forense tiene ocho (8) empleados.<sup>19</sup>

[36] En cuanto a disciplina, todos los empleados de la Oficina de Auditoría están sujetos al Código de Ética publicado por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y a los Códigos de Ética publicados por la Federación Internacional de Contadores (IFAC),<sup>20</sup> así como al código sobre conflictos de intereses de la Oficina de Auditoría,<sup>21</sup> y al código

---

<sup>13</sup> Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos (RPP) de la Oficina de Auditoría de Guyana, [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_manual.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_manual.pdf).

<sup>14</sup> *Ibid.*, volumen III.

<sup>15</sup> *Ibid.*, págs. 87 a 95.

<sup>16</sup> El organigrama de la Oficina de Auditoría de Guyana está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_app5.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_app5.pdf).

<sup>17</sup> A fin de eliminar cualquier inquietud relacionada con conflictos de intereses, durante la visita *in situ* se informó que el Director de Auditoría responsable de la Unidad de Negocios III no revisa las auditorías ni los informes relativos a entidades que caen dentro del ámbito del Ministerio de Finanzas o del Ministro de Finanzas.

<sup>18</sup> Responsable de la Unidad de Negocios I, encabezada actualmente por el Auditor General mismo.

<sup>19</sup> Plan de Trabajo Anual y Programa para el año 2013 de la Oficina de Auditoría de Guyana, [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_annual13.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_annual13.pdf). Se informó además que los funcionarios de la Unidad de Auditoría Forense están intentando obtener su certificación profesional en Auditoría de Fraudes y Contabilidad Forense. Dos de los empleados han completado desde entonces el curso de certificación en Auditoría de Fraudes y Contabilidad Forense.

<sup>20</sup> Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos (RPP) de la Oficina de Auditoría de Guyana, pág. 19.

<sup>21</sup> *Ibid.*, págs. 54-59.

disciplinario,<sup>22</sup> que prevé las siguientes medidas disciplinarias: advertencia oral, advertencia escrita, advertencia final, suspensión y destitución.<sup>23</sup>

[37] Con respecto a capacitación, la División de Recursos Humanos de la Oficina de Auditoría es responsable de la capacitación del personal de dicha Oficina. Durante la visita *in situ*, el Auditor General suministró una lista de todas las actividades de capacitación entre 2010 y 2013 en que participó el personal de la Oficina de Auditoría, que incluyeron “La auditoría basada en riesgos” y “El Software IDEA”. Asimismo, se suministró información detallada sobre las actividades de capacitación específicas en que participaron los funcionarios de Unidad de Auditoría Forense, así como el Auditor General, que incluyeron diversos cursos en Contabilidad Forense y un Programa de Certificación de Posgrado en Investigaciones de Fraudes que se ha impartido los últimos tres años con el Algonquin College de Canadá.<sup>24</sup>

[38] En relación con la existencia de procedimientos documentados para el desempeño de sus tareas, el Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos de la Oficina de Auditoría contiene, entre otras cosas, una sección que detalla los procedimientos para la realización del trabajo de la Oficina de Auditoría, así como las normas de auditoría y contabilidad adoptadas en Guyana.<sup>25</sup> Durante la visita *in situ* también se informó que la Unidad de Auditoría Forense adoptó un manual de mejores prácticas escrito por un consultor internacional, un exfuncionario superior de la Sección de Auditoría Forense de la Auditoría General de Canadá.

[39] Con respecto a la implementación de sistemas o tecnologías modernas para facilitar su trabajo, el Auditor General, durante la visita *in situ*, informó que su Oficina utilizaba varios programas de software de auditoría que les permitían a los auditores aplicar técnicas de extracción de datos de la información suministrada, como el “CaseWare IDEA”.<sup>26</sup> El Auditor General informó asimismo que este software se usa actualmente para ayudar a la Oficina de Auditoría en sus investigaciones, pues les permite a los auditores forenses desplegar, muestrear, extraer y analizar datos de archivos generados por una amplia variedad de sistemas.

[40] A fin de mantener a los ciudadanos informados sobre sus actividades, la Oficina de Auditoría tiene un sitio Web<sup>27</sup> que, entre otras cosas, incluye información general sobre el trabajo de la Oficina de Auditoría, su legislación e informes anuales.

[41] La Oficina de Auditoría no tiene una unidad de auditoría interna. Sin embargo, el artículo 44 de la Ley de Auditoría 2004 dispone que el Comité de Contabilidad Pública “*deberá nombrar, para cada ejercicio fiscal, un auditor independiente para que audite e informe sobre los estados financieros, la contabilidad y otra información relacionada con el desempeño de la Oficina de Auditoría durante dicho ejercicio*”.<sup>28</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, págs. 62-72.

<sup>23</sup> *Ibid.*, págs. 64 y 65. El Apéndice A contiene una lista de infracciones y sanciones (págs. 69-71).

<sup>24</sup> Esta información está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_fraud.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_fraud.pdf).

<sup>25</sup> Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos (RPP) de la Oficina de Auditoría de Guyana, págs 18-50. Las Normas de Auditoría de la Oficina de Auditoría son todas las normas adoptadas por el Instituto de Contadores Certificados de Guyana, incluyendo las de la INTOSAI.

<sup>26</sup> Esta información está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_fraud.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_fraud.pdf).

<sup>27</sup> <http://www.audit.org.gy/>.

<sup>28</sup> Durante la visita *in situ* se entregó una copia de los estados financieros auditados de la Oficina de Auditoría para 2012, que está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_opinion.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_opinion.pdf).

[42] Con respecto a la manera en que se aseguran los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, el artículo 40 de la Ley de Auditoría 2004 regula la preparación y la presentación de la propuesta de presupuesto anual de la Oficina de Auditoría. En este sentido, el país analizado señala en su respuesta al cuestionario que: *“La propuesta de presupuesto anual y el programa de trabajo se le presentan al Comité de Contabilidad Pública en julio o agosto de cada año y son aprobados y remitidos al Ministro de Finanzas para la asignación de los fondos respectivos en el nuevo ciclo presupuestal. La Oficina de Auditoría rinde informes trimestrales al Comité de Contabilidad Pública sobre su programa de trabajo y sus gastos anuales. Es importante reiterar que las enmiendas constitucionales eliminaron la obligación de la Oficina e Auditoría de rendir informes al Ministerio de Finanzas y en su lugar informa directamente a la Asamblea Nacional a través del Presidente de la Asamblea.”*<sup>29</sup>

[43] Según la información solicitada y recibida durante la visita *in situ*, el presupuesto anual total (presupuesto corriente más presupuesto de capital) asignado a la Oficina de Auditoría en cada uno de los últimos cinco años es el siguiente (en dólares guyaneses):<sup>30</sup> G\$313.998.000 (2009); G\$407.280.000 (2010); G\$443.205.000 (2011); G\$539.258.000 (2012); y G\$ 606.983.000 (2013).<sup>31</sup>

[44] Con respecto a los mecanismos de coordinación para armonizar las funciones de la Oficina de Auditoría con otros órganos de control superior o autoridades públicas, además de la estrecha coordinación con el Comité de Contabilidad Pública a la que se hizo referencia en otros párrafos, durante la visita *in situ* se informó que la Oficina de Auditoría también trabaja en contacto estrecho con la Dirección de la Fiscalía y con el Comisionado de Policía.

[45] En este sentido, el artículo 38 de la Ley de Auditoría 2004 establece que si el Auditor General tiene motivos para creer que se ha cometido cualquiera de los delitos descritos en el artículo 37 de dicha Ley,<sup>32</sup> les solicitará al Director de la Fiscalía y al Comisionado de Policía que adopten las medidas pertinentes y sometan al infractor a juicio en caso necesario.

[46] Asimismo, el artículo 8(2) del Reglamento de la Ley de Auditoría de 2004 señala que: *“Cuando se remita cualquier asunto a la Unidad de Auditoría Forense, dicha unidad lo investigará cabalmente y le entregará un informe con sus recomendaciones al Auditor General, quien, si se ha cometido un delito penal, le remitirá el asunto al Director de la Fiscalía y le enviará una copia al Comisionado de Policía para que se adopten las medidas pertinentes.”*

[47] En relación con la transparencia y la rendición de cuentas, según el artículo 223(6) y (7) de la Constitución y los artículos 42 y 43 de la Ley de Auditoría 2004, el Auditor General deberá preparar y presentar ante Comité de Contabilidad Pública informes trimestrales sobre el desempeño y la operación de la Auditoría General, en el formato de una Declaración de Desempeño Programático;

<sup>29</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 17.

<sup>30</sup> 1 dólar estadounidense = 200 dólares guyaneses (al 1º de noviembre de 2013).

<sup>31</sup> La información completa sobre el presupuesto de la Oficina de Auditoría está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_budget.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_budget.pdf).

<sup>32</sup> La sección 37 de la Ley de Auditoría 2004 establece que estará cometiendo un delito quien intencionalmente y sin justificación o excusa legal: (a) intencionalmente obstruye, obstaculiza o se opone al Auditor General o a un funcionario autorizado por él en el ejercicio de sus facultades de acuerdo con esta Ley; (b) intencionalmente se niega a cumplir o incumple cualquier requisito legal del Auditor General; (c) hace una declaración o le presenta información al Auditor General o a un funcionario autorizado por él sabiendo que dicha declaración o información es falsa o engañosa; (d) declara directa o indirectamente que dicha persona tiene cualquier atribución con base en esta ley cuando sabe que no cuenta con dicha atribución; o (e) contraviene o viola las disposiciones de la sección 35 (que se refiere a la publicación o divulgación no autorizada de información obtenida durante el curso de una auditoría).

además, dentro de un plazo de los cuatro meses siguientes al final de cada ejercicio fiscal, una copia de un Informe Anual de Auditoría de Sistemas y Financiera con respecto a la Auditoría General al Comité de Contabilidad Pública.<sup>33</sup>

[48] Asimismo, el Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos de la Oficina de Auditoría requiere un Plan Estratégico Trienal de la Oficina de Auditoría, que debe actualizarse anualmente. Este Plan Estratégico incluye, entre otras cosas, la identificación de asuntos nacionales importantes en relación con los cuales la Oficina de Auditoría puede contribuir en forma significativa, el establecimiento de objetivos plurianuales de auditoría para cumplir los requisitos del Comité de Contabilidad Pública y un marco para medir los logros de la Oficina de Auditoría.<sup>34</sup>

## **1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas.**

[49] La Oficina de Auditoría de Guyana cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas.

[50] En primer lugar, el Comité observa que la legislación guyanesa no indica durante cuánto tiempo puede permanecer vacante el cargo del Auditor General. Durante la visita *in situ* se informó que el Auditor General actual fue confirmado en su puesto apenas en 2012, tras haberlo ocupado interinamente durante los siete (7) años anteriores. El Comité observa además que, a diferencia de otros altos puestos públicos de control superior, que requieren consultas importantes con el Líder de la Oposición, el Auditor General es designado por el Presidente con la asesoría de la Comisión del Servicio Público.

[51] El Comité estima que no contar con un Auditor General designado durante un lapso tan largo no contribuye a la independencia o al fortalecimiento de este órgano de control superior, ni es justo para la persona que ocupa el puesto interinamente. Tomando en cuenta que se trata de un asunto constitucional, el Comité se limita a tomar nota de la situación.

[52] En relación con el tema anterior, durante la visita *in situ*, el representante del Instituto de Transparencia de Guyana<sup>35</sup> señaló que: *“La Constitución dispone que debe haber un Auditor General para Guyana. Según nuestra interpretación, este requisito significa que se debe nombrar al ocupante de este puesto permanentemente, y que cualquier designación interina debe ser por un plazo corto, generalmente no mayor de seis meses, a fin de que se disponga del tiempo suficiente para seleccionar adecuadamente al sustituto del ocupante anterior del cargo. Con este requisito se preserva la independencia del Auditor General, uno de los conceptos fundamentales de la auditoría. Cualquier designación interina prolongada ejercería presión sobre el Auditor General para que fuera (sic) tan crítico como desee de las operaciones del gobierno, pues depende del gobierno para seguir ocupando interinamente el cargo y posiblemente para su nombramiento permanente en algún momento futuro. Antes de ser nombrado permanentemente el año pasado, el Auditor General ocupó el puesto interinamente durante ocho años (...)”*

---

<sup>33</sup> Durante la visita *in situ* se entregó una copia del Plan y Programa Anual 2013 de la Oficina de Auditoría, que está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_guy.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_guy.htm).

<sup>34</sup> Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos (RPP) de la Oficina de Auditoría de Guyana, pág. 20.

<sup>35</sup> Véase la presentación del Instituto de Transparencia de Guyana, págs. 2 y 3. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_trans.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_trans.pdf).

[53] En segundo lugar, en relación con el presupuesto de la Oficina de Auditoría, el Comité observa que aunque se ha ido incrementando modestamente en los últimos cinco años, apenas representa aproximadamente el 0,2% del presupuesto nacional. Durante la visita *in situ*, el Auditor General informó que la situación no es crítica porque la Oficina de Auditoría recibe donaciones de instituciones internacionales. Sin embargo, se observó que una vez que se agote esta fuente de financiamiento, será necesario un presupuesto complementario, en especial para mantener y actualizar su infraestructura de tecnología informática.

[54] El Comité observa además que la respuesta del país analizado al cuestionario<sup>36</sup> señala que la *“Oficina de Auditoría logró cubrir más del 80% de sus necesidades de dotación de personal en 2012. Sin embargo, el tamaño del país y el acceso a las 10 Regiones Administrativas, así como el tamaño reducido de la población, plantean múltiples desafíos para completar a tiempo los informes de auditoría anuales, así como para llevar a cabo auditorías especiales, en especial cuando se verifican obras físicas en el terreno en las zonas remotas del país”*. Durante la visita *in situ*, el Auditor General subrayó, sin embargo, que el aumento continuo del personal en los últimos años ha contribuido inmensamente al éxito de la Oficina para cumplir con sus plazos estatutarios y que la Oficina sigue esforzándose para llegar a tener al día las contabilidades auditadas de todas las entidades.

[55] Asimismo, el Comité observa que durante la visita *in situ*, los representantes de la Oficina de Auditoría indicaron la necesidad de un abogado ‘interno’ para que se encargara de las tareas jurídicas rutinarias.

[56] Por lo antes expuesto, el Comité estima que la Oficina de Auditoría, en especial su Unidad de Auditoría Forense (responsable de la investigación de fraudes y corrupción) podría fortalecerse más para aumentar la capacidad de la Oficina para investigar y descubrir fraudes y corrupción en Guyana. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.1 en la sección 1.4 de este informe).

[57] En tercer lugar, el Comité observa que los informes anuales de la Oficina de Auditoría al Comité de Contabilidad Pública se publican en la página Web de este órgano de control superior. Sin embargo, el Comité observa además que algunos documentos importantes de rendición de cuentas elaborados por la Oficina de Auditoría, como sus planes estratégicos trianuales y las correspondientes actualizaciones anuales, así como los informes de los auditores independientes a los miembros del Comité de Contabilidad Pública, no están disponibles en el sitio Web. Tomando en cuenta que la publicación de estos documentos aumentaría más la transparencia y la rendición de cuentas de la Oficina de Auditoría, el Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.2 en la sección 1.4 de este informe).

[58] En cuarto lugar, a pesar de la afirmación contenida en la respuesta del país analizado al cuestionario<sup>37</sup> en el sentido de que en el sitio Web de la Oficina de Auditoría es posible enviar informes o denuncias, el Comité observa que este sitio Web solamente contiene una sección de “Contacto”.<sup>38</sup> No hay un número telefónico específico ni un formato electrónico (seguro) para quejas. Asimismo, no se presenta información u orientación sobre la forma de enviar tales informes, quejas o denuncias de corrupción. Tomando en consideración la importancia de las líneas directas para

---

<sup>36</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, págs. 23-24.

<sup>37</sup> *Ibid.*, pág. 16.

<sup>38</sup> <http://www.audit.org.gy/contactaog.html>.



detectar y prevenir el fraude, así como la importancia de que el público en general sepa de su existencia, el Comité formulará una recomendación (ver recomendaciones 1.4.3 y 1.4.4 en la sección 1.4 de este informe).

[59] En este sentido, cabe señalar que durante la visita *in situ*, el Auditor General y algunas organizaciones de la sociedad civil subrayaron la importancia de la legislación integral de protección de denunciantes para alentar al público a denunciar y contribuir a las funciones de la Oficina de Auditoría de prevenir y disuadir el fraude y la corrupción en Guyana.

[60] Dado que el tema de los sistemas para proteger a los servidores públicos y ciudadanos particulares que denuncian de buena fe actos de corrupción se analizó detalladamente en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis del MESICIC,<sup>39</sup> el Comité no formulará una nueva recomendación al respecto, pero reitera las recomendaciones contenidas en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis del MESICIC.<sup>40</sup>

[61] En quinto lugar, el Comité observa que la Ley de Auditoría 2004 faculta al Auditor General a establecer e implementar sistemas y políticas de gestión de recursos humanos, incluyendo el nombramiento y la selección de todo el personal de la Oficina de Auditoría, con excepción de los altos funcionarios, los cuales están sujetos a la aprobación del Comité de Contabilidad Pública. El Comité observa además que el Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos contiene algunas reglas relativas al proceso de selección del personal de la Oficina de Auditoría.<sup>41</sup>

[62] Sin embargo, estas reglas internas prevén una excepción importante al concurso abierto, en los siguientes términos: *“Los cargos en la Oficina de Auditoría normalmente se cubrirán a través de un sistema de anuncios públicos. Las personas interesadas deberán enviar sus solicitudes directamente a la Oficina de Auditoría. Sin embargo, podría haber situaciones en que la Oficina de Auditoría reciba solicitudes que no se hayan enviado en respuesta a un anuncio público. En la medida en que haya vacantes y el solicitante cumpla con los requisitos del cargo, el Auditor General podrá hacer una oferta de empleo”*.

[63] Durante la visita *in situ* se informó sobre el número de reclutamientos y ascensos y sobre la baja en la tasa de rotación del personal de la Oficina de Auditoría, del 9,3% en 2010 al 5,7% en 2012. Sin embargo, no se suministró información sobre el porcentaje de concursos abiertos para puestos en la Oficina de Auditoría en comparación con las contrataciones directas.

[64] Dado que el tema de los sistemas para la contratación de funcionarios públicos se analizó detalladamente en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis del MESICIC,<sup>42</sup> el Comité no formulará una nueva recomendación al respecto, pero reitera las recomendaciones contenidas en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis del MESICIC,<sup>43</sup> especialmente la necesidad de adoptar, a través de los procedimientos jurídicos y/o administrativos que correspondan, disposiciones que

---

<sup>39</sup> Véase el “Informe Relativo a la Implementación en la República Cooperativa de Guyana de las Disposiciones de la Convención Seleccionadas para ser Analizadas en la Segunda Ronda”, págs. 11, 12 y 21. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic\\_II\\_inf\\_guy\\_en.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic_II_inf_guy_en.pdf).

<sup>40</sup> *Ibid.*, pág. 21.

<sup>41</sup> Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos de La Oficina de Auditoría de Guyana, págs. 87 a 95.

<sup>42</sup> Véase el “Informe Relativo a la Implementación en la República Cooperativa de Guyana de las Disposiciones de la Convención Seleccionadas para ser Analizadas en la Segunda Ronda”, págs. 2, 5 y 19. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic\\_II\\_inf\\_guy\\_en.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic_II_inf_guy_en.pdf).

<sup>43</sup> *Ibid.*, págs. 18 y 19.



reglamenten la contratación de servidores públicos para la Auditoría General, basadas en los principios de méritos e igualdad y que ofrezcan criterios claramente definidos sobre la forma de llevar a cabo los exámenes y la publicación de las vacantes.

[65] En sexto lugar, durante la visita *in situ*, el Comité recibió información detallada sobre las actividades de capacitación en que participó el personal de la Oficina de Auditoría en los últimos tres años. A pesar de una pequeña reducción en el número de actividades de capacitación en 2012, el Comité observa un compromiso general de la Oficina de Auditoría para la capacitación de su personal, en especial los empleados de la Unidad de Auditoría Forense, dos de los cuales están en proceso de obtener la certificación de Examinadores de Fraudes Certificados (CFE).

[66] Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes del Instituto de Transparencia y del Instituto de Contadores Certificados de Guyana (ICAG) informaron que el personal de la Oficina de Auditoría incluye a tres contadores profesionalmente calificados, con autorización para auditar empresas controladas por el Estado. El artículo 170 de la Ley de Empresas exige que un auditor sea miembro del ICAG y posea un certificado de ejercicio para que se le autorice a auditar a empresas (incluidas las controladas por el Estado).

[67] En este sentido, el Comité estima que la Oficina de Auditoría debería suministrar apoyo e incentivos a su personal actual para que obtenga estas certificaciones contables profesionales<sup>44</sup> y/o considerar tomar en cuenta estas certificaciones en la selección futura de su personal. El Comité formulará la recomendación correspondiente (ver recomendación 1.4.5 en la sección 1.4 de este informe).

[68] En séptimo lugar, durante la visita *in situ*, el Auditor General señaló que la Oficina también trabaja estrechamente con la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Caribe (CAROSAI). Al respecto, informó que prevén cooperar el año próximo en una auditoría del IVA. El Auditor General informó además que la Oficina de Auditoría está dispuesta a sujetarse a una revisión en el marco del programa de revisión por pares de la CAROSAI sobre control de calidad y que están trabajando para llevarla a cabo, posiblemente con la Oficina de Auditoría de Trinidad y Tobago. Sin embargo, a pesar de un acercamiento inicial por parte de la Oficina del Auditor General, esta revisión por pares no se había podido materializar todavía. Tomando en cuenta la importancia de estos programas para verificar la calidad de los informes de auditoría de las instituciones de fiscalización superior, el Comité sugiere enfáticamente que la Oficina de Auditoría fortalezca sus esfuerzos para participar en esta revisión por pares. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.6 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe).

[69] Por último, el Comité toma nota de la información presentada en las páginas 19 a 22 de la respuesta del país analizado al cuestionario con respecto al establecimiento de los departamentos de auditoría interna dentro del Ministerio de Finanzas y otros ministerios, departamentos y agencias. Aunque en este informe no se examinan detalladamente estos departamentos de auditoría interna, el Comité desea subrayar la importancia de que existan controles internos en estos organismos para ayudar a detectar y disuadir oportunamente el fraude y la corrupción.

---

<sup>44</sup> Por ejemplo, algunas de las calificaciones contables generalmente reconocidas del ICAG: Contador Público Certificado (CPA – EUA), Contador General Certificado (CGA – Canadá) o Contador Certificado Acreditado (ACCA – RU). Véase la Ley del Instituto de Contadores Certificados de Guyana 1991, sección 10 (Requisitos para ser miembro del Instituto).

[70] En este sentido, tomando en cuenta la información suministrada en la respuesta al cuestionario,<sup>45</sup> el Comité formulará una recomendación para que el país analizado continúe fortaleciendo y considere aumentar la dotación de personal de estos departamentos de auditoría interna (ver recomendación 1.4.7 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

### **1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas.**

[71] El Comité observa que los resultados de las auditorías de la Oficina de Auditoría se incluyen en los informes anuales que se le entregan al Presidente de la Asamblea Nacional y que se publican en el sitio Web de la Oficina de Auditoría.<sup>46</sup> Estos documentos suministran información detallada sobre la contabilidad pública del país analizado.

[72] En los informes anuales, el Comité observa que el Auditor General suministra información sobre fraudes detectados en el período en curso y en períodos anteriores. Al respecto, el Informe Anual 2012 contiene lo siguiente:

[73] *“80. Durante el período analizado, también hubo una pérdida de efectivo por \$206,379 millones en la Jefatura del Departamento del Contralor General. Se descubrió un fraude en el cual se hicieron pagos de pensiones y bonos atrasados a sesenta y un jubilados inactivos, fallecidos y ficticios. Al momento del informe, cinco personas han sido indiciadas por la policía y el asunto está en trámite ante los tribunales.”*<sup>47</sup>

[74] *“264. En el período entre 1995 y 2001 nueve casos estaban en proceso de investigación por la policía o pendientes ante la [Suprema] Corte. Cada uno de ellos se basaba en aparentes irregularidades o supuestos actos fraudulentos perpetrados contra el Estado. Las pérdidas estimadas, que a la fecha siguen pendientes, se calcularon en \$14,476 millones.”*<sup>48</sup>

[75] *“266. El Departamento no ha recuperado todavía montos por un total de \$962.074, que siguen pendientes en relación con cuarenta y cuatro empleados que recibieron sueldos excesivos en 2007 y 2011. También hubo tres casos en que las instrucciones de cambio de pago por despido se enviaron tarde a la Unidad de Contabilidad Central durante el período analizado. El resultado fue el pago excesivo de sueldos por una suma total de \$113.333, que incluyó deducciones por \$13.848. Los pagos excesivos durante 2012, por lo tanto, aumentaron el monto pendiente a la fecha a \$1,075 millones.”*<sup>49</sup>

[76] *“273. La Cuenta Bancaria de Mantenimiento del Tribunal de Magistrados de Georgetown № 016290042302/3115 se sobregiró debido a transacciones aparentemente fraudulentas. Al momento del informe, la Policía de Guyana estaba en proceso de concluir una investigación sobre las supuestas irregularidades.”*<sup>50</sup>

[77] En todas las situaciones anteriores, el informe del Auditor General recomienda que el departamento respectivo adopte medidas vigorosas de seguimiento con las agencias correspondientes con miras a dar solución a estos asuntos.

---

<sup>45</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 21.

<sup>46</sup> Ver <http://www.audit.org.gy/reports.html>.

<sup>47</sup> Informe Anual 2012, pág. 33. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_annual\\_rep.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_annual_rep.pdf).

<sup>48</sup> *Ibid.*, pág. 120.

<sup>49</sup> *Ibid.*, pág. 121.

<sup>50</sup> *Ibid.*, pág. 124.

[78] Además, estos informes también contienen datos sobre casos de pagos excesivos a contratistas, así como sobre pagos excesivos de sueldos a empleados y deducciones a agencias. Al respecto, el Informe Anual 2012 señala entre sus principales hallazgos los siguientes:

[79] “9. *Habían ocurrido una cantidad significativa se sobrepagos a contratistas en las obras evaluadas por contratos celebrados por los ministerios, departamentos y regiones en períodos anteriores, y varios ministerios y regiones enfrentaban graves dificultades para lograr recuperar los montos excesivos pagados en relación con varios contratos. Asimismo, algunos ministerios y regiones siguieron haciendo sobrepagos en relación con varios contratos en 2012 y en años anteriores, como se muestra a continuación. Esta tendencia continua, aunada a la ausencia de pruebas que sugirieran la aplicación de medidas disciplinarias de cualquier tipo a los empleados de ingeniería o de otras áreas encargados de la evaluación de las obras en proceso y de la certificación de los pagos por avances es preocupante e indica una falta percibida de acciones de la administración para remediar la situación imperante.*<sup>51</sup>

Ministerios, departamentos y regiones	Casos detectados	Monto en 2012, en \$000
Región 1	3	8.392
Región 8	10	3.273
Región 10	25	6.842
Ministerio de Salud	1	15.722
Departamento de Policía de Guyana	1	10.773
Ministerio de Asuntos Amerindios	1	7.869
Fuerzas de Defensa de Guyana	2	3.253
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes	1	1.412
Ministerio de Asuntos Internos	1	190

[80] “11. *El lento procesamiento de las instrucciones sobre cambios en los pagos en varios ministerios y principalmente en las regiones dio como resultado pagos excesivos de sueldos, incluyendo deducciones, por una suma de \$37,389 millones, que no se han recuperado, para los años de 2007 a 2012. Los ministerios, departamentos y regiones han enfrentado graves dificultades para recuperar estos montos, particularmente porque las instituciones bancarias requieren la autorización de los cuentahabientes para ello, y las agencias legales, como el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Planes de Seguros no han cumplido cabalmente con las solicitudes de reembolso de los montos excedentes pagados.*”<sup>52</sup>

[81] Asimismo, durante la visita *in situ*, la Oficina de Auditoría suministró información sobre el número de investigaciones efectuadas en diversos ministerios y entidades entre 2009 y septiembre de 2013. Diecinueve de estas investigaciones se habían concluido y cuatro estaban todavía en proceso.<sup>53</sup> Siete de estas investigaciones se relacionaban con fraude y solamente una dio como resultado

<sup>51</sup> *Ibid.*, pág. vii.

<sup>52</sup> *Ibid.*, pág. viii.

<sup>53</sup> Ver: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_status.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_status.pdf).

medidas disciplinarias contra los perpetradores, pero el caso penal está todavía ante los tribunales.<sup>54</sup> No se suministró información sobre el estado de los demás casos de fraude.

[82] El Comité toma nota de la valiosa información suministrada en los informes anuales con respecto a fraudes y sobrepagos, así como de la información obtenida durante la visita *in situ*.

[83] A partir de la información anterior, el Comité observa que parece haber dificultades para la recuperación de los montos pagados en exceso o robados fraudulentamente al Estado. Sin embargo, el Comité no obtuvo información completa sobre el estado de otros casos de fraude, robo, pérdidas y sobrepagos adicionales a las que se mencionaron en el Informe Anual 2012 del Auditor General. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.8 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[84] Asimismo, el Auditor General informó sobre las dificultades para procesar casos de fraude y corrupción en Guyana, debido a los cuales este tipo de casos prácticamente nunca se enjuiciaban.<sup>55</sup>

[85] En este sentido, el Auditor General informó que el Departamento de Policía de Guyana es la institución legalmente autorizada para recopilar documentos y pruebas y que el personal de la Oficina de Auditoría trabaja estrechamente con ellos en la investigación de casos de fraude y corrupción y los acompaña en búsquedas, incautaciones, etc., así como en la redacción de los informes. Según los requisitos de la Ley de Auditoría 2004, la Oficina de Auditoría también envía sus informes de auditoría a la Dirección de la Fiscalía, para obtener asesoría jurídica en materia penal.

[86] Sin embargo, el Auditor General informó que tanto el Departamento de Policía como la Dirección de la Fiscalía tienen una carga excesiva de casos y que los casos de fraude y corrupción compiten con otros delitos graves, como homicidio, violencia sexual y robo. El Auditor General también señaló que los casos de fraude generalmente son complejos y por lo tanto les resultan intimidantes a quienes no conocen el tema (policías y fiscales).

[87] El Auditor General informó además que el acceso a los datos bancarios ayudaría al procesamiento de casos de fraude y corrupción y que la Ley de Auditoría 2004 requiere una orden judicial para obtener esta información. Sin embargo, el Auditor General comentó que algunos magistrados exigen que se hayan presentado ya cargos penales para emitir dicha orden.

[88] En vista de la situación arriba descrita y en ausencia de información detallada sobre el resultado final de los casos de fraude y corrupción investigados por la Oficina de Auditoría, el Comité estima que el país analizado debería considerar fortalecer sus capacidades para procesar casos de fraude y corrupción, en especial los de mayor importancia o complejidad, ya sea por el nivel del funcionario público involucrado o por el monto del daño económico al Estado.

[89] Para ello, el Comité considera que convendría a Guyana establecer una estrategia anticorrupción articulada, que podría incluir el establecimiento de unidades especializadas anticorrupción en el Departamento de Policía de Guyana y en la Dirección de la Fiscalía. El Comité

---

<sup>54</sup> Ver: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_fraud.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_fraud.pdf).

<sup>55</sup> En la siguiente sección, sobre la Dirección de la Fiscalía, se presentan mayores detalles sobre esta situación.

formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.9 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).<sup>56</sup>

[90] Por último, con respecto a la responsabilidad administrativa y disciplinaria, el Auditor General indicó durante la visita *in situ* que en los últimos cinco años ha habido seis terminaciones involuntarias (solamente se despidió a un funcionario por deshonestidad en tratos oficiales).<sup>57</sup> El Comité considera que la información anterior muestra que la Oficina de Auditoría ha realizado investigaciones disciplinarias que han culminado en sanciones efectivas para el personal. Sin embargo, el Comité no cuenta con información completa sobre el número de investigaciones en curso, las que han sido archivadas y las que han prescrito. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.9 en la sección 1.4 del presente informe).

#### **1.4. Conclusiones y recomendaciones.**

[91] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Oficina de Auditoría de Guyana en los acápite anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[92] **La República Cooperativa de Guyana ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer la Oficina de Auditoría de Guyana como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[93] En vista de los comentarios planteados en esa sección, el Comité sugiere que el país analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 1.4.1 Fortalecer la Oficina de Auditoría, en especial su Unidad de Auditoría Forense, asegurando que cuente con los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.2 Publicar en el sitio Web de la Oficina de Auditoría todos los documentos de rendición de cuentas e informes elaborados por la Oficina de Auditoría y presentados al Comité de Contabilidad Pública, como sus planes estratégicos trianuales y sus correspondientes actualizaciones anuales, así como los informes del auditor independiente a los miembros del Comité de Contabilidad Pública (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.3 Mejorar el sitio Web de la Oficina de Auditoría incluyendo un número telefónico específico o un formato electrónico (seguro) para quejas, para las personas interesadas en presentar informes, quejas o denuncias de fraude o corrupción. Asimismo, ofrecer orientación en el sitio Web sobre la forma de enviar informes, quejas o denuncias útiles y cómo los interesados pueden obtener un seguimiento de su estado (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.4 Promover campañas de difusión entre el público en general sobre la manera en que puede colaborar con la Oficina de Auditoría en sus funciones, en especial las de la

---

<sup>56</sup> Guyana informó que, en el último trimestre de 2013, estableció una Unidad de Delincuencia Organizada Seria (SOCU) con un Comité Nacional de Supervisión interagencial que comprende al Director de la Fiscalía, el Procurador General, el Ministro de Asuntos Internos, el Departamento de Policía de Guyana, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Presidencia.

<sup>57</sup> [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_amend.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_amend.pdf).

Unidad de Auditoría Forense, para identificar y disuadir el fraude y la corrupción en Guyana (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).

- 1.4.5 Suministrar apoyo e incentivos a su personal actual para que obtenga las certificaciones contables profesionales reconocidas por el Instituto de Contadores Certificados de Guyana y/o tomar en cuenta estas certificaciones en la selección futura de su personal (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.6 Fortalecer los esfuerzos para asegurar la participación de la Oficina de Auditoría en el programa de revisión por pares en el marco de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Caribe (CAROSAI) (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.7 Seguir fortaleciendo los departamentos de auditoría interna en los distintos ministerios, departamentos y agencias del Gobierno de Guyana y considerar aumentar gradualmente su dotación de personal (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.8 Preparar estadísticas sobre los montos que se ordena pagar al Estado en casos de fraude, robo, pérdidas y sobrepagos y los montos que realmente fueron recuperados, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (ver sección 1.3 del capítulo II de este informe).
- 1.4.9 Preparar estadísticas exhaustivas sobre los resultados de los procesos de investigación disciplinarios dentro de la Oficina de Auditoría que muestren cuántas investigaciones están en curso, cuántas se han archivado y cuántas han prescrito, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (ver sección 1.3 del capítulo II de este informe).

## **2. LA DIRECCIÓN DE LA FISCALÍA**

### **2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.**

[94] La Dirección de la Fiscalía cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[95] En relación con sus objetivos y funciones, el artículo 187 de la Constitución de la República Cooperativa de Guyana establece que el Director de la Fiscalía estará facultado, en cualquier caso en que lo considere deseable, para (a) instituir y llevar cualquier proceso penal contra cualquier persona ante cualquier corte, excepto los tribunales militares, con respecto a cualquier infracción de las leyes de Guyana; (b) atraer y continuar cualquier proceso penal de este tipo que haya instituido cualquier otra persona o autoridad; y (c) suspender en cualquier etapa anterior al fallo cualquier proceso penal de este tipo instituido o llevado por él o por cualquier otra persona o autoridad.

[96] De acuerdo con el artículo 187(3), la facultad de atraer y continuar o suspender cualquier proceso penal instituido por cualquier otra persona o autoridad recae en el Director de la Fiscalía y excluye a cualquier otra persona o autoridad.

[97] El artículo 187(5) establece además que los procesos penales incluyen cualquier apelación de cualquier determinación de cualquier corte en un proceso penal o caso, mientras que el artículo 187(2) dispone que la función del Director de la Fiscalía puede ser ejercida a través de otras personas que actúen bajo sus instrucciones generales o específicas y de acuerdo con ellas.

[98] Durante la visita *in situ*, la Directora de la Fiscalía informó que “*de conformidad con la Ley No. 4 de 2010, que enmendó la Ley de las Cortes de Apelaciones, se le ha otorgado ahora al Director de la Fiscalía la atribución para apelar los veredictos absolutorios, incluyendo los resultantes de que un juez de primera instancia acepte una petición de sobreseimiento, un defecto en las declaraciones, la remisión a juicio del acusado o la resolución acusatoria; una decisión del juez de primera instancia de excluir pruebas materiales que se propone presentar el fiscal; la orientación errónea sustancial del jurado por el juez de primera instancia durante el sumario de hecho o de derecho del juez o sobre una cuestión combinada de hecho o derecho; o una irregularidad material durante el juicio.*”<sup>58</sup>

[99] Asimismo, la Ley (de Enmienda) de la Corte Suprema de la Judicatura (Apelaciones), No. 9 de 2013, que enmendó la Ley de la Corte de Apelaciones y la Ley de la Corte Superior, confiere el derecho de apelar en todos los procesos civiles derivados de una causa o asunto penal.

[100] Durante la visita *in situ*, la Directora de la Fiscalía informó que en el desempeño de estas funciones, la Dirección “*suministra asesoría y representación profesionales para las agencias policiales y otros organismos en relación con el procesamiento de casos penales, dependiendo de la disponibilidad de personal jurídico. En la ejecución de estas funciones, las principales actividades de la Dirección de la Fiscalía son: A. Formular acusaciones en las audiencias penales en las jurisdicciones de Demerara, Berbice y Essequibo; durante estas audiencias penales se asignarían uno o más fiscales para procesar los casos asignados para ser oídos por los jueces de primera instancia permanentes; B. Comparecer en los tribunales de apelaciones, el tribunal en pleno para apelaciones por cargos sumarios y las cortes de apelaciones para apelaciones de todos los cargos encausables; C. Comparecer ante el tribunal de magistrados para un asunto de perfil técnicamente alto y en casos extremos en que los fiscales policiales soliciten asistencia; D. Comparecer en la Corte Superior en solicitudes de fianza, habeas corpus o permiso de dejar la jurisdicción, y para extensiones de plazo para mantener a una persona bajo custodia durante investigaciones policiales; E. Suministrar asesoría jurídica al Departamento de Policía de Guyana (GPF) y a otras agencias policíacas como la Unidad Aduanal Antinarcóticos (CANU) y el Departamento de Energía de Guyana (GEA) en el procesamiento de casos penales; F. Asegurar que no se acuse a ningún ciudadano injustamente; G. Cerciorarse de que las personas que infringen la ley sean acusadas y procesadas de conformidad con las disposiciones relevantes de la legislación de Guyana.*”<sup>59</sup>

[101] La Directora de la Fiscalía también presentó la siguiente información sobre los procesos penales en Guyana: “*Hay dos tipos de cargos penales en Guyana: cargos sumarios y cargos encausables. Ambos se instituyen en el tribunal de magistrados. Todos los cargos sumarios son oídos por un magistrado, mientras que algunos de los cargos encausables son oídos por un magistrado. Ciertos cargos encausables, según lo dispone la ley, deben presentarse ante un juez y un jurado; sin embargo, en estos casos, un magistrado del tribunal de magistrados debe realizar una averiguación previa o un encausamiento por escrito.*”

<sup>58</sup> Véase la presentación de la Directora de la Fiscalía, pág. 1, [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_dpp.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_dpp.pdf).

<sup>59</sup> *Ibid.*, [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_dpp.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_dpp.pdf).



[102] *Una vez instituido un cargo encausable, si correrá a cargo del magistrado, se lleva a cabo el juicio. Sin embargo, si el cargo será oído por un juez y un jurado, entonces el magistrado debe realizar una averiguación previa o un encausamiento por escrito para determinar si la persona acusada debe ser enjuiciada por el delito del que se le acusa. Es necesario realizar la averiguación previa o el encausamiento por escrito para delitos encausables como homicidio, homicidio sin premeditación, violación y cualquier fraude en la corte superior. Una vez completada la averiguación previa o el encausamiento por escrito, el Director de la Fiscalía recibe las declaraciones o los documentos de encausamiento por escrito.*

[103] *Al recibir las declaraciones o los documentos de encausamiento por escrito, el Director de la Fiscalía formula los cargos o los suspende, dependiendo del respaldo probatorio que contienen las declaraciones o los documentos de encausamiento por escrito. Cuando se formulan cargos, se presentarán posteriormente ante los jueces de la Corte Superior para ser oídos en las audiencias penales.*

[104] *Los abogados del Despacho comparecen por el fiscal en la Corte Superior y en los tribunales de apelaciones y, en contadas ocasiones, para casos muy graves, en el tribunal de magistrados. En todos los tribunales de magistrados la policía comparece por el fiscal.*

[105] *La mayoría de los cargos por fraude son encausables y en la mayoría de estos cargos el juicio se lleva a cabo en el tribunal de magistrados. Cualquier cargo de fraude relacionado con el derecho de propiedad tiene que presentarse ante la Corte Superior.”<sup>60</sup>*

[106] Durante la visita *in situ*, la Directora de la Fiscalía informó que no hay prescripción por delitos encausables en Guyana. Sin embargo, los delitos sumarios sí prescriben y deben ser enjuiciados hasta seis meses después de la fecha del acto delictivo.

[107] En relación con su independencia, el artículo 187(4) de la Constitución dispone que el Director de la Fiscalía no debe verse sujeto a la dirección ni al control de ninguna otra persona o autoridad en el ejercicio de las facultades que se le confieren.

[108] En relación con la manera en que es seleccionado, el artículo 203 de la Constitución dispone que el Director de la Fiscalía es nombrado por la Comisión del Servicio Judicial y debe cumplir los requisitos para ser nombrado como juez superior de la Corte Superior.<sup>61</sup> El artículo 203(4) de la Constitución establece que el Director de la Fiscalía debe dejar su cargo al cumplir sesenta años. Sin embargo, la Comisión del Servicio Judicial puede permitir que continúe ocupándolo hasta una edad más avanzada, que no debe superar los sesenta y cinco años. Los artículos 203(5) y 225(2) disponen además que el Director de la Fiscalía puede ser destituido de su cargo solamente por incapacidad de desempeñar las funciones de su puesto (ya sea por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa de cualquier índole) o por mala conducta. Los detalles de los procedimientos de destitución se establecen en el artículo 225(3) (4) (5) y (6) de la Constitución.

[109] Con respecto al personal de la Dirección de la Fiscalía, de conformidad con el artículo 201 de la Constitución, la Comisión del Servicio Público está facultada para nombrar, destituir y ejercer

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_dpp.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_dpp.pdf).

<sup>61</sup> De conformidad con la sección 129 de la Constitución, una persona debe cumplir los siguientes requisitos para ocupar permanente o interinamente el cargo de juez: (a) haber sido juez de un tribunal con jurisdicción ilimitada en materia civil o penal en alguna parte del Commonwealth o en una corte con jurisdicción de apelaciones en uno de estos tribunales; o (b) ser elegible para ser admitido como abogado en Guyana y haberlo sido durante el período que prescriba el Parlamento.



control disciplinario sobre las personas que trabajan permanente o interinamente en ella. Sin embargo, con respecto al Director de la Fiscalía y al Subdirector de la Fiscalía, así como a los Fiscales Policiales, esta responsabilidad recae en la Comisión del Servicio Judicial<sup>62</sup> y la Comisión del Servicio de Policía,<sup>63</sup> respectivamente. En este sentido, durante la visita *in situ*, la Directora de la Fiscalía informó que no se han registrado casos disciplinarios en ninguna de las Comisiones del Servicio en los últimos cinco años.<sup>64</sup>

[110] Asimismo, durante la visita *in situ*, la Directora de la Fiscalía informó que la Dirección contaba con el apoyo del Subfiscal General, cinco directores adjuntos de fiscalía, seis fiscales senior del estado y diez fiscales. Asimismo, además de los abogados empleados por el Despacho, hay tres asistentes jurídicos y tres fiscales policiales del Departamento de Policía de Guyana.

[111] Con respecto a capacitación, durante la visita *in situ*, la Directora de la Fiscalía suministró una lista de todas las actividades de capacitación de 2010 a 2013 en las que participó su personal, que incluyen, entre otras, una conferencia sobre corrupción transnacional y algunos otros talleres relacionados con lavado de activos, productos del delito y confiscación.<sup>65</sup>

[112] A fin de mantener a los ciudadanos informados sobre sus actividades, la Dirección de la Fiscalía tiene un sitio Web,<sup>66</sup> que, entre otras cosas, incluye información general sobre su trabajo, su personal, comunicados de prensa e informes anuales. También contiene un formato electrónico para las personas interesadas en registrar una queja.<sup>67</sup>

[113] En relación con los mecanismos de control interno, durante la visita *in situ*, la Directora de la Fiscalía informó que no existe una unidad de auditoría interna en el Despacho del Director de la Fiscalía. La auditoría (externa) de los recursos adquiridos o recibidos gratuitamente por la Dirección corre a cargo de la Oficina de Auditoría.

[114] Con respecto a la manera en que se aseguran los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, la Directora de la Fiscalía informó durante la visita *in situ* que la Dirección cuenta con un presupuesto independiente y que el proceso presupuestal “*con base en la Ley de Gestión Financiera y Rendición de Cuentas 2003, se lleva a cabo de acuerdo con nuestra presentación de los documentos de Presupuesto Corriente y de Capital al Ministerio de Finanzas. Las aprobaciones se reciben del Parlamento con base en las decisiones adoptadas por el Ministerio de Finanzas*”.<sup>68</sup>

[115] Según la información solicitada y recibida durante la visita *in situ*, el presupuesto anual total (presupuesto corriente más presupuesto de capital) asignado a la Dirección de la Fiscalía en los últimos cinco años es el siguiente (en dólares guyaneses):<sup>69</sup> G\$79.824.000 (2008); G\$77.563.000 (2009); G\$84.406.000 (2010); G\$94.683.000 (2011); y G\$104.206.000 (2012).<sup>70</sup>

---

<sup>62</sup> Sección 199 de la Constitución.

<sup>63</sup> Sección 212 de la Constitución.

<sup>64</sup> Véase la presentación de la Directora de la Fiscalía, pág. 7.

<sup>65</sup> Véase la lista completa de actividades de capacitación en la presentación de la Directora de la Fiscalía, págs. 5 y 6.

<sup>66</sup> <http://www.dpp.gy/>.

<sup>67</sup> <http://www.dpp.gy/index.php/2012-11-26-18-50-44>.

<sup>68</sup> Véase la presentación de la Directora de la Fiscalía, pág. 6.

<sup>69</sup> 1 dólar estadounidense = 200 dólares guyaneses (al 1 de noviembre de 2013).

<sup>70</sup> Véase la información completa sobre el presupuesto de la Dirección en la presentación de la Directora de la Fiscalía, pág. 7.

[116] Con respecto a los mecanismos de coordinación para armonizar las funciones de la Dirección de la Fiscalía con otros órganos de control superior o autoridades públicas, durante la visita *in situ*, la Directora de la Fiscalía informó que rutinariamente suministran asesoría jurídica al Comisionado de Policía y a la Oficina de Auditoría, entre otros. También informó que nunca ha recibido ninguna solicitud de asesoría jurídica de la Comisión de Integridad.

[117] Asimismo, la Directora de la Fiscalía informó también que la Dirección organiza mensualmente una reunión de titulares a la que asisten el Comisionado de Policía, el Director de Prisiones, el Presidente del Tribunal, el Secretario de la Corte Suprema y Presidente y el Jefe del Departamento de Denuncias Policías. El objetivo de esta reunión es que todas las distintas entidades del sistema de justicia penal se reúnan para discutir problemas con vistas a resolverlos.

[118] En lo relativo a la transparencia y la rendición de cuentas, el Comité observa la existencia de informes anuales de la Dirección de la Fiscalía.<sup>71</sup>

[119] Por último, en su respuesta al cuestionario, el país analizado informa que en mayo de 2013, su Ministerio de Asuntos Internos lanzó una nueva iniciativa, un sitio Web: “Yo pagué un soborno - Guyana” ([www.ipaidabribegy.com](http://www.ipaidabribegy.com)). En este sitio Web, cualquier persona puede reportar que se le pidió un soborno y suministrar tanto detalle como desee.<sup>72</sup>

## **2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas.**

[120] La Dirección de la Fiscalía cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas.

[121] En primer lugar, el Comité observa la existencia en Guyana de fiscales policiales, quienes en general no son abogados, pero son responsables del procesamiento de la mayoría de los delitos, incluidos los de corrupción y fraude, en el país.

[122] En este sentido, la Directora de la Fiscalía informó durante la visita *in situ* que gradualmente estaba integrando a los fiscales policiales a la Dirección y que tres (3) fiscales policiales están asignados de tiempo completo al Despacho de la Dirección de la Fiscalía. Informó además que *“La mayoría de los cargos penales se procesan en el tribunal de magistrados y los fiscales policiales comparecen en el juicio, por lo que la mayoría de los cargos penales son procesados por fiscales policiales. Todos los fiscales de los tribunales de magistrados son policiales.”*<sup>73</sup>

[123] El Comité estima que es un paso positivo que algunos de estos fiscales policiales formen parte ahora de la Dirección de la Fiscalía, donde pueden tener acceso inmediato y directo al personal jurídico siempre que requieran orientación para el procesamiento de los casos. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.1 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).

---

<sup>71</sup> Con su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda, Guyana entregó los informes anuales de la Dirección de la Fiscalía para los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

<sup>72</sup> [ipaidabribegy.com](http://www.ipaidabribegy.com). De acuerdo con el Estado analizado, el denunciante presenta un informe anónimo y recibe un número de referencia y la queja se publica en el sitio web. Estos informes son monitoreados y pueden auxiliar en las indagaciones y conducir a investigaciones de denuncias de soborno y corrupción y acción disciplinaria

<sup>73</sup> Véase la presentación de la Directora de la Fiscalía, pág. 4.

[124] En segundo lugar, con respecto al presupuesto de la Dirección de la Fiscalía, el Comité observa que aunque ha ido aumentando en forma modesta en los últimos cinco años, representa solo alrededor del 0,04% del presupuesto nacional, porcentaje que en los últimos cinco años se ha ido reduciendo ligeramente, del 0,044% en 2009 al 0,039% en 2012.

[125] Durante la visita *in situ*, la Directora de la Fiscalía informó que una de las principales dificultades que enfrenta esta Dirección es la escasez de personal, en especial el número insuficiente de funcionarios con antigüedad. Indicó que muchos de los abogados del Estado, una vez que han adquirido experiencia, dejan el Despacho de la Dirección de la Fiscalía por otros empleos que ofrecen mayor remuneración.

[126] Por lo antes expuesto y tomando en consideración la función constitucional de la Dirección de la Fiscalía de instituir y llevar procesos penales, incluidos los relativos a actos de corrupción, así como la necesidad de que disponga de los recursos humanos y financieros que necesita para el adecuado desempeño de sus responsabilidades, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.2 en la sección 2.4 del presente informe).

[127] En tercer lugar, con respecto a capacitación, el Comité observa que aunque el personal de la Dirección de la Fiscalía participó en diversas actividades de capacitación en los últimos años, un número muy reducido se relacionaron con el enjuiciamiento de actos de corrupción y la cooperación internacional en la materia.

[128] Asimismo, en vista de la situación descrita en la sección 1.3 anterior en el sentido de que a los casos de corrupción y fraude se les asigna menor importancia en comparación con otros delitos graves, el Comité estima que convendría al país analizado considerar el fortalecimiento de las habilidades y capacidades de los funcionarios de esta Dirección para procesar casos de fraude y corrupción y suministrar asesoría jurídica oportuna para las investigaciones de este tipo de casos que realizan la Oficina de Auditoría, el Departamento de Policía y cualquier otro órgano. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.3 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).

[129] En cuarto lugar, durante la visita *in situ*, la Directora de la Fiscalía subrayó que la Dirección no tiene atribuciones para investigar.<sup>74</sup> Como resultado, depende del Departamento de Policía para recibir información sobre los casos y en ocasiones este Departamento no les remite al Despacho algunos expedientes para solicitar asesoría jurídica, o los envía después de que se instituyeron los cargos.

[130] En sus propias palabras, expresó que: *“En la mayoría de los casos la policía envía los expedientes después de que se han instituido los cargos y en ocasiones esto da como resultado que los cargos sean débiles y a la larga desestimados. Esto también demora el proceso en el tribunal, pues es posible que sea necesario devolver los expedientes a la estación de policía para mayores investigaciones durante el curso del juicio. La mayoría de los expedientes se envían para asesoría jurídica después de que se instituyeron los cargos. Este sistema no es satisfactorio. En algunos casos en que los expedientes se obtienen después de que se instituyeron los cargos, es demasiado tarde para que la policía se beneficie de la asesoría jurídica, pues puede haber ya transcurrido el plazo para ciertas investigaciones. Es importante que las investigaciones se lleven a cabo a tiempo, es decir, inmediatamente después de la comisión del delito. Cuando transcurre este plazo, es difícil*

---

<sup>74</sup> Véase la presentación de la Directora de la Fiscalía, pág. 7.

*lograr las investigaciones deseadas para un juicio exitoso. La calidad de las investigaciones determina en gran medida el éxito de los juicios en los tribunales.*<sup>75</sup>

[131] La Directora de la Fiscalía señaló además que: *“Existe el problema de que la policía en ocasiones no envía algunos de los expedientes al Despacho para asesoría jurídica. Todos los expedientes para cargos encausables deben ser enviados para que se aproveche la asesoría de la Dirección de la Fiscalía, ya sea en relación con la institución de un cargo o la decisión sobre cómo proseguir una vez completado un caso, ya sea por absolución o condena”*.<sup>76</sup>

[132] Por lo antes expuesto, el Comité estima que deberían implementarse mecanismos de coordinación entre la Policía y la Dirección de la Fiscalía de Guyana a fin de crear procedimientos o lineamientos establecidos para dirigir las investigaciones relacionadas con actos de corrupción, de manera que se pueda colaborar más tempranamente y se preste asesoría jurídica antes de la institución de los cargos. Con ello se aseguraría, por ejemplo, que se prestara asesoría jurídica durante el curso de una investigación con respecto a la formulación de los cargos, la obtención de escuchas telefónicas u órdenes de cateo y otros elementos previos a la institución de los cargos. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.4 en la sección 2.4 de este informe).

[133] El Comité observa además la falta de coordinación percibida con otros órganos de control superior. Por ejemplo, durante la visita *in situ*, la Directora de la Fiscalía informó que la Dirección jamás ha recibido ninguna solicitud de asesoría jurídica de la Comisión de Integridad, responsable de asegurar la integridad de las personas de la vida pública a través de su cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la Comisión de Integridad No. 20 de 1997.<sup>77</sup>

[134] Asimismo, la Directora de la Fiscalía informó que no se había enviado a su despacho ningún expediente de casos presentados en el marco de la iniciativa “Yo pagué un soborno - Guyana” del Ministerio de Asuntos Internos. El Comité observa que el establecimiento de este tipo de “línea para quejas” no parece haber sido una acción coordinada entre todos los órganos de control superior. Tampoco es claro si esta iniciativa, instituida en mayo de 2013, sigue operando.<sup>78</sup>

[135] Por lo antes expuesto y tomando en cuenta la situación descrita por el Auditor General en la sección 1.3 anterior, aunque reitera que convendría a Guyana establecer una estrategia anticorrupción articulada, el Comité estima que deberían fortalecerse los mecanismos de coordinación a través de la creación de un mecanismo de intercambio de información y coordinación entre los órganos de control superior y agencias de investigación pertinentes. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.5 en la sección 2.4 de este informe).<sup>79</sup>

[136] En sexto lugar, el Comité observa que el Director de la Fiscalía no está obligado a presentar un informe anual y a que los informes se hagan públicos. El informe más reciente disponible

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, pág. 9.

<sup>76</sup> *Ibid.*, pág. 9.

<sup>77</sup> La sección 23 de la Ley de la Comisión de Integridad requiere el consentimiento por escrito del Director de la Fiscalía antes de cualquier juicio basado en dicha Ley.

<sup>78</sup> La Secretaría Técnica tuvo oportunidad de visitar el sitio Web “[ipaidabrike.gy](http://ipaidabrike.gy)” en varias ocasiones antes de la visita *in situ* en octubre de 2013. No obstante, en diversas oportunidades en el mes de noviembre de 2013, la Secretaría Técnica intentó visitar el sitio Web y recibió el mensaje de error “*Este URL no está enlazado con la aplicación*”.

<sup>79</sup> Guyana informó que, en el último trimestre de 2013, estableció una Unidad de Delincuencia Organizada Seria (SOCU) con un Comité Nacional de Supervisión interagencial que comprende al Director de la Fiscalía, el Procurador General, el Ministro de Asuntos Internos, el Departamento de Policía de Guyana, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Presidencia.

corresponde al año 2010. El Comité observa también que el sitio Web de la Dirección de la Fiscalía contiene enlaces a los informes anuales correspondientes a 2008, 2009 y 2010. Sin embargo, estos enlaces no funcionan.<sup>80</sup> El Comité observa además que la información más reciente para la prensa en el sitio Web se refiere a enero de 2013.

[137] Por lo antes expuesto y ante la necesidad de mejorar la rendición de cuentas de la Dirección de la Fiscalía en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité formulará las recomendaciones correspondientes (ver recomendaciones 2.4.6 y 2.4.7 en la sección 2.4 de este informe).

### 2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas.

[138] A través de la visita *in situ* al país analizado se recopiló la siguiente información con respecto a los resultados obtenidos por la Dirección de la Fiscalía:<sup>81</sup>

[139] “El personal del Despacho de la Dirección de la Fiscalía no realiza investigaciones debido a nuestro mandato constitucional. Principalmente comparecemos en las sesiones penales de la Corte Superior en casos de delitos de homicidio, homicidio sin premeditación, delitos sexuales y otros delitos graves encausables, incluido el fraude. Los delitos por actos de corrupción corren a cargo de los tribunales de magistrados, la Corte de Apelaciones y el Pleno de la Corte Suprema. La policía comparece en los juicios en los tribunales de magistrados. Cuando hay apelaciones de estos juicios, entonces el personal de la Dirección de la Fiscalía comparece en la audiencia de apelación en la Corte de Apelaciones. Proveemos asesoría jurídica a la policía y ellos instituyen los cargos. La policía y el tribunal mantienen estadísticas sobre el número de casos entablados en cada uno de los últimos cinco años y sobre el estado de cada uno de estos cargos.”

[140] **Información compilada de los registros de la Dirección de la Fiscalía sobre delitos de transacciones corruptas que involucran a funcionarios públicos durante el período 2008-2012**

AÑOS	Delito	Agencias gubernamentales	Total de expedientes policíacos recibidos en la Dirección de la Fiscalía	Cargos
2008	Fraude		14	8
2008	Supuesto fraude	Presidencia	1	1
2008	Supuestos allanamientos y hurtos	Ministerio de Asuntos Jurídicos	1	1
2009	Hurto por un funcionario público	Alcaldía y Ayuntamiento Departamento de Energía,	5	

<sup>80</sup> <http://www.dpp.gy/index.php/2012-11-26-18-29-08/116-annual-reports>.

<sup>81</sup> Véase la presentación de la Directora de la Fiscalía, págs. 7-9.

		<i>Departamento de Policía, Carnegie School of Home Economics, Ministerio de Agricultura</i>		
<b>2009</b>	<i>Fraude</i>		<i>4</i>	<i>1</i>
<b>2010</b>	<i>Fraude</i>	<i>25 cargos involucraron a funcionarios públicos</i>	<i>59</i>	<i>13</i>
<b>2010</b>	<i>Hurto por un servidor público</i>	<i>Guyana Water Inc., Departamento de Correos</i>	<i>2</i>	<i>1 para GWI</i>
<b>2010</b>	<i>Hurto por un secretario o servidor</i>	<i>Ministerio de Hacienda de Guyana</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
<b>2011</b>	<i>Fraude</i>		<i>26</i>	<i>14</i>
<b>2011</b>	<i>Hurto por un secretario o servidor</i>		<i>33</i>	<i>14</i>
<b>2012</b>	<i>Fraude</i>		<i>31</i>	<i>14</i>
<b>2012</b>	<i>Hurto por un secretario o servidor</i>		<i>24</i>	<i>17</i>
<b>2012</b>	<i>Allanamientos y hurtos</i>	<i>Ministerio de Vivienda</i>		<i>Cargos no presentados</i>
<b>2012</b>	<i>Supuesta falsificación de documentos de propiedad</i>	<i>Ministerio de Vivienda</i>		<i>Cargos instituidos</i>
<b>TOTAL</b>			<b>205</b>	<b>87</b>

[141] El Comité observa que la información suministrada por la Dirección de la Fiscalía se limita a aquellos casos en que se solicitó asesoría jurídica de esa Dirección. En este sentido, la información anterior no incluye el número de cargos que en realidad ha instituido el Departamento de Policía de Guyana en casos de corrupción. Se le solicitó esta información al Departamento de Policía de Guyana, la que informó lo siguiente:<sup>82</sup>

[142] “Durante el período de 2008 a 2012, el Departamento de Policía de Guyana ha instituido 94 cargos por delitos de transacciones corruptas que involucraron a servidores públicos; de esos 94 cargos, tres (3) condujeron a condenas; 91 casos están pendientes.”<sup>83</sup>

[143] El Comité observa que aunque los resultados suministrados presentan un panorama de la manera en que se están manejando los casos de corrupción, debería también suministrarse

<sup>82</sup> Ver la “Respuesta de la Dirección de la Fiscalía y la Policía a la solicitud de información adicional del subgrupo”, pág. 2. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_reply.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_reply.pdf).

<sup>83</sup> De acuerdo con la información contenida en la página 42 de la respuesta del país analizado al cuestionario, “todas las personas acusadas son funcionarios de la policía, excepto para el año 2012, en el que de los 34 cargos dos correspondieron a empleados del Departamento de Energía, una agencia gubernamental.”

información adicional, detallada en cuanto a los actos de corrupción específicos consagrados en la Convención Interamericana contra la Corrupción además de fraude contra el Estado (como cohecho activo y pasivo, etc.), a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas: el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años; el número de investigaciones que están todavía en proceso; el número de investigaciones que han sido suspendidas por cualquier motivo; el número de investigaciones que se han archivado por haber prescrito; el número de investigaciones que se han archivado sin que se hubiera llegado a una decisión sobre el fondo del caso bajo investigación; el número de investigaciones que se encuentran en alguna etapa que permite tomar una decisión sobre el fondo del caso bajo investigación; y el número de investigaciones que se han remitido a un organismo competente para que se tome tal decisión (ver recomendación 2.4.8 en la sección 2.4 del Capítulo II del presente informe).

[144] El Comité observa además que la información presentada en los informes anuales de la Dirección de la Fiscalía para 2008,<sup>84</sup> 2009<sup>85</sup> y 2010<sup>86</sup> parece confirmar la situación señalada por el Auditor General en la sección 1.3 anterior. De la lectura de estos informes, parece que no ha habido ninguna resolución acusatoria por actos de corrupción en ninguna de las cortes superiores (Demerara, Berbice y Essequibo). Además, la Corte de Apelaciones y el Pleno de la Corte Suprema no han oído ningún caso de corrupción durante ese período.<sup>87</sup>

[145] Asimismo, la respuesta del país analizado al cuestionario<sup>88</sup> suministra información sobre tres casos recientes de corrupción que demuestran los desafíos que enfrenta el país para el enjuiciamiento de este tipo de casos:

[146] *“En el primer caso se descubrió, a través de un informante, la malversación de aproximadamente G\$33 millones de uno de los hospitales regionales en 2013 (en la investigación se reveló que la cifra real es de aproximadamente G\$43 millones). Durante la investigación, todos los sospechosos involucrados escaparon de Guyana. Se les acusó in absentia. En esta etapa, el gobierno ha solicitado la asistencia de sus países vecinos con base en el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal.*

[147] *El segundo caso se refiere a un fraude en el Plan de Pensiones (servidores públicos) del Ministerio de Finanzas que se descubrió con ayuda de funcionarios públicos, por más de G\$20 millones. En este caso sí se imputaron cargos, pero ha sido imposible localizar a varias personas y, puesto que no se ha iniciado el juicio, uno de los acusados sigue asistiendo a su trabajo e intimida al personal.*

[148] *El tercer caso se conoce como el escándalo de Fidelity y Aduanas. A partir de la información recibida la Oficina de Auditoría efectuó una auditoría especial en 2009. Los funcionarios de aduanas implicados en el caso Fidelity fueron acusados de confabulación para cometer un delito grave: la participación voluntaria en la evasión fraudulenta de impuestos de importación de aduanas. Dieciséis (16) personas fueron acusadas el 28 de abril de 2009 y el caso fue cerrado el 31 de mayo de 2011 por el magistrado debido a insuficiencia de evidencias.*

---

<sup>84</sup> Ver: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_annual08.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_annual08.pdf).

<sup>85</sup> Ver: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_annual09.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_annual09.pdf).

<sup>86</sup> Ver: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_annual10.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_annual10.pdf).

<sup>87</sup> La mayoría de los casos oídos se relacionan con los siguientes delitos: homicidio, violación y homicidio sin premeditación.

<sup>88</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, págs. 41-42.



[149] *El problema no es que los funcionarios públicos no estén denunciando, sino que la deficiencia se encuentra en la rapidez con que se llevan a cabo las investigaciones y la demora entre el momento en que se instituyen los cargos y cuando se inicia el caso en la corte y se completa de manera oportuna. Véase el informe de la Comisión del Servicio Público que ilustra esta situación, al igual que los casos presentados por el Ministerio de Hacienda de Guyana.”*

[150] Por lo antes expuesto, el Comité reitera el análisis presentado en la sección 1.3 anterior y su opinión de que el país analizado debería considerar fortalecer sus capacidades para procesar casos de fraude y corrupción, en especial los de mayor importancia o complejidad, ya sea por el nivel del funcionario público involucrado o por el monto del daño económico al Estado.

[151] Para ello, el Comité considera que convendría a Guyana establecer una estrategia anticorrupción articulada, que podría incluir el establecimiento de unidades especializadas anticorrupción en el Departamento de Policía de Guyana y en la Dirección de la Fiscalía. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.9 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).

[152] Asimismo, con base en la información suministrada por el Departamento de Policía de Guyana, el Comité observa el bajo número de condenas en comparación con el número de casos relacionados con corrupción pendientes en los tribunales en los últimos cinco años. En este sentido, el Comité observa que en interés de la transparencia y la rendición de cuentas, el poder judicial debería mantener y publicar información con respecto al número total de casos relacionados con actos de corrupción investigados que estaban listos para que se tomara una decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con ellos; el número de esas decisiones en las que se establecieron responsabilidades o se impusieron sanciones; el número de esas decisiones en las que no se determinaron responsabilidades o se emitieron sentencias absolutorias; y el número de esas decisiones en que se extinguió la sanción o la responsabilidad por prescripción en casos de delitos de corrupción. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.10 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).

[153] Por último, el Comité reitera la observación expresada en la sección 2.2, en el sentido de que estas estadísticas sobre el trabajo de la Dirección de la Fiscalía deberían hacerse públicas. Las cifras en este informe se le suministraron a la Secretaría Técnica como parte del proceso de revisión. Sin embargo, no están disponibles públicamente.

## **2.4. Conclusiones y recomendaciones.**

[154] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Dirección de la Fiscalía en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[155] **La República Cooperativa de Guyana ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer la Dirección de la Fiscalía como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[156] En vista de los comentarios planteados en esa sección, el Comité sugiere que el país analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 2.4.1 Continuar incorporando a los fiscales policiales a la Dirección de la Fiscalía. Entretanto, asegurarse de que los fiscales policiales consulten con la Dirección de la



Fiscalía cuando manejen casos de corrupción (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).

- 2.4.2 Fortalecer la Dirección de la Fiscalía asegurando que disponga de los recursos humanos y financieros que necesita para el desempeño adecuado de sus funciones, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos. En conexión con estos esfuerzos cerciorarse de que los términos y condiciones del servicio sean suficientes para atraer y conservar al personal jurídico con antigüedad (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.3 Fortalecer las habilidades y capacidades de los funcionarios de la Dirección de la Fiscalía para procesar casos de fraude y corrupción y proveer asesoría jurídica oportuna para las investigaciones de estos casos realizadas por la Oficina de Auditoría, el Departamento de Policía y cualquier otro órgano, a través de oportunidades más amplias de capacitación a los miembros del personal de la Dirección de la Fiscalía, en especial sobre el procesamiento de actos de corrupción y la cooperación internacional conexas (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.4 Implementar mecanismos de coordinación formales entre la Policía y la Dirección de la Fiscalía, para crear procedimientos o lineamientos establecidos para dirigir las investigaciones relacionadas con actos de corrupción, de manera que se pueda colaborar más tempranamente y se preste asesoría jurídica antes de la institución de los cargos (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.5 Establecer, según sea pertinente, un mecanismo de intercambio de información y coordinación entre los órganos de control superior y agencias de investigación pertinentes (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.6 Considerar el establecimiento de la obligación legal de que la Dirección de la Fiscalía prepare y publique sus informes anuales en los que se hagan públicas sus actividades y los resultados obtenidos durante el período (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.7 Asegurarse de que el sitio Web de la Dirección de la Fiscalía se actualice continuamente y de que se publiquen oportunamente sus informes anuales, legislación y otra información pertinente, así como de que los enlaces correspondientes funcionen (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.8 Mantener y publicar resultados que indiquen el número total de investigaciones iniciadas; el número de investigaciones que están todavía en proceso; el número de investigaciones que han sido suspendidas por cualquier motivo; el número de investigaciones que se han archivado por haber prescrito; el número de investigaciones que se han archivado sin que se hubiera llegado a una decisión sobre el fondo del caso bajo investigación; el número de investigaciones que se encuentran en alguna etapa que permite tomar una decisión sobre el fondo del caso bajo investigación; y el número de investigaciones que se han remitido a un organismo competente para que se tome una decisión, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas para la Dirección de la Fiscalía y el Departamento de Policía.

Esta información debe desglosarse en cuanto a los actos de corrupción específicos consagrados en la Convención Interamericana contra la Corrupción, incluyendo, en forma no limitativa, el cohecho activo y pasivo y el fraude contra el Estado (ver sección 2.3 del capítulo II de este informe).

- 2.4.9 Establecer una estrategia anticorrupción articulada, que podría incluir el establecimiento de unidades especializadas anticorrupción en el Departamento de Policía de Guyana y en la Dirección de la Fiscalía (ver las secciones 1.3 y 2.3 del Capítulo II de este informe).
- 2.4.10 Mantener y publicar resultados que indiquen el número total de casos investigados que estaban listos para que se tomara una decisión; el número de decisiones adoptadas en relación con ellos; el número de esas decisiones en las que se establecieron responsabilidades o se impusieron sanciones; el número de esas decisiones en las que no se determinaron responsabilidades o se emitieron sentencias absolutorias; y el número de esas decisiones en que se extinguió la sanción o la responsabilidad por prescripción, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas para el poder judicial. Esta información debe desglosarse en cuanto a los actos de corrupción específicos consagrados en la Convención Interamericana contra la Corrupción, incluyendo, en forma no limitativa, el cohecho activo y pasivo y el fraude contra el Estado (ver sección 2.3 del capítulo II de este informe).

### **3. LAS COMISIONES DE SERVICIO**

#### **3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.**

[157] Las Comisiones de Servicio cuentan con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[158] La Constitución de Guyana establece cuatro Comisiones de Servicio, facultadas para nombrar a las personas bajo su ámbito para que ocupen permanente o interinamente los cargos relevantes, así como para ejercer control disciplinario sobre estas personas. En particular, la Constitución establece la Comisión del Servicio Judicial (JSC), responsable de nombrar y ejercer control disciplinario sobre sus funcionarios judiciales y jurídicos, como los magistrados y el Director de la Fiscalía, de conformidad con los artículos 199 y 203 de la Constitución,<sup>89</sup> y la Comisión del Servicio Público (PSC), responsable de nombrar y ejercer control disciplinario de los funcionarios públicos, de conformidad con el artículo 201 de la Constitución.<sup>90</sup>

[159] La independencia de las Comisiones está prevista en el artículo 226(1) de la Constitución, en los siguientes términos: *“excepto cuando se dispone lo contrario en esta Constitución, en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con esta Constitución, las comisiones no estarán sujetas ni a la*

<sup>89</sup> La sección 199(3) de la Constitución establece que la facultad de la Comisión del Servicio Judicial para nombrar y ejercer control disciplinario se aplica a *“los cargos de Comisionado de la Corte Catastral, Magistrado, Director de la Fiscalía, Subdirector de la Fiscalía, Jefe del Registro de la Corte Superior, Subjefe del Registro de la Corte Superior, Jefe del Registro Catastral, Subjefe del Registro Catastral y otros cargos (salvo aquellos con respecto a los cuales los nombramientos están previstos en cualquier disposición de esta Constitución, exceptuando el Artículo 201) relacionados con los tribunales de Guyana o para los cuales los ocupantes deban cumplir los requisitos de calificación jurídica que pudiera prescribir el Parlamento.”*

<sup>90</sup> La excepción son los cargos públicos bajo el ámbito de la Comisión del Servicio Judicial, del Servicio de Policía o del Servicio Docente, o aquellos cargos cuyos nombramientos corren a cargo del Presidente o del Auditor General.

*dirección ni al control de ninguna otra persona o autoridad.” Sin embargo, el artículo 226(2) dispone que la facultad de las Comisiones de Servicio para establecer reglas relativas a sus respectivos procedimientos está sujeta a la resolución afirmativa de la Asamblea Nacional. En este sentido, la Asamblea Nacional aprobó el Reglamento de la Comisión del Servicio Público de 1998<sup>91</sup> y el Reglamento de la Comisión del Servicio Judicial de 2010.<sup>92</sup>*

[160] Con respecto a la Comisión del Servicio Judicial, el artículo 198 de la Constitución establece su composición: El Canciller de la Judicatura, que será su Presidente; el Presidente de la Corte; y el Presidente de la Comisión del Servicio Público son nombrados automáticamente como miembros. Los demás miembros incluyen a un miembro que haya sido un juez nombrado por el Presidente tras consulta significativa<sup>93</sup> con el Líder de la Oposición y uno o dos nominados de la Asamblea Nacional que no deben ser abogados en servicio activo, tras consulta con los órganos representantes de los abogados.

[161] El artículo 127 de la Constitución dispone que el Canciller y el Presidente de la Corte son nombrados por el Presidente después de obtener el acuerdo del Líder de la Oposición. En este sentido, la respuesta del país analizado al cuestionario<sup>94</sup> señala que *“desde esta enmienda constitucional, dos presidentes sucesivos y tres líderes de la oposición no han logrado llegar a un acuerdo. Los funcionarios actuales están ocupando el cargo interinamente, como lo permite la Constitución.”*

[162] La Constitución dispone además que los miembros de la Comisión del Servicio Judicial solamente pueden ser destituidos de su puesto por incapacidad de desempeñar las funciones del cargo ya sea por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa. por mala conducta;<sup>95</sup> o cuando el cargo queda vacante.<sup>96</sup>

[163] Con respecto a la Comisión del Servicio Público, el artículo 200 de la Constitución establece que debe constar de seis miembros,<sup>97</sup> nombrados como sigue: tres miembros nombrados por el Presidente tras consulta significativa con el Líder de la Oposición; dos miembros nombrados por el Presidente tras ser nominados por la Asamblea Nacional después de haber consultado a los órganos que considere que representan a los funcionarios públicos o ciertas clases de funcionarios públicos; y,

---

<sup>91</sup> Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3\\_guy\\_rules1998.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_rules1998.pdf). Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión del Servicio Público informaron que elaboraron el siguiente reglamento revisado, que está pendiente de la resolución afirmativa de la Asamblea Nacional: Reglamento del Servicio Público (2004), Reglamento de la Comisión del Servicio Público (2010) y Cuadro de Delitos y Sanciones (2010).

<sup>92</sup> Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_rules2010.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_rules2010.pdf).

<sup>93</sup> De acuerdo con el artículo 232 de la Constitución, “consulta” o “consulta significativa” significa que *“la persona u organismo responsable de obtener la consulta deberá (a) identificar a las personas o entidades que debe consultar y especificarles por escrito el tema de la consulta y una fecha propuesta para la decisión sobre el tema de la consulta; (b) asegurarse de que se le otorgue a cada persona o entidad que consultará una oportunidad razonable de expresar una opinión reflexionada sobre el tema de la consulta; y (c) encargarse de que se prepare y archive un registro por escrito de la consulta y distribuir la decisión a todas las personas o entidades consultadas”*.

<sup>94</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 10 (nota al pie 20).

<sup>95</sup> Artículo 198(4) de la Constitución.

<sup>96</sup> Según el artículo 198(3), la vacante ocurre transcurridos tres años a partir de la fecha del nombramiento o en algún momento anterior que se especifique en el instrumento mediante el cual se hizo el nombramiento; o, cuando el miembro es nombrado como Canciller, Presidente de la Corte o Presidente de la Comisión del Servicio Público o de la Comisión del Servicio Docente o si pasa a ser funcionario público.

<sup>97</sup> Según el artículo 200(1) de la Constitución, los miembros de la Comisión del Servicio Público no pueden ser nombrados si son funcionarios públicos.

si el Presidente lo considera adecuado, a un miembro más nombrado por él ejerciendo su facultad discrecional.<sup>98</sup>

[164] Según el artículo 200(2) de la Constitución, el Presidente y el Vicepresidente son electos por y de entre los miembros de la Comisión del Servicio Público utilizando el mecanismo de consenso que la Comisión considere adecuado.

[165] Al igual que la Comisión del Servicio Judicial, estos miembros solamente pueden ser destituidos de su puesto por incapacidad de desempeñar las funciones del cargo ya sea por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa por mala conducta;<sup>99</sup> o cuando el cargo queda vacante.<sup>100</sup>

[166] La Constitución dispone además, en su artículo 200(7), que *“quien ocupa de manera permanente o interina un cargo como miembro de la Comisión del Servicio Público no es elegible para ser nombrado permanente o interinamente para un cargo con facultad para nombrar otorgada por esta Constitución al Presidente actuando por recomendación de la Comisión del Servicio Público ni en dicha Comisión mientras ocupa dicho cargo ni durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que ocupó permanente o interinamente dicho cargo.”*

[167] Según el artículo 226(4) de la Constitución, las decisiones de la Comisión del Servicio Judicial y de la Comisión del Servicio Público se adoptarán por un mínimo de tres miembros, que constituyen un quórum,<sup>101</sup> a través de un voto mayoritario. En caso de empate en la votación, el Presidente tiene un segundo voto, siempre que la cuestión que debe decidir la Comisión de Servicio no se relacione con la destitución de un funcionario público.<sup>102</sup>

[168] El artículo 226(6) de la Constitución prohíbe la averiguación en cualquier corte con respecto a si: *“(a) alguna Comisión ha cumplido válidamente cualquier función que se le haya asignado por o bajo esta Constitución; (b) cualquier miembro de una Comisión o cualquier otra persona ha cumplido válidamente cualquier función que se le haya delegado por una Comisión en cumplimiento de las disposiciones de esta Constitución; o (c) cualquier miembro de una Comisión o cualquier otra persona ha cumplido válidamente cualquier otra función relacionada con la labor de la Comisión o con cualquier otra función de este tipo a las que se refiere el subpárrafo anterior.”*

[169] En este sentido, las decisiones adoptadas por la Comisión del Servicio Público con respecto a procesos disciplinarios solamente pueden ser apeladas ante el Tribunal de Apelaciones del Servicio Público.<sup>103</sup> Sin embargo la respuesta del país analizado al cuestionario<sup>104</sup> señala que *“la Comisión del Servicio Público cuenta con varios mecanismos internos de revisión en la Comisión del Servicio Público de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en el Reglamento de la Comisión del*

<sup>98</sup> Asimismo, el Reglamento de la Comisión del Servicio Público de 1998 establece en sus artículos 90 a 98 los requisitos de conducta para los miembros de la Comisión del Servicio Público a fin de evitar conflictos de intereses.

<sup>99</sup> Artículo 200(4) de la Constitución.

<sup>100</sup> Según el artículo 200(3) de la Constitución, la vacante ocurre transcurridos tres años a partir de la fecha del nombramiento o en algún momento anterior que se especifique en el instrumento mediante el cual se hizo el nombramiento.

<sup>101</sup> Reglamento del Servicio Público 1998, artículo 5(2): *“En cualquier reunión de la Comisión, el Presidente o el Vicepresidente, o el Presidente interino, y dos miembros más constituirán un quórum.”*

<sup>102</sup> Según el artículo 226(4) de la Constitución, en caso de empate en los votos en estos casos, se considerará que la Comisión ha decidido que no debe ejercerse la facultad de destituir a dicho funcionario público.

<sup>103</sup> Ver sección 215A de la Constitución y la Ley del Tribunal de Apelaciones del Servicio Público 1984. El Tribunal de Apelaciones del Servicio Público se limita a los servidores públicos y funcionarios de la Comisión del Servicio Público, la Comisión del Servicio de Policía y la Comisión del Servicio de Docencia, pero no la Comisión del Servicio Judicial

<sup>104</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 11.

*Servicio Público. Es posible invocar al Tribunal de Apelaciones del Servicio Público, pero esto no ha ocurrido en más de 10 años.”*

[170] Con respecto a la Comisión del Servicio Judicial, la respuesta del país analizado al cuestionario<sup>105</sup> indica además que *“las decisiones de la Comisión del Servicio Judicial pueden ser impugnadas en un órgano jurisdiccional. Recientemente, el 11 de junio de 2013, una magistrada que había sido destituida por negarse a cruzar el Río Essequibo para presidir sobre un tribunal de magistrados en esa región apeló ante la judicatura y se le restituyó su cargo.*

[171] *El Presidente puede decidir no seguir los consejos de la Comisión del Servicio Judicial con respecto al nombramiento de un juez, pero las razones de su negativa son examinadas por dicha Comisión y, si insiste en su nominación, el Presidente debe proceder al nombramiento.”*

[172] Durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión del Servicio Público presentaron el organigrama de esta institución<sup>106</sup> y su lista de personal.<sup>107</sup> Asimismo, su informe anual para 2012<sup>108</sup> señala que la Comisión del Servicio Público consta de cuatro subdivisiones: División de Servicios (Personal); Servicios Administrativos y de Apoyo, Registro y Contabilidad.

[173] Sobre las responsabilidades del Secretario de la Comisión,<sup>109</sup> la División de Servicios es responsable del procesamiento de asuntos relacionados con el personal relativos a nombramientos permanentes e interinos, ascensos, renunciaciones, pasantías, transferencias y destituciones de funcionarios en el servicio público tradicional con remuneraciones en las escalas salariales GS:3 a GS:14 y ciertas categorías específicas en las escalas GS:1 y 2.<sup>110</sup> Esta División también es responsable de las áreas centralizadas del trabajo de la Secretaría, como disciplina, retiros, capacitación y extensión de licencia por enfermedad. La Sección de Personal también tiene la responsabilidad de enviarle a la Comisión por escrito las opiniones o recomendaciones presentadas por los ministerios, departamentos o regiones para su aprobación o cualquier otra acción que la Comisión considere adecuada.

[174] Los procedimientos disciplinarios para los funcionarios públicos se establecen en el capítulo VII (Reglas 64 a 89) del Reglamento de la Comisión del Servicio Público de 1998. La Regla 65 del Reglamento de la Comisión del Servicio Público requiere que el Secretario Permanente o el Titular de cualquier departamento informe a la policía cuando un funcionario público parece haber cometido un supuesto delito penal y que suministre todas las declaraciones disponibles y detalles materiales de respaldo para las investigaciones de la policía.

[175] Si el informe policial recomienda el enjuiciamiento del funcionario público, la Comisión puede suspenderlo en tanto se completa el proceso en la corte o puede dar por terminado su empleo.<sup>111</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, pág. 11.

<sup>106</sup> Véase la presentación de la Comisión del Servicio Público durante la visita *in situ*, diapositiva 13. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_guy\\_psc.ppt](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_guy_psc.ppt).

<sup>107</sup> *Ibid.*, diapositiva 14. Aproximadamente 30 personas trabajan en la Comisión del Servicio Público, pero comparte una porción de su personal con la Comisión del Servicio de Policía.

<sup>108</sup> Informe Anual de la Comisión del Servicio Público 2012, págs. 7 y 8. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_annual12.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_annual12.pdf).

<sup>109</sup> Reglamento del Servicio Público 1998, Reglas 8 y 9.

<sup>110</sup> De conformidad con la Regla 14 del Reglamento de la Comisión del Servicio Público de 1998, la Comisión ha delegado facultades para el nombramiento de ciertos servidores públicos a los ministerios, agencias y regiones para los puestos de escala salarial GS:1 y GS:2 en el servicio público.

<sup>111</sup> Reglamento de la Comisión del Servicio Público 1998, Reglas 65(2), 65(3)(a) y 65(3)(b).

[176] La Regla 80 de la Comisión del Servicio Público establece que si cualquier corte ha instituido un proceso penal contra un funcionario público, no podrá instituirse ningún proceso disciplinario contra dicho funcionario basado en fundamentos derivados del cargo penal sino hasta que la corte haya determinado sobre el caso y haya expirado el plazo permitido para apelar la decisión de la corte; sin embargo, cuando un funcionario condenado haya presentado apelación, la Comisión del Servicio Público puede iniciar un procedimiento una vez que se haya retirado la apelación o se haya emitido una determinación al respecto.

[177] Asimismo, la Regla 86 de la Comisión del Servicio Público dispone que el hecho de que el funcionario público sea absuelto de los cargos penales presentados por la corte no impide que sea destituido o sancionado de alguna otra manera con respecto a cualquier otro cargo derivado de su conducta en el asunto en cuestión, excepto si dicho otro cargo es substancialmente el mismo que aquel con respecto al cual ha sido absuelto.

[178] Con respecto a capacitación, durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión del Servicio Público presentaron información sobre las actividades de capacitación de 2010 a 2013, tanto en la misma Comisión como externas.<sup>112</sup>

[179] Con respecto a la manera en que se aseguran los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión del Servicio Público explicaron que la preparación y presentación del presupuesto se realiza de conformidad con la Ley de Gestión Financiera y Rendición de Cuentas 2003.<sup>113</sup>

[180] Según la información solicitada y recibida durante la visita *in situ*, el presupuesto anual total (presupuesto corriente más presupuesto de capital) asignado a la Comisión del Servicio Público en los últimos cinco años es el siguiente (en dólares guyaneses):<sup>114</sup> G\$54.138.000 (2009); G\$54.527.000 (2010); G\$61.690.000 (2011); G\$ 65.952.000 (2012); y G\$67.382.000 (2013).<sup>115</sup>

[181] En lo relativo a la transparencia y la rendición de cuentas, el Comité observa la existencia de informes anuales de la Comisión del Servicio Público.<sup>116</sup>

[182] Con respecto a la Comisión del Servicio Judicial, sus representantes informaron durante la visita *in situ* que no tiene personal, estructura formal o presupuesto. El Secretario de la Comisión del

---

<sup>112</sup> Los detalles sobre las actividades de capacitación llevadas a cabo en 2012-2013 están contenidos en las diapositivas 11 y 12 de la presentación de la Comisión del Servicio Público durante la visita *in situ*. La información sobre las actividades de capacitación de 2010-2011 está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_train.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_train.pdf).

<sup>113</sup> En este sentido, los representantes de la Comisión del Servicio Público explicaron que se le presenta al Primer Ministro una hoja de cálculo detallada, junto con una copia de las estimaciones propuestas en las que se enumera cada rubro. Una vez aprobada por el Primer Ministro, la propuesta de presupuesto de la Comisión del Servicio Público se le remite al Ministerio de Finanzas respetando la fecha límite. El Comité de Presupuesto de la Comisión asiste a una reunión en el Ministerio de Finanzas con el Director de Presupuesto, el Jefe de Planeación y otros representantes para discutir las estimaciones del presupuesto propuesto. Una vez que las estimaciones se han presentado, debatido y aprobado en la Asamblea Nacional, se le entrega una copia a la Comisión para que inicie su programa de trabajo para el año.

<sup>114</sup> 1 dólar estadounidense = 200 dólares guyaneses (al 1 de noviembre de 2013).

<sup>115</sup> La información completa sobre el presupuesto de la Comisión del Servicio Público puede consultarse en [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_alloc.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_alloc.pdf).

<sup>116</sup> Junto con su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda, Guyana presentó el Informe sobre Titularidad de la Comisión del Servicio Público – Julio 2007-Julio 2010. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_tenure.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_tenure.pdf). Asimismo, durante la visita *in situ*, la Comisión del Servicio Público suministró copias de sus informes anuales para los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Servicio Judicial es el Secretario de la Corte Suprema. También se señaló que no se anuncian los puestos en la judicatura. Se invita a las personas recomendadas a presentar solicitudes.

[183] Los representantes de la Comisión del Servicio Judicial informaron que esta Comisión no imparte capacitación a jueces o magistrados. La Corte Suprema suministra la capacitación.

[184] Por último, los representantes de la Comisión del Servicio Judicial informaron que la Comisión no elabora informes anuales.

### **3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas.**

[185] Las Comisiones de Servicio, en especial la Comisión del Servicio Público y la Comisión del Servicio Judicial, cuentan con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 3.1. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas.

[186] En primer lugar, con respecto a la Comisión del Servicio Judicial, el Comité observa que es necesario fortalecerla e institucionalizarla más.

[187] Durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión del Servicio Judicial informaron que actualmente la preside un Canciller de la Judicatura interino. También señalaron que el Presidente y el Líder de la Oposición no han podido ponerse de acuerdo sobre el nombramiento del Canciller de la Judicatura durante casi diez años, como lo requiere el artículo 127(1) de la Constitución.

[188] Asimismo, el Comité observa que tampoco se ha nombrado a los otros dos o tres miembros de la Comisión del Servicio Judicial.<sup>117</sup>

[189] El Comité observa que este estancamiento político ha debilitado considerablemente e incluso paralizado la labor de la Comisión del Servicio Judicial y de otros importantes órganos de control superior, como la Comisión de Integridad, tema del que se hablará con mayor amplitud posteriormente en este informe.

[190] Tomando en cuenta que se trata de un asunto constitucional, el Comité se limita a tomar nota de la situación y a instar a ambas partes a llegar a un acuerdo a la brevedad posible, con vistas a fortalecer institucionalmente a un órgano de control superior tan importante como lo es la Comisión del Servicio Judicial, establecida constitucionalmente.

[191] En segundo lugar, también con respecto a la Comisión del Servicio Judicial, durante la visita *in situ* se le informó al Comité que carece de presupuesto propio. Por lo tanto, los representantes de la Comisión del Servicio Judicial informaron que no tiene Secretaría (ni personal alguno) y que la Comisión del Servicio Judicial no imparte capacitación de ningún tipo a jueces o magistrados. La

---

<sup>117</sup> Estos otros miembros incluyen a un miembro que haya sido un juez nombrado por el Presidente tras consulta significativa con el Líder de la Oposición y uno o dos nominados de la Asamblea Nacional que no deben ser abogados en servicio activo, tras consulta con los órganos representantes de los abogados (artículo 198(2) de la Constitución). Al respecto, Guyana informó que el Comité Parlamentario Permanente de Nombramientos se designó apenas en enero de 2013 después de las elecciones generales de noviembre de 2011 y no ha llegado a los nombramientos de la Comisión del Servicio Judicial todavía. Están pendientes los nombramientos de las comisiones de derechos y de las tres comisiones de servicio. La oposición tiene la mayoría y la presidencia de este Comité.”

Corte Suprema suministra la capacitación. Cabe resaltar, empero, que durante la visita *in situ* el Canciller de la Judicatura señaló que ni él ni la Comisión del Servicio Judicial habían solicitado nunca presupuesto ni personal.

[192] En vista de esta situación, el Comité estima que debería fortalecerse la Comisión del Servicio Judicial a fin de garantizar su institucionalidad constitucionalmente establecida. El Comité también considera que la Comisión del Servicio Judicial debería contar con su propio presupuesto y personal y que debería impartir capacitación a los magistrados y jueces. El Comité estima también que la capacitación que se les imparte a magistrados y jueces podría incluir temas como ética judicial y sensibilización contra la corrupción. El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendaciones 3.4.1 y 3.4.2 en la sección 3.4 de este informe).

[193] En tercer lugar, con respecto a la Comisión del Servicio Público, el Comité observa que, de acuerdo con el Reglamento del Servicio Público, la responsabilidad administrativa y disciplinaria no es completamente independiente de la responsabilidad penal.

[194] Por ejemplo, según la Regla 80 de la Comisión del Servicio Público, si se han instituido cargos en cualquier corte contra un funcionario público, no puede instituirse ningún proceso disciplinario contra dicho funcionario sobre el mismo fundamento hasta que la corte haya emitido una determinación sobre el caso. Además, la Regla 86 de la Comisión del Servicio Público no permite la destitución ni la sanción disciplinaria del funcionario público si el cargo presentado es substancialmente el mismo que aquel con respecto al cual la corte ha absuelto al funcionario.

[195] El Comité observa que el Reglamento de la Comisión del Servicio Judicial de 2010, por el contrario, permite que la Comisión del Servicio Judicial instituya un proceso disciplinario contra un funcionario que ha sido acusado penalmente (Regla 81). La Regla 82 de la Comisión del Servicio Judicial también permite la institución de un proceso disciplinario por la Comisión del Servicio Judicial cuando la conducta del funcionario es sujeto de investigación policial o de un juicio penal en cualquier corte. Además, la Regla 83 de la Comisión del Servicio Judicial señala explícitamente que *“el hecho de que un funcionario haya sido absuelto de un cargo penal presentado en cualquier corte no impide que se instituya un proceso en su contra con base en este Reglamento con respecto de un supuesto acto de mala conducta implícito en dicho cargo penal.”*

[196] En este sentido, el Comité considera que la Regla 86 de la Comisión del Servicio Público debería modificarse para reflejar una redacción semejante a la contenida en la Regla 83 de la Comisión del Servicio Judicial, teniéndose en cuenta que condicionar totalmente el proceso y la responsabilidad administrativos o disciplinarios a la prescripción y a los resultados del proceso penal puede dar como resultado la ineficacia del proceso administrativo o disciplinario. Es decir, cuando el proceso penal prescribe o es desestimado o da lugar a una absolución, también dejaría de existir la responsabilidad administrativa o disciplinaria. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.3 en la sección 3.4 de este informe).

[197] En cuarto lugar, el Comité observa que el Tribunal de Apelaciones del Servicio Público (previsto constitucionalmente) no se ha establecido en más de 10 años.



[198] Aunque se observa que la Comisión del Servicio Público ha reconsiderado sus propias decisiones disciplinarias en el pasado,<sup>118</sup> el Comité estima que el establecimiento y el pleno funcionamiento del Tribunal es fundamental para garantizar los derechos de los funcionarios públicos a un análisis justo e imparcial de las decisiones disciplinarias adoptadas por las Comisiones de Servicio.

[199] El establecimiento del Tribunal de Apelaciones del Servicio Público parece ser incluso más esencial si se toman en cuenta las limitaciones de la revisión judicial de las decisiones de las Comisiones de Servicio establecida por el artículo 226(6) de la Constitución, así como el hecho de que los procesos judiciales tienden a implicar costos y tiempos adicionales. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.4 en la sección 3.4 de este informe).

[200] En relación con el tema anterior, durante la visita *in situ*, el representante del Instituto de Transparencia de Guyana<sup>119</sup> señaló que: *“El Tribunal [de Apelaciones del Servicio Público], sin embargo, no se ha establecido desde agosto de 1995. Como resultado, los perjudicados que desean solicitar resarcimiento no tienen otra opción más que presentar una petición ante los tribunales en forma de una acción civil, lo cual no solamente es caro en términos de sus costos legales, sino que además podría tomar años antes de que se llegue a una conclusión satisfactoria del caso, en vista del gran volumen de casos pendientes en los tribunales. Influye además el factor del miedo, pues un funcionario público que impugna la decisión de una Comisión de Servicio bien podría perder su empleo y las prestaciones acumuladas por su servicio al Estado. Invariablemente, la mayoría, si no es que todas, las personas agraviadas deciden mantenerse calladas, cambiar de empleo o emigrar al extranjero.*

[201] (...)

[202] *Es alentador que el Presidente y el Líder de la Oposición estén dialogando para, entre otras cosas, reconstituir y permitir la operación del Tribunal. Esto será un alivio para los funcionarios públicos independientemente de los graves daños al estado de ánimo de los servidores públicos afectados en los últimos 16 años por la desatención a esta importante salvaguarda constitucional.”*

[203] En quinto lugar, el Comité observa que, como lo permite el Reglamento de la Comisión del Servicio Público de 1998, en 2008, la Comisión del Servicio Público aceptó delegar a los ministerios, agencias y regiones la facultad de nombramiento de los servidores públicos en las escalas salariales GS:1 y GS:2 para puestos específicos en el servicio público.<sup>120</sup>

[204] El Comité observa además que el informe sobre Titularidad de la Comisión del Servicio Público de julio 2007 a julio 2010 recomienda el establecimiento de pautas y procedimientos claros para que los Secretarios Permanentes, Titulares y Funcionarios Ejecutivos Regionales se encarguen de los nombramientos con base en las facultades que les delega la Comisión del Servicio Público.

[205] El Comité está de acuerdo con la recomendación de la Comisión del Servicio Público (2007-2010) sobre la importancia y necesidad de que existan pautas y procedimientos para cualquier caso en que la Comisión del Servicio Público delegue sus facultades a los Secretarios Permanentes, Jefes

<sup>118</sup> Durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión del Servicio Público informaron que en los últimos cinco años, la Comisión del Servicio Público ha revocado medidas disciplinarias aplicadas a dos funcionarios públicos. Esta información está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_revoc.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_revoc.pdf).

<sup>119</sup> Véase la presentación del Instituto de Transparencia de Guyana, págs. 12 y 13.

<sup>120</sup> Informe Anual de la Comisión del Servicio Público 2008, pág. 10. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_an08.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_an08.pdf).

de Departamento o al Secretario de la Asamblea Nacional, así como que estas pautas y procedimientos se hagan por escrito y se les comuniquen formalmente a los interesados.

[206] El Comité estima además que estas pautas y procedimientos escritos deberían establecerse antes de que la Comisión del Servicio Público acepte delegar cualquiera de sus atribuciones. Con ello se facilitarían el monitoreo y la supervisión de la Comisión del Servicio Público y se aseguraría que las funciones delegadas se ejercieran correctamente. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.5 en la sección 3.4 de este informe).

[207] En sexto lugar, con respecto a las excepciones a la jurisdicción de la Comisión del Servicio Público, el Comité observa la existencia de “trabajadores por contrato” en el servicio público de Guyana. Estos trabajadores por contrato no disfrutaban de las garantías establecidas por las Reglas 76 y 77 de la Comisión del Servicio Público, que permiten la revisión por la Comisión del Servicio Público de las sanciones disciplinarias aplicadas a los funcionarios públicos. Además, estos “trabajadores por contrato” no tienen derecho de apelar la decisión de la Comisión del Servicio Público ante el Tribunal de Apelaciones del Servicio Público.

[208] Así pues, estos “trabajadores por contrato” pueden ser particularmente vulnerables a represalias y a que no se renueven sus contratos si deciden denunciar fraudes y corrupción que involucren a sus compañeros de trabajo y superiores.

[209] Considerando que el tema de los sistemas para proteger a los servidores públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción se analizó detalladamente en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis del MESICIC,<sup>121</sup> el Comité no formulará una nueva recomendación al respecto, pero reitera las recomendaciones contenidas en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis del MESICIC.<sup>122</sup>

[210] En relación con el tema anterior, durante la visita *in situ*, el representante del Instituto de Transparencia de Guyana<sup>123</sup> señaló que: “*La Constitución le otorga a la Comisión del Servicio Público la facultad de nombramiento para puestos públicos, y de destituir y ejercer control disciplinario sobre las personas que ocupan estos puestos permanente o interinamente. Con ello se obtiene un alto grado de seguridad de que las prácticas de empleo gubernamentales son justas, equitativas y transparentes. Existen reglas detalladas para el reclutamiento, la transferencia, el ascenso y la destitución de los funcionarios públicos.*”

[211] *Una revisión de las estimaciones de ingresos y gastos para 2012, presentadas en la Asamblea Nacional, reveló que un número significativo de personas son empleadas por contrato, sin la participación de la Comisión del Servicio Público. Además, no existen pruebas que indiquen cómo seleccionaron y remuneran a estas personas las agencias involucradas, por lo que se trata de un asunto de transparencia.*”

[212] Considerando que el tema de los sistemas para la contratación de funcionarios públicos se analizó detalladamente en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis del MESICIC,<sup>124</sup> el Comité no

---

<sup>121</sup> Véase el “Informe Relativo a la Implementación en la República Cooperativa de Guyana de las Disposiciones de la Convención Seleccionadas para ser Analizadas en la Segunda Ronda”, págs. 11, 12 y 21. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic\\_II\\_inf\\_guy\\_en.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic_II_inf_guy_en.pdf).

<sup>122</sup> *Ibid.*, pág. 21.

<sup>123</sup> Véase la presentación del Instituto de Transparencia de Guyana, págs. 8 y 9.

<sup>124</sup> Véase el “Informe Relativo a la Implementación en la República Cooperativa de Guyana de las Disposiciones de la Convención Seleccionadas para ser Analizadas en la Segunda Ronda”, págs. 2 a 5, 18 y 19. Disponible en:

formulará una nueva recomendación al respecto, pero reitera las recomendaciones contenidas en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis del MESICIC.<sup>125</sup>

[213] En séptimo lugar, durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión del Servicio Público observaron que la capacitación de los servidores públicos es responsabilidad del Ministerio del Servicio Público y presentaron información sobre las actividades de capacitación realizadas por la Comisión tanto interna como externamente.<sup>126</sup> A pesar de la falta de detalles y datos específicos suministrados, el Comité observa que no hubo ninguna actividad de capacitación específica en relación con el tema de la ética y la prevención de la corrupción.<sup>127</sup>

[214] Como ya se dijo, el Comité estima que convendría a Guyana establecer una estrategia articulada anticorrupción. El Comité considera además que tal estrategia debería incluir también la capacitación de los funcionarios públicos sobre ética y mecanismos para prevenir y combatir el fraude y la corrupción en el sector público. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.6 en la sección 3.4 de este informe).

[215] En octavo lugar, con respecto a los mecanismos de rendición de cuentas, el Comité observa que aunque la Comisión del Servicio Público prepara informes anuales y un informe final al concluir cada período de titularidad de la Comisión del Servicio Público, no ocurre lo mismo con respecto a la Comisión del Servicio Judicial. Sin embargo, el Comité observa que no existe la obligación legal de que ninguna de las Comisiones de Servicio prepare y publique tales informes.

[216] El Comité observa además que ninguna de las Comisiones de Servicio analizadas tiene un sitio Web. En este sentido, el Comité observa que una de las recomendaciones formuladas por la Comisión del Servicio Público en sus informes anuales tanto de 2011 como de 2012, fue la necesidad de contar con un sitio Web en el que pudieran publicarse circulares, formatos de solicitud, descripciones de puestos y sus especificaciones para que fueran accesibles al público.

[217] Por lo antes expuesto y ante la necesidad de mejorar la rendición de cuentas de las Comisiones de Servicio en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité formulará las recomendaciones correspondientes (ver recomendaciones 3.4.7 y 3.4.8 en la sección 3.4 de este informe).

[218] Finalmente, con respecto al presupuesto de la Comisión del Servicio Público, el Comité observa que aunque ha ido aumentando en forma modesta en los últimos cinco años, representa solo alrededor del 0,02% del presupuesto nacional, porcentaje que en los últimos cinco años se ha ido reduciendo ligeramente, del 0,030% en 2008 al 0,022% en 2013.

---

[http://www.oas.org/juridico/english/mesicic\\_II\\_inf\\_guy\\_en.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic_II_inf_guy_en.pdf).

<sup>125</sup> *Ibid.*, págs. 18 y 19.

<sup>126</sup> Los detalles sobre las actividades de capacitación llevadas a cabo en 2012-2013 están contenidos en las diapositivas 11 y 12 de la presentación de la Comisión del Servicio Público durante la visita *in situ*. La información sobre las actividades de capacitación de 2010-2011 está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_train.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_train.pdf).

<sup>127</sup> Al respecto, Guyana informó que la exposición a capacitación contra el fraude y la corrupción forma parte del programa de inducción del Ministerio del Servicio Público para los empleados nuevos del servicio público, que se lleva a cabo dos veces al año. El programa de capacitación sobre Ética en la oficina que maneja la Comisión del Servicio Público incluye ética y prevención de la corrupción. El programa de capacitación del Contralor General para el personal contable en el sector público sobre contabilidad y procedimientos financieros en el sector público también incluye prevención de la corrupción.

[219] En este sentido, el informe anual 2012 de la Comisión del Servicio Público señala que<sup>128</sup> “*En conclusión, la Comisión logró su objetivo a pesar de experimentar una dotación de personal menor en el Departamento de Personal e incluso emitió menos circulares de vacantes. Los comisionados trabajaron más arduamente en el año analizado. Todos los comisionados estuvieron presentes en el panel para llevar a cabo las entrevistas para todos los puestos en las escalas GS:3 a GS:14. Esto provocó restricciones en la asignación presupuestal de la Comisión para el año, pero lo manejamos bien y logramos un pequeño ahorro para llevar a cabo un evento social. El presupuesto de la Comisión fue aprobado sin recortes, pero el Ministerio de Finanzas requirió cierto tiempo para desembolsar los montos para ciertos rubros: 6242 (mantenimiento de edificios), 6284, 6294 y 6261 (viajes locales y subsistencia).*”

[220] El Comité observa además que el tema de las demoras para el desembolso de los fondos para la Comisión del Servicio Público también se registró en el informe anual de 2011.<sup>129</sup>

[221] Por lo antes expuesto, el Comité observa con preocupación las demoras continuas en el desembolso de fondos para la Comisión del Servicio Público, particularmente de aquellos recursos que garantizan que los miembros de la Comisión del Servicio Público puedan visitar las distintas regiones del país para realizar las labores de la Comisión. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.9 en la sección 3.4 de este informe).

### **3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas.**

[222] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados de la Comisión del Servicio Público y de la Comisión del Servicio Judicial con respecto al cumplimiento de sus funciones, entre ellos los siguientes:

[223] Con respecto al ejercicio de procedimientos disciplinarios contra los funcionarios públicos bajo el ámbito de la Comisión del Servicio Público, en su respuesta al cuestionario, Guyana señala que: “*El informe de la Comisión del Servicio Público del 7 de julio de 2007 al 6 de julio de 2010 (copia anexa) muestra en sus páginas 9 y 10 que se destituyó a 141 personas en el período entre 2007 y 2010 por una variedad de motivos, incluidas prácticas fraudulentas. Sin embargo, los datos suministrados no permiten desglosar las destituciones por prácticas fraudulentas de las provocadas por ausencia no autorizada o incumplimiento del deber. Este Informe también hace referencia a los casos ante los tribunales, páginas 19 y 20, y al estado de estos casos.*”<sup>130</sup>

[224] Asimismo, durante la visita *in situ*, la Comisión del Servicio Público suministró la siguiente tabla con información sobre las medidas disciplinarias (destituciones) impuestas por la Comisión del Servicio Público de 2008 a octubre de 2013,<sup>131</sup> así como los informes anuales de 2008 a 2012 que también contienen el número de funcionarios públicos destituidos cada año:

<sup>128</sup> Informe Anual de la Comisión del Servicio Público 2012, pág. 14. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_annual12.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_annual12.pdf).

<sup>129</sup> Informe Anual de la Comisión del Servicio Público 2011, pág. 14. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_annual11.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_annual11.pdf).

<sup>130</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 22.

<sup>131</sup> Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_disci.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_disci.pdf).

<b>AÑO</b>	<b>No. DE PERSONAS DESTITUIDAS</b>	<b>MOTIVO DE LA DESTITUCIÓN</b>	<b>No. TOTAL DE PERSONAS DESTITUIDAS</b>
2008	22	Ausencia no autorizada del trabajo	<b>50</b>
	26	No presentación de la notificación requerida con	
	1	Bajo la influencia del alcohol	
	1	Conducta inadecuada en el trabajo	
2009	36	Ausencia no autorizada del trabajo	<b>81</b>
	38	No presentación de la notificación requerida con	
	2	Falsificación de requisitos	
	4	Ausencia con comunicación	
	1	Conducta fraudulenta	
2010	25	No presentación de la notificación requerida con	<b>52</b>
	25	Ausencia no autorizada del trabajo	
	1	Abandono de deberes	
	1	Negligencia de deberes	
2011	26	No presentación de la notificación requerida con	<b>63</b>
	35	Ausencia no autorizada del trabajo	
	1	Conducta fraudulenta	
	1	Incumplimiento de contrato en el desempeño de	
2012	10	No presentación de la notificación requerida con	<b>45</b>
	1	No reanudación de deberes	
	30	Ausencia no autorizada del trabajo	
	2	Conducta no profesional	
	2	Conducta deshonesta en el desempeño de	
2013	11	No presentación de la notificación requerida con	<b>30</b>
	13	Ausencia no autorizada del trabajo	
	5	Mala conducta en el trabajo	
	1	Bajo la influencia del alcohol	

[225] Sin embargo, el Comité observa que, con excepción del número de destituciones en 2010, las cifras contenidas en la tabla anterior no corresponden a los distintos informes elaborados por la Comisión del Servicio Público.

[226] Las incongruencias detectadas en la información suministrada por la Comisión del Servicio Público se resumen en la siguiente tabla:

<b>AÑO</b>	<b>TABLA SUMINISTRADA POR LA COMISIÓN DEL</b>	<b>NÚMERO DE DESTITUCIONES EN EL INFORME ANUAL</b>	<b>NÚMERO DE DESTITUCIONES EN EL INFORME SOBRE TITULARIDAD DE LA</b>
------------	---	--	--

	SERVICIO PÚBLICO <sup>132</sup>		COMISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO – JULIO 2007- JULIO 2010 <sup>133</sup>
2008	50	91 <sup>134</sup>	54
2009	81	82 <sup>135</sup>	75
2010	52	52 (congruente) <sup>136</sup>	No aplicable
2011	63	59 <sup>137</sup>	No aplicable
2012	45	51 <sup>138</sup>	No aplicable

[227] El Comité observa que no solamente son incongruentes estas cifras,<sup>139</sup> sino que además no se han desglosado lo suficiente para permitir un análisis exhaustivo con respecto al ejercicio del control disciplinario por parte de la Comisión del Servicio Público, particularmente en casos de mala conducta relacionada con fraude, corrupción o conflictos de intereses.<sup>140</sup> Por ejemplo, no queda claro cuántos procedimientos disciplinarios están en proceso, cuántos están pendientes y cuántos se trasladaron de años anteriores. Esta información ayudaría a determinar si hay un alto volumen de casos pendientes en el procesamiento de los procedimientos disciplinarios.

[228] También sería útil contar con información sobre el número de cargos desestimados y las razones de la desestimación. Además, no se suministró información adicional sobre las razones por las que se instituyeron los procedimientos disciplinarios o por qué no se instituyeron procedimientos disciplinarios tras la presentación de una denuncia. En este sentido, el Comité observa particularmente la ausencia de acciones disciplinarias adoptadas en casos de sobrepagos a contratistas, uno de los principales hallazgos del Informe Anual 2012 de la Oficina de Auditoría, citado ya en la sección 1.3 anterior:

<sup>132</sup> Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_disci.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_disci.pdf).

<sup>133</sup> Informe sobre Titularidad de la Comisión del Servicio Público – Julio 2007-Julio 2010, págs. 9 y 10. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_tenure.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_tenure.pdf).

<sup>134</sup> Informe Anual de la Comisión del Servicio Público 2008, pág. 8. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_an08.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_an08.pdf).

<sup>135</sup> Informe Anual de la Comisión del Servicio Público 2009, pág. 7. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_an09.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_an09.pdf).

<sup>136</sup> Informe Anual de la Comisión del Servicio Público 2010, pág. 7. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_an10.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_an10.pdf).

<sup>137</sup> Informe Anual de la Comisión del Servicio Público 2011, pág. 8. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_anual11.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_anual11.pdf).

<sup>138</sup> Informe Anual de la Comisión del Servicio Público 2012, pág. 8. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_anual12.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_anual12.pdf).

<sup>139</sup> Guyana informó que la Comisión del Servicio Público, tras conciliar sus datos, confirmó que la información contenida en el informe 2007-2010 es la correcta.

<sup>140</sup> El Comité observa, sin embargo, que las infracciones del Código de Conducta de las personas de la vida pública establecido en la Ley de la Comisión de Integridad son investigadas por la Comisión de Integridad y no por las Comisiones de Servicio.

[229] “9. *Habían ocurrido una cantidad significativa se sobrepagos a contratistas en las obras evaluadas por contratos celebrados por los ministerios, departamentos y regiones en períodos anteriores, y varios ministerios y regiones enfrentaban graves dificultades para lograr recuperar los montos excesivos pagados en relación con varios contratos. Asimismo, algunos ministerios y regiones siguieron haciendo sobrepagos en relación con varios contratos en 2012 y en años anteriores, como se muestra a continuación. Esta tendencia continua, aunada a la ausencia de pruebas que sugirieran la aplicación de medidas disciplinarias de cualquier tipo a los empleados de ingeniería o de otras áreas encargados de la evaluación de las obras en curso y de la certificación de los pagos por avances es preocupante e indica una falta percibida de acciones de la administración para remediar la situación imperante* (énfasis añadido).<sup>141</sup>

[230] Como ya se dijo en la sección anterior, la Comisión del Servicio Judicial no prepara ni publica informes anuales. Por lo tanto, no se dispone de información estadística sobre medidas disciplinarias. Sin embargo, durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión del Servicio Judicial informaron que solamente ha habido dos casos de suspensión de magistrados en los últimos dos años (ambos fueron casos de “irresponsabilidad magisterial en el desempeño de sus funciones”). Los representantes de la Comisión del Servicio Judicial informaron asimismo que se intentó aplicar medidas disciplinarias en un tercer caso, pero el proceso se suspendió.<sup>142</sup>

[231] Tomando en consideración que el Comité no cuenta con más información que la expresada anteriormente que le permita efectuar una evaluación completa de los resultados en esta materia, el Comité le formulará una recomendación al país analizado para que considere mantener y publicar estadísticas, como se establece en el Cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis. Este tipo de información ayudaría al Comité a realizar una evaluación exhaustiva con respecto a los resultados objetivos obtenidos en la aplicación del marco jurídico y otras medidas existentes para la Comisión del Servicio Público y la Comisión del Servicio Judicial, como corresponde a la implementación del artículo III, párrafo 9, de la Convención. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.10 en la sección 3.4 del Capítulo II del presente informe).

### 3.4. Conclusiones y recomendaciones.

[232] Con base en el análisis integral realizado con respecto a las Comisiones de Servicio en los acápites anteriores, en particular la Comisión del Servicio Público y la Comisión del Servicio Judicial, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[233] **La República Cooperativa de Guyana ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer las Comisiones de Servicio como órganos de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[234] En vista de los comentarios planteados en esa sección, el Comité sugiere que el país analizado considere las siguientes recomendaciones:

3.4.1 Fortalecer la Comisión del Servicio Judicial suministrándole los recursos presupuestales y humanos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones,

<sup>141</sup> Informe Anual de la Oficina de Auditoría 2012, pág. vii. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_annual\\_rep.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_annual_rep.pdf).

<sup>142</sup> Asimismo, los representantes de la Comisión del Servicio Judicial informaron que no se han recibido formalmente quejas del público contra miembros del poder judicial. Aunque algunos podrían hablar personalmente con el Canciller Interino, cuando se les solicita presentar sus quejas por escrito, temen firmarlas. En este sentido, los representantes de la Comisión del Servicio Judicial indicaron que se requiere legislación para la protección de denunciantes.



incluyendo la preparación y la implementación de programas de capacitación para los magistrados, jueces y funcionarios jurídicos y judiciales, dentro de los recursos disponibles (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).

- 3.4.2 Ampliar la capacitación impartida a los magistrados y jueces para incluir temas como la ética judicial y la sensibilización contra la corrupción (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.3 Considerar modificar el Reglamento del Servicio Público en el sentido de que el hecho de que un funcionario haya sido absuelto de un cargo penal presentado en cualquier corte no impida que se instituya un proceso en su contra con base en el Reglamento del Servicio Público con respecto de un supuesto acto de mala conducta implícito en dicho cargo penal (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.4 Reestablecer el Tribunal de Apelaciones del Servicio Público y dotarlo de los recursos presupuestales y humanos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, dentro los recursos disponibles (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.5 Establecer y publicar pautas y procedimientos por escrito antes de cualquier delegación de las facultades de la Comisión del Servicio Público, a fin de permitir la vigilancia y supervisión de manera que se asegure que las funciones delegadas por la Comisión se ejerzan correctamente (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.6 Impartir capacitación a los funcionarios públicos sobre ética y sobre los mecanismos para prevenir y combatir el fraude y la corrupción en el sector público (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.7 Considerar el establecimiento de la obligación legal de las Comisiones de Servicio, particularmente la Comisión del Servicio Público y la Comisión del Servicio Judicial, de rendir cuentas y publicar informes anuales en los que se divulguen sus actividades y los resultados obtenidos, así como el desempeño interno de la institución, sus fines y sus logros (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.8 Establecer sitios Web para la Comisión del Servicio Público y la Comisión del Servicio Judicial y mantenerlos actualizados para permitir el fácil acceso del público a la información relativa al trabajo de las comisiones respectivas. Asegurar que los respectivos sitios Web contengan, entre otras cosas, los informes anuales a los que se refiere la recomendación anterior, la legislación aplicable, formatos de solicitud y descripciones y especificaciones de puestos (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.9 Asegurar que la Comisión del Servicio Público reciba sin demora los fondos aprobados en su presupuesto anual, a fin de evitar que las demoras en el desembolso de los recursos no interfieran con la capacidad de la Comisión de llevar a cabo su labor (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).



- 3.4.10 Mantener y publicar estadísticas que suministren una mayor consistencia, claridad y detalle sobre el origen y los resultados de todos los tipos de procedimientos disciplinarios llevados a cabo por las Comisiones de Servicio, como información sobre las razones para instituir (o no) un procedimiento disciplinario, sus resultados, las sanciones impuestas y las razones para desestimarlos, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (ver sección 3.3 del capítulo II de este informe).

## **4. LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES**

### **4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.**

[235] La Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones (NPTA) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[236] La sección 16(1) de la Ley de Adquisiciones 2003 establece la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones como dependencia del Ministro de Finanzas.

[237] Según la sección 16(2) de la Ley de Adquisiciones 2003, la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones es manejada por un Consejo Nacional (NPTAB) cuyos miembros son nombrados por el Ministro de Finanzas de entre personas de integridad incuestionable que han demostrado capacidad en negocios, derecho, auditoría, finanzas y administración. El Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones está formado por no menos de siete (7) miembros: no más de cinco (5) del servicio público y no más de tres (3) del sector privado, tras consulta con los representantes del sector privado. Dos (2) miembros deben serlo de tiempo completo y uno de ellos debe ser el Presidente. El resto de los miembros son de medio tiempo.

[238] La sección 16(5) establece además que el plazo de los miembros del Consejo es de dos años. La sección 16(8) dispone que cada uno de los miembros debe declarar sus activos a la Comisión de Integridad.

[239] De acuerdo con la sección 16(10), el Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones se reúne semanalmente. Cuatro de sus miembros, incluyendo al Presidente, integran un quórum, y el Presidente tiene voto de calidad [sección 16(9)].

[240] En relación con sus funciones, la sección 17(1) de la Ley de Adquisiciones 2003 le asigna al Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones la función principal de “*ejercer jurisdicción sobre las licitaciones cuyo valor supera el monto prescrito por las disposiciones reglamentarias,<sup>143</sup> nombrar a un conjunto de evaluadores durante el período que determine,<sup>144</sup> y mantener sistemas eficientes de registro y control de calidad.*”

---

<sup>143</sup> Ver el Anexo 1 de la Ley de Adquisiciones (2004). Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2\\_guv\\_regul\\_procurement\\_act\\_03.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_guv_regul_procurement_act_03.pdf).

<sup>144</sup> De conformidad con la sección 17(4) de la Ley de Adquisiciones 2003, para cada adquisición sujeta a su jurisdicción, el Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones deberá seleccionar y nombrar de entre el conjunto de evaluadores designados de acuerdo con la subsección (1), a tres personas con los conocimientos especializados y la experiencia pertinentes, como miembros de un Comité de Evaluación para dicha adquisición, y le remitirá a dicho Comité,

[241] Asimismo, de conformidad con la sección 17(2) de la Ley de Adquisiciones 2003, en tanto se establece la Comisión de Adquisiciones Públicas,<sup>145</sup> el Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones también se encargará de: (a) establecer las normas que rijan las adquisiciones para llevar a cabo las disposiciones de la Ley de Adquisiciones 2003; (b) determinar los formatos de los documentos de adquisición;<sup>146</sup> (c) organizar seminarios de capacitación sobre adquisición; (d) rendir informes anuales al Ministro sobre la eficacia de los procesos de adquisición, y recomendar en estos informes cualquier enmienda a la Ley de Adquisiciones 2003 que pueda ser necesaria para mejorar la eficacia del proceso de adquisición; (e) como se prevé en la Sección 53, revisar las decisiones de las instituciones adquirentes cuando se le solicite; y (f) adjudicar procedimientos de inhabilitación.<sup>147</sup>

[242] En relación con el personal del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones, la sección 18(1) de la Ley de Adquisiciones 2003 dispone que este Consejo, en consulta con el Ministro de Finanzas, establecerá una Secretaría que se encargará de la gestión operativa de la Administración. Las actividades cotidianas de la Secretaría serán manejadas por personal profesional con experiencia y capacidades comprobadas.<sup>148</sup> La sección 18(2) establece además que se dotará a la Secretaría del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones del personal, la capacitación y el equipo necesarios para cumplir sus responsabilidades. La sección 18(3) establece el deber de cada uno de los miembros de la Secretaría de declarar sus activos a la Comisión de Integridad.

[243] Durante la visita *in situ*, los representantes del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones informaron que este Consejo apoyado por los siguientes: Un Presidente del Consejo Nacional; un Vicepresidente; un Gerente General; dos (2) Especialistas en Adquisiciones; un (1) Jefe de la Sección de Tecnología de Información; Cuatro (4) Funcionarios de Adquisiciones; tres (3) Secretarios II; un (1) Asistente de Oficina; y un (1) encargado de limpieza.<sup>149</sup>

---

sin demora, todas las licitaciones que se reciban oportunamente. El Comité de Evaluación valorará las licitaciones de acuerdo con las disposiciones de la sección 39 de la Ley de Adquisiciones.

<sup>145</sup> El artículo 212W de la Constitución prevé el establecimiento de una Comisión de Adquisiciones Públicas (PPC) independiente para la supervisión de las adquisiciones públicas y sus procedimientos. Sin embargo, la Comisión de Adquisiciones Públicas no se ha establecido todavía. Se formuló una recomendación al respecto en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis del MESICIC. Véase el “Informe Relativo a la Implementación en la República Cooperativa de Guyana de las Disposiciones de la Convención Seleccionadas para ser Analizadas en la Segunda Ronda”, págs. 9 y 19. Disponible en:

[http://www.oas.org/juridico/english/mesicic\\_II\\_inf\\_guy\\_en.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic_II_inf_guy_en.pdf).

<sup>146</sup> Que incluyen, de manera no limitativa: (i) los documentos estándar de licitación; (ii) los documentos de preselección; (iii) los contratos; (iv) los formularios de evaluación; (v) los manuales, directrices y procedimientos de adquisición.

<sup>147</sup> Según la sección 17(3) de la Ley de Adquisiciones 2003, cuando se establezca la Comisión de Adquisiciones Públicas, las responsabilidades del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones se limitarán a las previstas en la sección 17(1), y todas las demás responsabilidades relacionadas en la sección 17(2) serán responsabilidad de la Comisión de Adquisiciones Públicas.

<sup>148</sup> La respuesta de Guyana al Cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 12, señala lo siguiente con respecto a la dotación de personal de la Secretaría del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones: “(...) *su personal es suministrado a través del Ministerio de Finanzas y por lo tanto se trata de personas designadas por la Comisión del Servicio Público que también podrían optar por trabajar por contrato fijo por un año o en la nómina de personal fijo pensionable, como todos los demás servidores públicos.*”

<sup>149</sup> Los representantes informaron también que el puesto de Gerente General ha estado vacante desde mediados de enero de 2013 y que los puestos de dos (2) Funcionarios de Adquisiciones y un (1) Funcionario de Tecnología de Información están vacantes. Se prevé cubrir estos puestos pronto. Ver: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_npta2.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_npta2.pdf).

[244] Con respecto a capacitación, la respuesta del país analizado al cuestionario<sup>150</sup> presenta información sobre un programa conjunto del Ministerio de Finanzas y la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones en 2012 y 2013 orientado a capacitar a evaluadores y contratistas sobre las reglas y procedimientos de la Ley de Adquisiciones 2013 y su reglamento.

[245] Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones suministraron información sobre sus programas de fortalecimiento de capacidad y capacitación.<sup>151</sup> Los representantes del Consejo informaron que se ha impartido capacitación anualmente desde 2005. Se ha capacitado a más de 400 personas, con ayuda de consultores externos en etapas críticas. Las áreas de capacitación cubiertas son: Marco Jurídico y Procesal, Disposiciones Normativas; Papel y Funciones de las Entidades y Órganos de Adquisiciones; Métodos de Adquisición; Preselección y Evaluación de Licitaciones; y Tecnología de la Información y Adquisiciones por Vía Electrónica.

[246] En relación con la existencia de procedimientos documentados para el desempeño de sus tareas, la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones ha producido el siguiente conjunto de manuales para orientar al personal, así como sobre la conducta ética del personal: El Manual de Procedimientos del Consejo Nacional de Licitaciones de Guyana (febrero de 2009);<sup>152</sup> el Manual de Criterios Normalizados de Evaluación para Preselección y Licitación (adquisición de bienes, obras y servicios, excepto servicios de consultoría) (mayo de 2009);<sup>153</sup> la Guía de Adquisiciones Públicas de Guyana (marco jurídico y de políticas de adquisición pública) (mayo de 2009);<sup>154</sup> el Manual de Planeación de Adquisiciones de Guyana (septiembre de 2010);<sup>155</sup> y diversos documentos estándar de licitación (revisados en septiembre de 2012): (a) criterios de evaluación de consultorías y empresas;<sup>156</sup> (b) criterios de evaluación de consultores individuales;<sup>157</sup> y (c) adquisición de otros servicios.<sup>158</sup>

[247] Con respecto a la implementación de sistemas o tecnologías modernas para facilitar su trabajo, la respuesta del país analizado al cuestionario<sup>159</sup> informa que la Ley de Adquisiciones 2003 fue enmendada en 2010 para permitir el uso de los medios de comunicación electrónicos para la publicación de notificaciones de licitaciones. Por lo tanto, las licitaciones se publican en los medios escritos y en los sitios Web de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones y de e-procure.<sup>160</sup>

[248] Además, durante la visita *in situ*, los representantes de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones informaron que se ha desarrollado para la Administración un Sistema de Información Gerencial (SIG) acorde con los requisitos de la Ley de Adquisiciones y su reglamento.<sup>161</sup>

---

<sup>150</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, págs. 14-15.

<sup>151</sup> Los detalles sobre las actividades de capacitación del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones están disponibles en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_npta2.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_npta2.pdf).

<sup>152</sup> Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_man09.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_man09.pdf).

<sup>153</sup> Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_ev09.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_ev09.pdf).

<sup>154</sup> Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_proc09.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_proc09.pdf).

<sup>155</sup> Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_proc10.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_proc10.pdf).

<sup>156</sup> Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_firms.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_firms.pdf).

<sup>157</sup> Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_indi.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_indi.pdf).

<sup>158</sup> Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_serv.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_serv.pdf).

<sup>159</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 16, nota al pie 28.

<sup>160</sup> <http://eprocure.gov.gy/>.

<sup>161</sup> Ver: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_npta1.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_npta1.pdf).

[249] A fin de mantener a los ciudadanos informados sobre sus actividades, de conformidad con la sección 4(1) del Reglamento de Adquisiciones, la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones ha establecido y mantenido un sitio Web<sup>162</sup> para publicar los contratos adjudicados por los distintos consejos de licitaciones y demás información relativa con las adquisiciones públicas en general. El sitio Web de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones incluye, entre otras cosas, información general sobre el trabajo de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones, que incluye la adjudicación de licitaciones, minutas sobre aperturas de licitaciones, legislación relativa a adquisiciones, manuales sobre disposiciones reglamentarias y los documentos estándar de licitación.

[250] Además, la sección 38(1) de la Ley de Adquisiciones 2003 dispone que las ofertas de licitación deben ser abiertas públicamente y se deben leer en voz alta sus montos.

[251] Con respecto a la supervisión contable, financiera, presupuestal, operativa y relativa a bienes, los representantes informaron durante la visita *in situ* que el Departamento de Auditoría Interna del Ministerio de Finanzas es responsable del control interno de la Secretaría de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones.

[252] Además, con respecto a otros mecanismos de control, los representantes del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones informaron que “*se les ha recordado a todos los miembros de los Consejos Nacional, Regionales y Ministeriales de Licitaciones, así como cada uno de los miembros de la Secretaría de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones, su obligación según las secciones 16(8), 18(3), 19(6) y 22(4) de la Ley de Adquisiciones 2003, de declarar sus activos a la Comisión de Integridad, vide a memoranda del Consejo Nacional.*”<sup>163</sup>

[253] Con respecto a sus recursos presupuestarios, de acuerdo con la información solicitada y recibida durante la visita *in situ*, el presupuesto total anual (presupuesto corriente más presupuesto de capital) asignado a la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones en los últimos cinco años es el siguiente (en dólares guyaneses):<sup>164</sup>: G\$ 27.588.000 (2008); G\$ 35.888.000 (2009); G\$ 39.438.000 (2010); G\$ 44.778.000 (2011); y G\$47.000.000 (2012).<sup>165</sup>

[254] En relación con la transparencia y la rendición de cuentas, la sección 17(2)(d) de la Ley de Adquisiciones 2003 requiere que el Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones informe anualmente al Ministro de Finanzas sobre la eficacia del proceso de adquisición, y que recomiende cualquier enmienda a dicha Ley que pudiera ser necesaria para mejorar la eficacia del proceso de adquisiciones.

[255] Asimismo, la sección 54(1) de la Ley de Adquisiciones 2003 prevé que “*el Gabinete estará facultado para revisar todas las adquisiciones cuyo valor se superior a quince millones de dólares guyaneses. El Gabinete realizará esta revisión con base en un informe de evaluación de licitaciones agilizado que adoptará la autoridad mencionada en la sección 17(2). El Gabinete y, tras su establecimiento, la Comisión de Adquisiciones Públicas, revisará anualmente el umbral del Gabinete para la revisión de las adquisiciones, con el objetivo de aumentar dicho umbral con el tiempo de*

---

<sup>162</sup> <http://www.npta.gov.gy/>.

<sup>163</sup> Ver: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_npta2.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_npta2.pdf) (pág. 3).

<sup>164</sup> 1 dólar estadounidense = 200 dólares guyaneses (al 1 de noviembre de 2013).

<sup>165</sup> La información completa sobre el presupuesto de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_npta2.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_npta2.pdf).

*manera que se promueva el fin de eliminar progresivamente la participación del Gabinete y descentralizar el proceso de adquisición.”*

[256] Según las secciones 54(2), (3) y (5), en la realización de esta revisión, el Gabinete podrá objetar la adjudicación del contrato de adquisición solamente si determina que la institución adquirente no cumplió los procedimientos de adquisición correspondientes. El Gabinete tiene 21 días para ejercer su derecho de objetar una adjudicación. Si el Gabinete objeta una adjudicación, el caso se remitirá a la institución adquirente para su examen ulterior. Sin embargo, la Ley de Adquisiciones 2003 no autoriza al Gabinete a adjudicar una licitación a ningún otro proveedor o contratista [sección 54(4)].<sup>166</sup>

[257] Por último, de conformidad con la sección 54(6), la participación del Gabinete en la revisión de las adjudicaciones para adquisiciones cesará una vez constituida la Comisión de Adquisiciones Públicas, excepto en relación con los asuntos a los que se refiere la sección 54(1) que están pendientes.<sup>167</sup>

#### **4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas.**

[258] La Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 4.1. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas.

[259] En primer lugar, el Comité desea subrayar que el tema de los “Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del estado” se analizó durante la Segunda Ronda del MESICIC y no es objeto de la actual ronda de análisis.<sup>168</sup> Por lo tanto, la cobertura de la revisión de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones se limitará a las actividades relacionadas con la prevención de la corrupción que, de conformidad con la sección 17(2) de la Ley de Adquisiciones 2003, le corresponden al Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones hasta que se establezca la Comisión de Adquisiciones Públicas.

[260] En este sentido, el Comité también desea reiterar las recomendaciones contenidas en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis del MESICIC, en especial la necesidad de establecer la Comisión de Adquisiciones Públicas, prevista en la Constitución e independiente.<sup>169</sup>

[261] En segundo lugar, el Comité observa que una de las funciones asignadas al Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones en tanto se establece la Comisión de Adquisiciones Públicas, fue la adjudicación de procedimientos de inhabilitación [sección 17(2)(f) de la Ley de Adquisiciones 2003].

---

<sup>166</sup> De acuerdo con la información solicitada durante la visita *in situ*, en los últimos cinco años, el Gabinete solamente ha dejado de ejercer su no objeción en siete (7) casos: dos (2) en 2009 y cinco (5) en 2013. Esta información está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_num.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_num.pdf).

<sup>167</sup> En 2013 se presentó una enmienda a la Ley de Adquisiciones 2003 para mantener la función del Gabinete en las adquisiciones públicas incluso tras el establecimiento de la Comisión de Adquisiciones Públicas.

<sup>168</sup> Véase el “Informe Relativo a la Implementación en la República Cooperativa de Guyana de las Disposiciones de la Convención Seleccionadas para ser Analizadas en la Segunda Ronda”. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic\\_II\\_inf\\_guy\\_en.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic_II_inf_guy_en.pdf).

<sup>169</sup> *Ibid.*, págs. 8-11, 19 y 20.

[262] Sin embargo, durante la visita *in situ*, los representantes del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones informaron que la creación de una lista de empresas y particulares inhabilitados no se materializará hasta que entre en vigor un reglamento integral al respecto. Este reglamento establecería un procedimiento formal para la inhabilitación de contratistas e incluiría salvaguardias contra la aplicación abusiva o injustificada de las sanciones de inhabilitación.<sup>170</sup>

[263] Los representantes del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones informaron también que el Gobierno de Guyana estaba revisando actualmente una regla de inhabilitación propuesta, elaborada por una empresa asesora en el marco del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aprobada por el Consejo.<sup>171</sup>

[264] En este sentido, tomando en cuenta la importancia de que se cuente con procedimientos y mecanismos claros y justos de inhabilitación para la prevención de la corrupción, incluyendo sanciones pecuniarias, lo que aseguraría que el país analizado estuviera protegido de oferentes, proveedores y contratistas sin escrúpulos, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.1 en la sección 4.4 del presente informe).

[265] Adicionalmente, el Comité estima también que, a fin de asegurar la eficiencia de los mecanismos de inhabilitación, además de mantener una lista ampliamente difundida y actualizada constantemente de las empresas y particulares inhabilitados, las entidades de los tres poderes y de todas las esferas del gobierno deberían estar obligadas a verificar esta lista antes de adjudicar contratos a cualquier oferente, proveedor, contratista o consultor (ver recomendación 4.4.2 en la sección 4.4 del presente informe).

[266] En tercer lugar, el Comité observa que la Ley de Adquisiciones 2003 establece la obligación de los miembros del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones y de su Secretaría, así como de los Consejos Nacionales y de los Consejos de Licitación Ministeriales de presentar una declaración de activos a la Comisión de Integridad. Los empleados de cualquier agencia adquirente responsables de las adquisiciones también tienen la obligación de presentar dicha declaración.

[267] En este sentido, durante la visita *in situ*, los representantes del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones informaron que se les recordaba a todos los miembros del Consejo a través de memorandos de dicho Consejo su obligación de declarar sus activos a la Comisión de Integridad.<sup>172</sup> Sin embargo, se informó que no todos los miembros del Consejo lo han hecho.

[268] El Comité observa con preocupación la falta de aplicación de las disposiciones 16(8), 18(3), 19(6), 22(4) y 24(3) de la Ley de Adquisiciones 2003. El Comité observa además que el hecho de que la Comisión de Integridad no esté operando plenamente mientras no se nombre a su Presidente y a sus Comisionados no excusa a los miembros de los consejos de adquisiciones de su obligación con base en la Ley de Adquisiciones. El Comité estima que el incumplimiento de la obligación de suministrar estas declaraciones de activos o la presentación de información falsa deberían descalificar

---

<sup>170</sup> Ver: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_npta2.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_npta2.pdf) (págs. 5 y 6).

<sup>171</sup> *Ibid.*, pág. 6.

<sup>172</sup> Ver: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_npta2.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_npta2.pdf) (pág. 3).



a un miembro de cualquiera de estos consejos de conservar su puesto. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.3 en la sección 4.4 de este informe).

[269] Además, el Comité observa que la Ley de Adquisiciones 2003 contiene un importante requisito de declaración de información diseñado para evitar los conflictos de intereses en las adquisiciones públicas. La sección 60 de esta Ley establece el deber de los miembros de cualquier agencia con interés de cualquier tipo, directo o indirecto, en cualquiera de las deliberaciones de dicha agencia relacionadas con el proceso de licitación, de declarar la naturaleza de su interés en una reunión de dicha agencia. Votar en algún asunto sin declarar su interés es punible en procedimiento sumario con una multa de doscientos mil dólares guyaneses y pena de privación de la libertad durante seis meses, según la sección 60(4). Al respecto, el Comité estima que la multa para las personas que incumplen los requisitos de declaración debería tomar en cuenta el monto de la adquisición o contrato de que se trate.

[270] El Comité observa asimismo que la Ley de Adquisiciones no requiere que los miembros de los consejos de adquisiciones u otros funcionarios o empleados involucrados en actividades de adquisición presenten una declaración de intereses. En este sentido, el Comité reconoce que los riesgos de conflictos de intereses son significativos en los casos de personas en puestos de estos tipos. El Comité reconoce además que las declaraciones de intereses son una herramienta útil para prevenir y detectar conflictos de intereses.

[271] En vista de lo anterior, el Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendaciones 4.4.4 y 4.4.5 en la sección 4.4 de este informe).

[272] En cuarto lugar, el Comité observa que la sección 17(2)(d) de la Ley de Adquisiciones 2003 requiere que el Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones informe anualmente al Ministro de Finanzas sobre la eficacia del proceso de adquisición, y que recomiende cualquier enmienda a dicha Ley que pudiera ser necesaria para mejorar la eficacia del proceso de adquisiciones. El Comité observa, sin embargo, que estos informes no son públicos.

[273] A fin de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones, el Comité considera que estos informes deberían publicarse en el sitio Web del Consejo Nacional. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.6 en la sección 4.4 de este informe).

[274] En quinto lugar, con respecto a su Sistema de Información Gerencial (SIG), durante la visita *in situ*, los representantes del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones subrayaron unas cuantas deficiencias relacionadas con el sistema existente, que evitan que los usuarios aprovechen de manera óptima dicho sistema, como la falta de un modelo para la rendición de informes y el hecho de que los campos para las fechas en el SIG no están estandarizados, lo que genera errores en la clasificación de los datos sobre la adjudicación de los contratos por método de adquisición.

[275] Los representantes del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones informaron también que la Administración propone contratar a un consultor para que desarrolle una base de datos en el Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones para hacer frente las deficiencias de la base de datos existente y elabore formatos para la rendición de informes para todos los participantes, incluyendo un informe analítico para el Ministro de Finanzas.

[276] Por último, el Comité toma nota de la información suministrada durante la visita *in situ* en cuanto a la capacitación de especialistas en adquisiciones y talleres de sensibilización con evaluadores y el sector privado. El Comité resalta la importancia de estas actividades del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones y considera que deben ampliarse más para incluir la prevención y la investigación de sobornos, corrupción, confabulación y conflictos de intereses en las adquisiciones públicas.<sup>173</sup> El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.7 en la sección 4.4 de este informe).

#### **4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas.**

[277] La respuesta al cuestionario del país analizado suministra la siguiente información sobre los resultados obtenidos por la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones con respecto al cumplimiento de sus funciones:

[278] *“La Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones no ha logrado hasta ahora crear una lista de contratistas que no han cumplido cabalmente o cuyo trabajo ha sido de mala calidad, con largas demoras y extensiones o incompleto.*

[279] *El problema no recae en la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones misma, sino en el personal técnico de las instituciones, que podrían tener diseños de mala calidad o que aprueban como completados satisfactorios trabajos que posteriormente se identifican como insatisfactorios. Este tema también ha atraído la atención no solo de la Oficina de Auditoría de Guyana, sino también del Comité de Contabilidad Pública. Como resultado, se llevó a cabo un programa de capacitación de tres días con los funcionarios contables y el personal técnico en las 10 Regiones Administrativas en mayo de 2013 y el tema se planteó en la reunión trimestral de los Secretarios Permanentes con el Jefe de la Secretaría de la Presidencia, en presencia del Secretario del Tesoro y el Contralor General.*

[280] *Sin embargo, el Ministerio de Finanzas, a través de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones, ha sido más activo en la recuperación de recursos valiosos por mal desempeño y trabajos no concluidos recurriendo a las fianzas de seguros y a las obligaciones de liquidación. Se adjunta el documento “Daños liquidados” que incluye una indicación de los esfuerzos para recuperar recursos críticos para el erario.”<sup>174</sup>*

[281] Durante la visita *in situ*, los representantes del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones explicaron además que a falta de un reglamento sobre suspensión e inhabilitación, los clientes pueden aplicar otras sanciones a los contratistas (contenidas en los documentos estándar de licitación), como retener de cada debido al contratista la porción establecida en las condiciones especiales de contratación hasta la terminación de la totalidad de la obra (en el caso de trabajos defectuosos) y los daños liquidados que paga el contratista al empleador a la tasa diaria establecida en las condiciones especiales de contratación por cada día que se postergue la fecha de terminación (en el caso de demoras en la ejecución de los contratos).

[282] Por lo antes expuesto, el Comité toma nota de los importantes esfuerzos presentados para recuperar fondos de los contratistas incumplidos. No obstante, para prevenir y evitar este tipo de

---

<sup>173</sup> Los detalles sobre las actividades de capacitación del Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones están disponibles en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_npta2.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_npta2.pdf).

<sup>174</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 19. El documento anexo, con una lista de “Proyectos que produjeron daños liquidados”, está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_liq.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_liq.pdf).



situaciones en el futuro, el Comité reitera la importancia de que Guyana establezca procedimientos y mecanismos de inhabilitación claros y justos, así como de que cree y publique una lista de empresas y particulares inhabilitados y suministre resultados sobre su implementación, incluyendo cualquier sanción pecuniaria que se ordene pagar al Estado y los montos recuperados en realidad. Asimismo, el Comité estima que el reglamento sobre inhabilitación propuesto debe incluir sanciones no solamente para contratistas incumplidos, sino también para quienes se determine que pagaron sobornos a cualquier funcionario o servidor público guyanés. El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendaciones 4.4.1 y 4.4.8 en la sección 4.4 de este informe).

#### **4.4. Conclusiones y recomendaciones.**

[283] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[284] **La República Cooperativa de Guyana ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[285] En vista de los comentarios planteados en esa sección, el Comité sugiere que el país analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 4.4.1 Emitir un nuevo reglamento para la Ley de Adquisiciones 2003 a fin de establecer procedimientos y mecanismos de inhabilitación claros y eficientes, incluyendo sanciones pecuniarias, particularmente para las empresas que se determine que han pagado sobornos a cualquier funcionario o servidor público guyanés, asegurándose, a la vez, contar con salvaguardias contra la aplicación abusiva o injustificada de la sanción de inhabilitación (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.2 Mantener y publicar una lista actualizada constantemente de las empresas y particulares inhabilitados en la Gaceta Oficial así como en el sitio Web de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones y requerir que las instituciones de los tres poderes y de todas las esferas del gobierno verifiquen dicha lista antes de adjudicar contratos a oferentes, proveedores, contratistas o consultores (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.3 Considerar enmendar la Ley de Adquisiciones 2003 a fin de incluir expresamente que la falta de presentación de las declaraciones de activos o el suministro de información imprecisa o falsa en tales declaraciones a la Comisión de Integridad descalifique a un miembro de cualquiera de los consejos de conservar su puesto (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.4 Considerar requerir que los miembros de los consejos de adquisiciones, así como los oficiales responsables de adquisiciones presenten una declaración actualizada anualmente de sus intereses, así como establecer un mecanismo para asegurar el cumplimiento (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.5 Analizar la posibilidad de enmendar la sección 60(4) de la Ley de Adquisiciones 2003 a fin de establecer que la multa para quienes violen los requisitos de declaración

ahí establecidos tome en cuenta el monto de la adquisición o contrato en cuestión (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).

- 4.4.6 Publicar los informes anuales que requiere la 17(2)(d) de la Ley de Adquisiciones 2003 en el sitio Web de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.7 Adoptar las medidas necesarias para ampliar las actividades de capacitación de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones con cursos o módulos sobre prevención e investigación de sobornos, corrupción, confabulación y conflictos de intereses en las adquisiciones públicas (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.8 Mantener y publicar estadísticas sobre los procesos y mecanismos de inhabilitación, una vez establecidos, incluyendo las sanciones pecuniarias que se ordene pagar al Estado y los montos recuperados en realidad, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (ver sección 4.3 del capítulo II de este informe).

### **III. BUENAS PRÁCTICAS**

[286] De conformidad con lo previsto en el apartado V de la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda* y en la *Estructura* adoptada por el Comité para los informes de dicha Ronda, se alude a continuación a la buena práctica identificada por el Estado analizado, la cual ha deseado compartir con los demás países integrantes del MESICIC, por considerar que puede ser de beneficio para los mismos:

#### **- En relación con la Oficina de Auditoría de Guyana:**

[287] Proteger la independencia del Auditor General y de la Oficina de Auditoría: La buena práctica presentada por el país analizado describe las reformas constitucionales y legales que se efectuaron entre 1999 y 2003 dirigidas a proteger la independencia de la Oficina de Auditoría de Guyana. Se subrayan los siguientes aspectos de estas reformas: el nombramiento del Auditor General por el Presidente con base en la recomendación de la Comisión del Servicio Público con permanencia hasta los 65 años de edad; la eliminación de la obligación de la Oficina de Auditoría y el Auditor General de rendir informes al Ministerio de Finanzas y la de rendirlos en su lugar a directamente la Asamblea Nacional y a su Comité de Contabilidad Pública; la mejora de las funciones del Comité de Contabilidad Pública con disposiciones de rango constitucional de “supervisión general de la Oficina de Auditoría” sin interferir con la independencia del Auditor General y de la Oficina de Auditoría.

[288] Para mayor información, ver la respuesta del país analizado. Anexo II, págs. 82-85.

### **IV. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS**

[289] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por la República Cooperativa de Guyana en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas<sup>175</sup> y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional por el Estado analizado y, si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.<sup>176</sup>

[290] El Comité también tomará nota en este apartado del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

## **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

### **1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

#### Recomendación:

*Considerar la posibilidad de fortalecer la implementación de normas sobre conflictos de intereses, asegurando que sean aplicables a todos los funcionarios y empleados públicos, permitiendo la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.*

#### Medida (a) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Elaborar normas específicas, cuando sea apropiado, que delimiten la actuación de los servidores públicos en situaciones concretas, atendiendo a las funciones y actividades propias de cada institución y a las particularidades e importancia de los distintos cargos de la administración pública, así como mecanismos para hacerlas efectivas (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 1.1.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[291] En su respuesta,<sup>177</sup> el país analizado suministra información e informa respecto a la anterior medida,<sup>178</sup> de los cuales el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[292] – *La Ley de Auditoría 2004, que establece en su sección 6(1) que el Auditor General no deberá desempeñar ningún papel oficial directo o indirecto en ninguna institución o actividad privada o profesional de la cual podría beneficiarse o en la que podría influir a través de sus facultades como Auditor General y deberá declarar ante el Comité de Contabilidad Pública*

---

<sup>175</sup> Disponible en: <http://www.oas.org/juridico/english/guy.htm>.

<sup>176</sup> El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se encuentra incluido en el Anexo I de este Informe.

<sup>177</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, págs. 28-29.

<sup>178</sup> El Comité desea resaltar que, a pesar de que la mayoría de las disposiciones y/o medidas suministradas en la respuesta de Guyana en relación con esta medida existían ya durante la Primera Ronda de Análisis, el gobierno no las suministró en ese momento. Por lo tanto, el Comité no las tomó en consideración cuando formuló esta medida.

*cualquier de sus compromisos, obligaciones o inversiones que pudieran plantear un conflicto de intereses real o percibido.*

[293] – *El Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos (RPP) de la Oficina de Auditoría de Guyana (2006), que contiene un Código sobre Conflictos de Intereses aplicable a todo el personal. Este Código puede aplicarse a situaciones reales o percibidas de conflicto de intereses. El Código requiere que cada funcionario declare, de manera confidencial, cualquier participación o interés financiero externo que exija o pudiera exigir demandas incongruentes con sus responsabilidades oficiales o que pudiera inhibir su capacidad para desempeñar de manera objetiva los deberes que se le han asignado. El Auditor General es la autoridad responsable de suministrar orientación para casos de conflictos de intereses potenciales sobre la forma de resolver estos conflictos.*<sup>179</sup>

[294] – *La Ley de Adquisiciones 2003, que establece en su sección 60 el deber de los miembros de cualquier agencia con interés de cualquier tipo, directo o indirecto, en cualquiera de las deliberaciones de dicha agencia relacionadas con el proceso de licitación, de declarar la naturaleza de su interés en una reunión de dicha agencia. La no declaración es punible en procedimiento sumario con una multa de doscientos mil dólares guyaneses y pena de privación de la libertad durante seis meses.*<sup>180</sup>

[295] – *El Reglamento de la Comisión del Servicio Público 1998, que establece en su Regla 96 que ningún miembro o funcionario de la Comisión deberá aceptar ningún obsequio ni recompensa de ningún miembro del público por servicios prestados o por prestarse en el curso de sus responsabilidades oficiales.*<sup>181</sup>

[296] – *El Reglamento de la Comisión del Servicio Judicial de 2010, que establece en su Regla 6 que todos los funcionarios jurídicos nombrados por la Comisión se deberán conducir de tal manera que, entre otras cosas, no se coloquen en posiciones en que tengan o pudieran tener conflictos de intereses; se comprometa el ejercicio justo de sus funciones y deberes oficiales; se permita que se ponga en duda su integridad; se pongan en peligro o mermen el respeto o la confianza en la integridad del Servicio Judicial. La Regla 12 prohíbe específicamente a los funcionarios jurídicos (a) participar en cualquier trabajo privado a cambio de remuneración o beneficio que esté en conflicto con sus funciones oficiales; (b) utilizar información y/o cualquier material obtenido a raíz de su puesto oficial para beneficio personal; (c) explotar el estado y privilegio de su puesto para beneficio personal; (d) solicitar y/o aceptar pagos y/o obsequios por el desempeño, o la omisión, de sus deberes oficiales; (e) llevar a cabo negocios privados durante su horario de trabajo y/o en propiedades del gobierno.*<sup>182</sup>

[297] – *El Reglamento de la Asamblea Nacional de Guyana, que establece en su sección 38(8) que ningún miembro del Parlamento puede pronunciarse sobre ningún asunto en el que tenga un interés pecuniario personal directo, sin declarar la extensión de dicho interés.*<sup>183</sup>

---

<sup>179</sup> Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos (RPP) de la Oficina de Auditoría de Guyana, págs 54-59. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_manual.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_manual.pdf).

<sup>180</sup> Ley de Adquisiciones 2003. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2\\_guy\\_procurement\\_act\\_03.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_guy_procurement_act_03.pdf).

<sup>181</sup> Reglamento de la Comisión del Servicio Público 1998. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3\\_guy\\_rules1998.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_rules1998.pdf).

<sup>182</sup> Reglamento de la Comisión del Servicio Judicial 2010. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_rules2010.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_rules2010.pdf).

<sup>183</sup> Reglamento de la Asamblea Nacional. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_guy\\_standing.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_guy_standing.pdf).

[298] – *La preparación de un proyecto de Código de Conducta para el Gabinete como guía para los miembros y asesores del Gabinete en materia de conducta, abuso y corrupción.*

[299] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida (a) de la recomendación 1.1 del capítulo IV, sección 1.1 de este informe y de la necesidad de que el país analizado continúe prestando atención a la misma, tomando en cuenta que, con excepción del Código de Conducta de la Oficina de Auditoría de Guyana, ninguna de las otras leyes citadas suministra detalles sobre lo que constituye una situación de conflicto de intereses y, sobre todo, la ausencia de mecanismos para asegurar el cumplimiento de las normas sobre conflictos de intereses.

[300] Medida (b) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

[301] *Desarrollar el régimen de admisión y permanencia en el servicio público incorporando medidas que permitan resolver los casos en los que el interés privado esté en conflicto con el interés público, incluyendo el fortalecimiento de las entidades que regulan esta materia, contemplando también mecanismos de carácter preventivo que garanticen que no se produzcan nombramientos contrarios al régimen de incompatibilidades vigente* (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 1.1.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).

[302] En su respuesta,<sup>184</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[303] *“Guyana desea informar al Comité que durante los análisis de la Primera y la Segunda Ronda no se suministró el Reglamento de la Comisión del Servicio Público y, de hecho, en la respuesta de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda se hizo referencia al Reglamento de la Comisión del Servicio Público de 1998. Este reglamento debió haberse presentado, pero, desgraciadamente, parece que no se presentó.*

[304] (...)

[305] *Guyana ha puesto más énfasis en la implementación y el monitoreo de las políticas y procedimientos que ya existen y en cerciorarse de que los órganos de control superior cuenten con los recursos y habilidades adecuados para cumplir con eficacia sus mandatos que en el desarrollo de nuevas normas, como se propone en la medida (b) anterior.”*

[306] Habiendo analizado el Reglamento de la Comisión del Servicio Público de 1998 que se suministró, el Comité no encontró ninguna regla que reglamentara explícitamente el tema de los conflictos de intereses e incompatibilidades en el servicio público, ni que estableciera medidas que permitan la resolución de casos en que los intereses privados estuvieran en conflicto con el interés público.

[307] Asimismo, el Comité toma en cuenta que el Código de Conducta para las Personas de la Vida Pública establecido en el Anexo II de la Ley de la Comisión de Integridad 1998 prohíbe que las personas de la vida pública permitan que la búsqueda de intereses privados interfiera con el desempeño adecuado de sus responsabilidades, y que cualquier conflicto entre sus intereses privados y sus obligaciones públicas deberá resolverse en favor de sus obligaciones públicas.

---

<sup>184</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, págs. 30-31.

[308] El Comité observa, sin embargo, que la Ley de la Comisión de Integridad le asigna a ésta el cometido de hacer cumplir el Código de Conducta, pero no le asigna un papel de asesoría o consultivo para que suministre orientación en situaciones en que puedan surgir conflictos de intereses potenciales.

[309] En vista de lo anterior, el Comité considera pertinente reformular la medida (b) de la recomendación 1.1 del capítulo IV, sección 1.1 de este informe, como sigue (ver Anexo I, recomendación 1.1, medida (b)):

[310] *(b) Ampliar las funciones de la Comisión de Integridad para incluir un papel de asesoría o consultivo en relación con los conflictos de intereses, a fin de permitirle recibir y responder a las consultas de las personas de la vida pública sobre estos asuntos.*

Medida (c) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Fortalecer las entidades pertinentes a fin de perfeccionar su habilidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos definidos en los cargos y asegurar que efectivamente no se produzcan, en el servicio público, nombramientos contrarios al régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigentes (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 1.1.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[311] En su respuesta,<sup>185</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[312] *“El Informe de la Comisión del Servicio Público (2007-2010) que se suministró le informará al Comité sobre los esfuerzos que ha hecho la Comisión para adherirse a su mandato.*

[313] (...)

[314] *Se están llevando a cabo esfuerzos continuos con los recursos humanos, financieros y físicos disponibles.”*

[315] El Comité toma nota de las actividades contenidas en el Informe de la Comisión del Servicio Público (2007-2010). Sin embargo, la información contenida en dicho informe no indica ningún fortalecimiento de la Comisión del Servicio Público. Por otra parte, como ya se dijo en la sección 3.3 del capítulo II de este informe, el Informe Anual 2012 de la Comisión del Servicio Público señala que *“En conclusión, la Comisión logró su objetivo a pesar de experimentar una dotación de personal menor en el Departamento de Personal e incluso emitió menos circulares de vacantes”* (énfasis agregado).<sup>186</sup>

[316] Asimismo, el Comité observa además que, como se subrayó también en la sección 3.3 del capítulo II de este informe, durante la visita *in situ* se le informó al Comité que la Comisión del Servicio Judicial carece de presupuesto propio y, en consecuencia, no tiene Secretaría (ni personal alguno). Cabe resaltar, empero, que durante la visita *in situ* el Canciller de la Judicatura señaló que ni él ni la Comisión del Servicio Judicial habían solicitado nunca presupuesto ni personal.

---

<sup>185</sup> *Ibid.*, págs. 32-33.

<sup>186</sup> Informe Anual de la Comisión del Servicio Público 2012, pág. 14. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_annual12.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_annual12.pdf).

[317] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la medida (c) de la recomendación 1.1 del capítulo IV, sección 1.1, de este informe.

Medida (d) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Desarrollar, cuando sea necesario, otros mecanismos que identifiquen o detecten causas sobrevinientes que pudieran ocurrir en el transcurso del ejercicio de la función pública y que pudieran constituir conflictos de interés tales como la declaración de intereses privados por parte del funcionario (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 1.1.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[318] En su respuesta,<sup>187</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

*[319] “La Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones (NPTA), regida por la Ley de Adquisiciones y su Reglamento y apoyada por sus Manuales, señala claramente cómo deben los funcionarios públicos, incluidos los miembros de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones, los consejos de licitaciones ministeriales y regionales y los evaluadores, hacer frente a los conflictos de intereses mediante su declaración, públicamente o por escrito, y la no participación en procesos de evaluación, selección y adjudicación. El incumplimiento constituye un delito.*

*[320] La Oficina de Auditoría, regida por la Ley de Auditoría, el Instituto de Contadores Certificados y el capítulo de Guyana del Instituto de Auditores Internos han abordado este tema mediante una declaración y la no participación en el proceso en su RPPM.*

*[321] El Reglamento de la Comisión del Servicio Judicial de 2010 también aborda este tema en las reglas y el código de conducta de manera similar.”*

[322] Como ya se indicó en el análisis de la medida (a) de la recomendación 1.1 del capítulo IV, sección 1.1, de este informe, con excepción de la Oficina de Auditoría, no parece haber ningún mecanismo para identificar o detectar las causas que podrían ocurrir durante el curso del ejercicio de las funciones públicas y que podrían dar lugar a conflictos de intereses.

[323] Asimismo, como ya se indicó en la sección 4.2 del capítulo II de este informe, no existen mecanismos para asegurar la aplicación de la sección 60 de la Ley de Adquisiciones 2003, que establece el deber de los miembros de cualquier agencia con interés directo o indirecto en cualquiera de las deliberaciones de dicha agencia relacionadas con el proceso de licitación, de declarar la naturaleza de su interés en una reunión de dicha agencia.

[324] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la medida (d) de la recomendación 1.1 del capítulo IV, sección 1.1, de este informe.

Medida (e) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

---

<sup>187</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 34.

*Desarrollar, cuando corresponda, disposiciones que señalen o limiten la participación de los ex funcionarios públicos en situaciones que conlleven el aprovechamiento indebido de esa condición, por un plazo de tiempo razonable. (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 1.1.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[325] En su respuesta,<sup>188</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[326] *“Debido al tamaño de la población y a la escasez de ciertas habilidades especializadas disponibles en la sociedad, y más particularmente en las zonas incluso menos pobladas del país, aunados a los imperativos económicos de las personas para sobrevivir, esta recomendación plantea algunos desafíos formidables.*

[327] *En tales circunstancias, los órganos de control superior tendrán que mantenerse alerta para asegurar que los exfuncionarios públicos no abusen ni utilicen para algún beneficio indebido (la información, la posición y los contactos que tenían en su antiguo empleo). Tendrán que formularse mecanismos creativos para reducir las oportunidades de extraer beneficios indebidos o abusar en aquellos casos en que debido a la necesidad de ciertas habilidades es necesario contratar a un exfuncionario público, por ejemplo, no dejarlo trabajar en la misma agencia donde trabajaba antes, o asignarlo a un lugar distinto del país.*

[328] *El Comité debe tomar nota de que muchos funcionarios públicos técnicos con antigüedad que llegan a los 55 años y se retiran, o que renuncian, solicitan consultorías con los organismos internacionales de desarrollo con oficinas en el país. Posteriormente vuelven para trabajar en proyectos designados por las agencias gubernamentales.”*

[329] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la medida (e) de la recomendación 1.1 del capítulo IV, sección 1.1, de este informe.

Medida (f) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Considerar el fortalecimiento del régimen de sanciones vigente incorporando otro tipo de sanciones administrativas distintas a las ya previstas, por ejemplo la suspensión del cargo, el despido, la renuncia a los intereses particulares en conflicto o la invalidez o nulidad de las decisiones que adopte el funcionario público bajo estas circunstancias; y su retiro de la participación oficial en el asunto (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 1.1.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[330] En su respuesta,<sup>189</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[331] *“Estas reglas existen en la Oficina de Auditoría, la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones, la Comisión del Servicio Público y la Dirección de la Fiscalía.”*

---

<sup>188</sup> *Ibid.*, pág. 35.

<sup>189</sup> *Ibid.*, págs. 38 y 39.



[332] El Comité desea recordar que la medida sugerida se basó en la necesidad de fortalecer la Ley de la Comisión de Integridad y sus sección 27(2), particularmente. En este sentido, el informe de la Primera Ronda de Análisis señala que *“Respecto a los mecanismos que garantizan la vigencia de estas normas y el régimen de sanciones que contempla la Sección 27(2) de la LCI, el Comité considera que Guyana podría beneficiarse incorporando otro tipo de sanciones administrativas, por ejemplo, la suspensión del cargo, el despido, la renuncia a los intereses particulares en conflicto o la invalidez o nulidad de las decisiones que adopte bajo estas circunstancias.”*

[333] En vista de que no se suministró información relativa al fortalecimiento de la Ley de la Comisión de Integridad en este sentido, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la medida (f) de la recomendación 1.1 del capítulo IV, sección 1.1, de este informe.

**1.2. Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

Recomendación formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Llevar a cabo un análisis de la aplicación y la eficacia de las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos que existen en Guyana para asegurar el cumplimiento de estas normas como instrumentos para prevenir la corrupción. Como resultado de este análisis, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar, consolidar o asegurar la aplicación de estos instrumentos para tal fin (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 1.2.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[334] En su respuesta,<sup>190</sup>El país analizado suministra información e informa sobre nuevos desarrollos relacionados con la anterior recomendación, de los cuales el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes

[335] *“La Oficina de Auditoría introdujo en 2009 auditorías de desempeño y de valor por dinero y ha llevado a cabo tres auditorías de valor por dinero en los últimos cuatro años, dos de las cuales se publicaron en su sitio Web. La tercera es sobre la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones y el borrador está pendiente.*

[336] *Reconociendo que se trata de un área nueva para los auditores en Guyana y para la Oficina de Auditoría en especial, se han impartido varios programas de capacitación tanto dentro como fuera del país para el personal de la Oficina de Auditoría.”*

[337] El Comité observa además que el Informe Anual 2012 de la Oficina de Auditoría subraya la persistencia de los sobrepagos a contratistas y al personal y que los ministerios, departamentos y regiones han enfrentado graves desafíos para recuperar dichos montos. *“Habían ocurrido una cantidad significativa se sobrepagos a contratistas en las obras evaluadas por contratos celebrados por los ministerios, departamentos y regiones en períodos anteriores, y varios ministerios y regiones enfrentaban graves dificultades para lograr recuperar los montos excesivos pagados en relación con varios contratos. Asimismo, algunos ministerios y regiones siguieron haciendo sobrepagos en relación con varios contratos en 2012 y en años anteriores, como se muestra a continuación. Esta*

---

<sup>190</sup> *Ibid.*, págs. 38 y 39.

*tendencia continua, aunada a la ausencia de pruebas que sugirieran la aplicación de medidas disciplinarias de cualquier tipo a los empleados de ingeniería o de otras áreas encargados de la evaluación de las obras en curso y de la certificación de los pagos por avances es preocupante e indica una falta percibida de acciones de la administración para remediar la situación imperante.*<sup>191</sup>

[338] En vista de lo anterior, el Comité considera la reformulación de la recomendación 1.2 del capítulo IV, sección 1.2, de este informe, como sigue (ver Anexo I, recomendación 1.2):

[339] – *Llevar a cabo un análisis exhaustivo de las causas de los persistentes sobrepagos a contratistas y empleados señalados en los informes anuales de la Oficina de Auditoría y adoptar las medidas necesarias para hacer frente a este asunto, cerciorándose de que existan sistemas para evitar la reocurrencia de estos sobrepagos, además de perseguir vigorosamente la recuperación de los montos pagados en exceso.*

**1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

Recomendación:

*Considerar fortalecer los mecanismos con los que cuenta para exigir a los funcionarios públicos informar o denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción que en el desempeño de la función pública tengan conocimiento.*

Medida (a) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer medidas y sistemas que exijan, a la generalidad de los funcionarios públicos, denunciar o informar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento y facilitar, a través de los medios que estime adecuados, el cumplimiento de esta obligación. (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 1.3.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[340] En su respuesta,<sup>192</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[341] *“No se desalienta a los funcionarios públicos de denunciar actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y si los ministerios o agencias no toman medidas, también pueden denunciarlos confidencialmente ante niveles más altos del gobierno.*

[342] *Los sitios Web de la Oficina de Auditoría, la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones y el Ministerio de Hacienda permiten la denuncia de tales actos de corrupción incluso por funcionarios públicos que teman presentar una denuncia dentro de su agencia. En el sitio Web de la Oficina de Auditoría se alienta a las personas a denunciar confidencialmente.*

---

<sup>191</sup> Informe Anual de la Oficina de Auditoría 2012, pág. vii. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_annual\\_rep.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_annual_rep.pdf).

<sup>192</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, págs. 40-41.

[343] *El lanzamiento del nuevo sitio Web en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Asuntos Internos el 24 de mayo de 2013 ha generado gran interés.*

[344] *El título de este sitio Web contiene: “ipaidabrije Guyana – revelar el costo de la corrupción en el mercado”. Las personas pueden denunciar si: ¿Se les solicitó un soborno? ¿No dieron un soborno? ¿No se les solicitó un soborno? ¿Fueron victimizadas? ¿Enojo?” Se publica diariamente un informe sobre el número de reportes recibidos, se nombra a las agencias e incluso se proporcionan ubicaciones específicas (por ejemplo, comisarías). Al 18 de junio de 2013 se habían presentado más de 2.700 informes, de los cuales la mayoría se refirieron al el Ministerio de Asuntos Internos (principalmente la policía) y el Ministerio de Obras Públicas. No es necesario que las personas proporcionen su nombre, dirección electrónica, etc., y se les proporciona un número generado por computadora. El sitio está ofreciendo ahora recompensas por información y explica la forma en que se hará esto.*

[345] *Esta innovación es contraria a la recomendación en el sentido de que recae en el público el esfuerzo de tener la confianza suficiente para denunciar y que los funcionarios que creían que podían quedar impunes estén vigilados y puedan ser expuestos.”*

[346] El Comité hace referencia a la sección 1.2 del capítulo II de este informe, en la que señaló que el sitio Web de la Oficina de Auditoría “solamente contiene una sección de “Contacto”.<sup>193</sup> no hay un número telefónico específico ni un formato electrónico (seguro) para quejas. Asimismo, no se presenta información u orientación sobre la forma de enviar tales informes, quejas o denuncias de corrupción.”

[347] Asimismo, sobre el sitio Web “ipaidabrije”, el Comité hace referencia a la observación contenida en la sección 1.3 del capítulo II de este informe en el sentido de que su creación no parece haber sido una acción coordinada entre todos los órganos de control superior. Tampoco es claro si esta iniciativa, instituida en mayo de 2013, sigue operando.<sup>194</sup>

[348] Por último, el Comité no ha recibido información alguna que se refiera específicamente al establecimiento de medidas y sistemas que exijan que todos los servidores públicos denuncien ante las autoridades correspondientes los actos de corrupción de que tengan conocimiento en el desempeño de la función pública.

[349] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la medida (a) de la recomendación 1.3 del capítulo IV, sección 1.1, de este informe.

Medida (b) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Adoptar e implementar medidas de protección para alentar a los servidores públicos a denunciar los actos de corrupción de los que tengan conocimiento (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 1.3.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

---

<sup>193</sup> <http://www.audit.org.gy/contactaog.html>

<sup>194</sup> La Secretaría Técnica tuvo oportunidad de visitar el sitio Web “[ipaidabrije.gy](http://www.audit.org.gy/contactaog.html)” en varias ocasiones antes de la visita *in situ* en octubre de 2013. No obstante, en diversas oportunidades en el mes de noviembre de 2013, la Secretaría Técnica intentó visitar el sitio Web y recibió un mensaje de error en el sentido de que “Este URL no está enlazado con la aplicación”.

[350] En su respuesta,<sup>195</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[351] *“Las declaraciones por parte del gobierno y del Presidente de que no se tolerará la corrupción y declaraciones estridentes del Ministro de Asuntos Internos en torno a la policía corrupta están empezando a tener efecto conforme más miembros del personal están dispuestos a exponer estos actos y esto está conduciendo a más investigaciones e imposiciones de cargos.”*

[352] En vista de que no se suministró información relativa a la adopción y la implementación de medidas de protección para los servidores públicos para alentarlos a denunciar actos de corrupción de buena fe, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la medida (b) de la recomendación 1.3 del capítulo IV, sección 1.1, de este informe.

Medida (c) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Revisar la disposición contenida en la sección 28(3) de la LCI a fin de asegurar que la misma no se convierta en un impedimento o causa que desmotive, inhiba o intimide a los funcionarios públicos a presentar informes o denuncias sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 1.3.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[353] En su respuesta,<sup>196</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[354] *“El gobierno opina que hasta ahora no se ha probado que esto sea un impedimento. Sin embargo, el asunto continúa bajo la consideración del gobierno.”*

[355] *Los medios de comunicación, a la vez que exponen el abuso y la corrupción, se esfuerzan por interpretar cualquier acción como tal, incluso cuando se les suministran hechos que lo contradicen. No han permitido ejercer el derecho de réplica ni dan cobertura a las respuestas a sus denuncias.”*

[356] El Comité observa, sin embargo, que de acuerdo con la Secretaria de la Comisión de Integridad, desde su nombramiento en febrero de 2008 hasta la fecha de la visita *in situ*, *“la Comisión recibió una (1) carta de queja pero, al analizarla, se determinó que no se relacionaba con ninguno de los funcionarios públicos en nuestra lista, sino a un cargo público. Esta naturaleza se correspondió con la persona en cuestión y se dirigió a la agencia específica.”*<sup>197</sup>

[357] El Comité observa que el número casi inexistente de quejas recibidas por la Comisión de Integridad indica una necesidad continua de revisar y ampliar la legislación para la protección de denunciantes en Guyana. En este sentido, el Comité estima que Guyana podría considerar revisar los parámetros establecidos en la *“Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de*

---

<sup>195</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 43.

<sup>196</sup> *Ibid.*, pág. 44.

<sup>197</sup> Véase la presentación de la Comisión de Integridad. Disponible en:  
[http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_guy\\_intcom.ppt](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_guy_intcom.ppt).

*Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos*”,<sup>198</sup> adoptada por el Comité de Expertos del MESICIC.

[358] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la medida (c) de la recomendación 1.3 del capítulo IV, sección 1.1, de este informe.<sup>199</sup>

Medida (d) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Implementar medidas adecuadas, incluyendo programas de capacitación, dirigidos a los servidores públicos en cuanto a la forma y requisitos de presentación de informes y denuncias por actos de corrupción y sobre los mecanismos de protección a favor de los denunciantes de buena fe (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 1.3.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[359] En su respuesta,<sup>200</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[360] *“Este informe ha incluido los esfuerzos para capacitar a evaluadores y contratistas sobre las leyes financieras y normas sobre adquisición en 2012 y 2013 a través de talleres y simposios.*

[361] *Los programas del Contralor General se concentran en la observancia de las disposiciones reglamentarias financieras para prevenir abusos y prácticas corruptas.”*

[362] El Comité observa que la información sobre capacitación analizada anteriormente, en las secciones 1 a 4 del capítulo II de este informe no aborda específicamente el tema de la capacitación para los servidores públicos sobre la forma de denunciar actos de corrupción, o los requisitos para denunciarlos, ni sobre los mecanismos de protección para quienes los denuncian de buena fe.

[363] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la medida (d) de la recomendación 1.3 del capítulo IV, sección 1.1, de este informe.

## **2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCION)**

---

<sup>198</sup> Esta Ley Modelo fue el resultado de un extenso proceso de consulta que se llevó a cabo dentro del marco de un programa de cooperación realizado por la Secretaría General de OEA a través del Departamento de Cooperación Jurídica de Secretaría de Asuntos Jurídicos en su calidad de Secretaría Técnica del MESICIC, que, con el apoyo de un consultor internacional para la formulación de la primera versión, se debatió en un taller celebrado en Lima en abril de 2011, con la participación de funcionarios de Perú, Canadá, Chile, México y Estados Unidos. Los resultados de este taller se presentaron en la Segunda Conferencia sobre Avances y Desafíos en la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción realizada en Cali, Colombia, en junio de ese mismo año. Posteriormente se remitió esta Ley Modelo a la consideración de los miembros del Comité de Expertos del MESICIC y de las organizaciones de la sociedad civil para sus comentarios y observaciones, que se incorporaron a esta última versión y fueron avalados por el Comité, en su Sesión Plenaria del 22 de marzo de 2013, dentro del marco de la Vigésima Primera Reunión del Comité, celebrada en la sede de la OEA en Washington, D.C., del 18 al 22 de marzo de 2013. Para mayor información, ver: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/model\\_law\\_reporting.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_reporting.pdf).

<sup>199</sup> Guyana desea reiterar la solicitud de asistencia técnica que le formuló a la OEA para redactar un proyecto de ley basado en la Ley Modelo.

<sup>200</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 44.

Recomendación:

*Considerar fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.*

Medida (a) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Maximizar el uso de sistemas para analizar los contenidos de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, y adoptar medidas adecuadas para que puedan también usarse para detectar y prevenir conflictos de intereses y casos de enriquecimiento ilícito, utilizando tecnologías modernas, cuando sea posible, para agilizar o hacer más expedita su presentación y como una herramienta para mejorar los sistemas, análisis o investigaciones de los casos (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 2.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[364] En su respuesta,<sup>201</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[365] *“La Comisión de Integridad recibe las declaraciones de activos de quienes ocupan los cargos que figuran en el Anexo 1 de la Ley de la Comisión de Integridad. Rastrea a los que no han entregado sus declaraciones y les recuerda que cumplan. Existe un vínculo entre el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Integridad en cuanto a la verificación de las declaraciones de ingresos. Puesto que las cuentas bancarias y su contenido deben declararse en el informe anual, la Comisión de Integridad puede solicitar información del sector bancario comercial para verificar las declaraciones.*

[366] *Las enmiendas propuestas a la Ley de la Comisión de Integridad incluyen fortalecer las capacidades de investigación de la Comisión y establecer un sistema de declaraciones públicas de activos.”*

[367] Durante la visita *in situ*, la Secretaria de la Comisión de Integridad también informó sobre los esfuerzos para asegurar que todas las personas obligadas a hacerlo presenten sus declaraciones a la Comisión. En este sentido, informó que el porcentaje de incumplimiento se redujo del 78% en 2008 al 37% en 2012, mientras que el número de declarantes casi se duplicó en ese mismo período, de 900 a 1.603.

[368] No obstante, también informó que *“sin un Presidente y comisionados nombrados, no pueden adoptarse medidas contra los incumplidos, como se establece en la sección 19 de la Ley de la Comisión, y la única facultad de investigación que puede ejercerse es que la Secretaría solicite documentos adicionales como respaldo de la información contenida en un formato de declaración por un funcionario público.”*<sup>202</sup>

[369] En este sentido, el Comité observa además la información suministrada por el país analizado en su respuesta.<sup>203</sup>

---

<sup>201</sup> *Ibid.*, págs. 46 y 47.

<sup>202</sup> Véase la presentación de la Comisión de Integridad. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_guy\\_intcom.ppt](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_guy_intcom.ppt).

<sup>203</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 37.

[370] “(...) Sin embargo, el mayor desafío ha sido la designación del Presidente, como se señala en la sección 3 de la Ley de la Comisión de Integridad, quien deberá ser nombrado tras consultas entre el Presidente y el Líder de la Oposición. Los sucesivos líderes de la oposición no han otorgado su consentimiento para las personas nominadas por dos presidentes sucesivos. Los esfuerzos recientes del Presidente en 2012 y 2013 fracasaron.

[371] Esto ha afectado gravemente las posibilidades de que la Comisión cumpla plena y eficazmente su mandato (...).”

[372] Como se subrayó ya en la sección 3.2 del capítulo II anterior, el Comité lamenta profundamente el hecho de que la falta de compromiso político haya debilitado y minado algunos de los órganos de control superior de Guyana, como la Comisión de Integridad, lo que fundamentalmente socava la implementación de esta recomendación.

[373] Casi todas las organizaciones de la sociedad civil entrevistadas subrayaron esta situación durante la visita *in situ*. En este sentido, el Instituto de Transparencia de Guyana señala lo siguiente en su respuesta al cuestionario: “La falta de buena voluntad y compromiso, así como de la preferencia por el interés público ante los intereses políticos particulares, constituyen importantes obstáculos para lograr un consenso con respecto a importantes metas de desarrollo.”<sup>204</sup>

[374] Nuevamente, el Comité toma nota de la situación y exhorta a todas las partes a llegar a un acuerdo a la brevedad posible, con miras a nombrar un nuevo Presidente y comisionados para la Comisión de Integridad, de tal manera que pueda desempeñar adecuadamente su importante labor de asegurar la integridad de las personas de la vida pública en Guyana.

[375] Por último, en vista de la adopción por el Comité de Expertos de la MESICIC de la “Ley modelo sobre declaración de intereses, ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas”,<sup>205</sup> el Comité estima pertinente reformular esta medida, como sigue (ver el Anexo I, recomendación 2, medida (a)):

[376] (a) Maximizar el uso de sistemas para analizar los contenidos de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, y adoptar medidas adecuadas para que puedan también usarse para detectar y prevenir conflictos de intereses y casos de enriquecimiento ilícito, utilizando tecnologías modernas, cuando sea posible, para agilizar o hacer más expedita su presentación y como una herramienta para mejorar los sistemas, análisis o investigaciones de los casos, tomando en cuenta

---

<sup>204</sup> Véase el documento presentado por el Instituto de Transparencia de Guyana, pág. 31. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_sc.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_sc.pdf).

<sup>205</sup> Esta Ley Modelo es el resultado de un extenso proceso de consulta que se llevó a cabo dentro del marco de un programa de cooperación realizado por la Secretaría General de OEA a través de te Departamento de Cooperación Jurídica de Secretaría de Asuntos Jurídicos en su calidad de Secretaría Técnica del MESICIC, que, con el apoyo de un consultor internacional para la formulación de la primera versión, se debatió en un taller celebrado en Buenos Aires en mayo de 2011, con la participación de funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y México, así como el Banco Mundial. Los resultados de este taller se presentaron en la Segunda Conferencia sobre Avances y Desafíos en la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción realizada en Cali, Colombia, en junio de ese mismo año. Posteriormente se remitió esta Ley Modelo a la consideración de los miembros del Comité de Expertos del MESICIC y de las organizaciones de la sociedad civil para sus comentarios y observaciones, que se incorporaron a esta última versión y fueron avalados por el Comité, en su Sesión Plenaria del 22 de marzo de 2013, dentro del marco de la Vigésima Primera Reunión del Comité, celebrada en la sede de la OEA en Washington, D.C., del 18 al 22 de marzo de 2013. Para mayor información, ver: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/model\\_law\\_declaration.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_declaration.pdf).



los artículos pertinentes de la “Ley modelo sobre declaración de intereses, ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas.”<sup>206</sup>

[377] Por otro lado, cabe mencionar que el informe presentado por el Transparency Institute of Guyana Inc. (capítulo de Transparencia Internacional de Guyana) señala que “la Ley de la Comisión de Integridad 1997 dispone el establecimiento de la Comisión de Integridad y el aseguramiento de la integridad de las personas de la vida pública. Requiere que todos los políticos (miembros del Parlamento y ministros), los servidores públicos con antigüedad, los funcionarios encargados de adquisiciones y ciertos funcionarios del Ministerio de Hacienda presenten ante la Comisión declaraciones anuales de ingresos, activos y pasivos. Sin embargo, no hay comisionados nombrados. Los comisionados son nombrados por el Presidente tras consultar con el Líder de la Oposición. Varias agencias clave, como la Comisión del Sector Privado, han apelado ante el gobierno para que se nombre a los comisionados y se dote a Comisión de los recursos adecuados para desempeñar sus responsabilidades.

[378] (...) La principal dificultad se relaciona con la nueva configuración del Parlamento, en la que la Oposición combinada controla la legislatura. Como resultado, se presentan grandes cantidades de desacuerdos para promulgar legislación nueva y enmendar la legislación existente. Por ejemplo, dos leyes iniciadas por la oposición no han sido aprobadas por el Presidente, mientras que se han presentado desacuerdos significativos en relación con las enmiendas propuestas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo 2009.

[379] (...) Como ya se indicó, no hay comisionados nombrados en la Comisión de Integridad, aunque puede haber cierto nivel de cumplimiento en lo que respecta a la presentación de declaraciones anuales de activos y pasivos. Sin embargo, a falta de comisionados, es poco probable que se analicen detalladamente estas declaraciones.”<sup>207</sup>

Medida (b) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

Considerar la conveniencia de efectuar adecuaciones o reformas legales en relación con las facultades que otorga la LCI a la Comisión o al Presidente de la República, según corresponda, a fin de que puedan, sin la autorización de ningún otro órgano o funcionario, imponer las sanciones administrativas que correspondan (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 2.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).

[380] En su respuesta,<sup>208</sup> el país analizado no suministró información sobre nuevos desarrollos con respecto a la medida (b) de la anterior recomendación.

[381] Dado que el país analizado también señala en su respuesta que la medida sugerida no parece clara, el Comité desea hacer referencia al párrafo del Informe de la Primera Ronda en el que se basó la medida: “(...) llama la atención a este Comité que la Comisión de Integridad no pueda imponer sanciones administrativas sin el consentimiento escrito del Director del Ministerio Público. Considera el Comité que una comunicación al Ministerio Público puede ser un instrumento importante en aquellos casos en que la conducta del funcionario también constituya una violación al

<sup>206</sup> Texto disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/model\\_law\\_declaration.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_declaration.pdf).

<sup>207</sup> Véase el documento presentado por el Instituto de Transparencia de Guyana, pág. 31. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_sc.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_sc.pdf).

<sup>208</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 48.



*derecho penal vigente. Sin embargo, condicionar las sanciones que en el ámbito administrativo pueda imponer la Comisión de Integridad al consentimiento que realice un funcionario ajeno a la misma, podría debilitar las facultades que como órgano encargado de velar por la aplicación del sistema de declaración de ingresos, activos y pasivos, se le han encomendado. Por ello, convendría revisar esa disposición y fortalecer las facultades que en este sentido otorga la LCI a la Comisión o al Presidente de la República, según corresponda, a fin de que pueda, sin la autorización de ningún otro órgano o funcionario, imponer las sanciones administrativas que correspondan.*”<sup>209</sup>

[382] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la medida (b) de la recomendación 2 del capítulo IV, sección 2, de este informe.

Medida (c) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Considerar adecuaciones o reformas legales al régimen de sanciones vigente incluyendo la previsión de otras conductas tales como la presentación tardía de las declaraciones, así como otro tipo de sanciones (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 2.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[383] En su respuesta,<sup>210</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[384] *“La Ley de la Comisión de Integridad incluye ya disposiciones para hacer frente a las declaraciones entregadas fuera de tiempo, así como sobre declaraciones falsas y sanciones. La sección 13 establece que las declaraciones deben entregarse anualmente a más tardar el 30 de junio. Las secciones 17, 18, 19 y 22 se refieren a la presentación tardía de las declaraciones conforme a la sección 13 y a la falta de respuesta a la Comisión y al perjurio (declaraciones falsas) sección 22.*

[385] *La sección 16 prevé la colocación de sus activos por parte de los funcionarios públicos en un fideicomiso ciego.*

[386] *Las enmiendas propuestas a la Ley de la Comisión de Integridad que se están formulando se relacionan con el fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Comisión y no con reformas relacionadas con esta recomendación, ya que dicha Ley aborda ya adecuadamente estos puntos.”*

[387] En relación con la información suministrada por el país analizado, el Comité desea hacer referencia al párrafo del Informe de la Primera Ronda en que se basó la medida: *“(…) también sería conveniente implementar sanciones administrativas, por ejemplo la prohibición de reingreso en aquellos supuestos en que el funcionario declarante hubiese cesado en su cargo, sin haber presentado la declaración final y asegurar que las sanciones vigentes sean suficientemente disuasivas. Asimismo, los montos de las multas deberían revisarse periódicamente.*”<sup>211</sup>

---

<sup>209</sup> Ver el “Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda”, pág. 9. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/english/mec\\_rep\\_guy.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/mec_rep_guy.pdf).

<sup>210</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, págs. 49-50.

<sup>211</sup> Ver el “Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda”, pág. 9. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/english/mec\\_rep\\_guy.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/mec_rep_guy.pdf).

[388] El Comité observa que las sanciones existentes no se hacen cumplir, porque la Comisión no está operando plenamente, en tanto se nombran el Presidente y los comisionados. En este sentido, el Comité observa además la información suministrada por el país analizado en su respuesta:<sup>212</sup>

[389] *“(…) Sin embargo, el mayor desafío ha sido la designación del Presidente, como se señala en la sección 3 de la Ley de la Comisión de Integridad, quien deberá ser nombrado tras consultas entre el Presidente y el Líder de la Oposición. Los sucesivos líderes de la oposición no han otorgado su consentimiento para las personas nominadas por dos presidentes sucesivos. Los esfuerzos recientes del Presidente en 2012 y 2013 fracasaron.*

[390] *Esto ha afectado gravemente las posibilidades de la Comisión de cumplir plena y eficazmente su mandato. Los miembros del Gabinete y los miembros del Parlamento están obligados a hacerlo por ley y de acuerdo con las políticas del ejecutivo. El Secretario del Gabinete les recuerda con tiempo a los miembros del Gabinete sobre la fecha límite del 30 de junio.*

[391] *Cabe resaltar que los miembros del Parlamento de los partidos de la oposición parlamentaria (desde la promulgación de la Ley de la Comisión de Integridad) durante los Parlamentos 8º, 9º y 10º no han presentado sus declaraciones a la Comisión de Integridad.*

[392] *Otros titulares de puestos que figuran en el Anexo 1 también han incumplido, pero sin una Comisión correctamente constituida, con un Presidente, el personal de la Comisión solamente puede recoger las declaraciones, registrarlas y cuestionar o solicitar información adicional, además de recordar a los funcionarios públicos su incumplimiento, pero no está facultada para investigar o adoptar ninguna acción de las previstas en la ley.”*

[393] La información anterior fue confirmada durante la visita *in situ* por la Secretaria de la Comisión de Integridad, quien además suministró la siguiente información en relación con las dificultades que enfrenta actualmente la Comisión de Integridad:<sup>213</sup>

[394] *“- El cumplimiento oportuno de la entrega de los nombres de los declarantes por las instancias públicas de acuerdo con el Anexo 1 anualmente,*

[395] *- El cumplimiento oportuno y el incumplimiento de la entrega de las declaraciones por los funcionarios públicos de acuerdo con el Anexo 1 anualmente,*

[396] *- La entrega de información actualizada de los declarantes por las instancias públicas y de sus familiares, por ejemplo, sobre los declarantes fallecidos, los nombres de los declarantes nuevos, los declarantes que ya no ocupan el cargo por retiro, despido, renuncia, etc.,*

[397] *- Sin un Presidente y comisionados nombrados, no pueden adoptarse medidas contra los incumplidos, como se establece en la sección 19 de la Ley de la Comisión, y la única facultad de investigación que puede ejercerse es que la Secretaría solicite documentos adicionales como respaldo de la información contenida en un formato de declaración por un funcionario público.*

[398] *- Incumplimiento de los documentos adicionales solicitados a algunos funcionarios públicos como respaldo de la información presentada en sus formatos de declaración.*

---

<sup>212</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 37.

<sup>213</sup> Véase la presentación de la Comisión de Integridad. Disponible en:

[http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_guy\\_intcom.ppt](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_guy_intcom.ppt).

[399] - *Sin un Presidente y comisionados nombrados, la revisión de la Ley de la Comisión está pendiente, pues también se requieren sus comentarios y recomendaciones. Algunas recomendaciones de los comisionados anteriores y de mí misma se remitieron al despacho del Procurador General para su consideración durante la revisión de la Ley de la Comisión.*

[400] - *Sin un Presidente y comisionados nombrados, el inventario de la Comisión sobre los funcionarios públicos declarantes no puede ser revisado, pues contiene cargos que no están en el Anexo 1 de la Ley y que es necesario eliminar del inventario.”*

[401] No obstante, tomando en cuenta que durante la visita *in situ* la Directora de la Fiscalía informó que su despacho no había recibido nunca solicitud alguna de asesoría jurídica de la Comisión de Integridad (requerida por la sección 23 de la Ley de la Comisión de Integridad de 1997 previamente a cualquier enjuiciamiento por violaciones de dicha ley), el Comité observa la falta de aplicación de las sanciones establecidas por la Ley de la Comisión de Integridad incluso cuando la Comisión de Integridad estaba en operación plena.

[402] La Comisión también subraya que el hecho de que no se haya nombrado al Presidente y a los comisionados no exime a las personas que según la Ley de la Comisión de Integridad de 1997 deben presentar sus declaraciones de activos a la Comisión de Integridad. El Comité lamenta particularmente que algunos miembros del Parlamento no hayan cumplido su deber legal de presentar sus declaraciones sin consecuencias de ninguna índole, adicionalmente a la resolución de la Asamblea Nacional en la que se declara que *“la negativa de los miembros del Parlamento a presentar sus declaraciones a una Comisión de Integridad debidamente constituida es una violación de la ley y una dura crítica de dichos miembros del Parlamento y, por extensión, de la integridad del Parlamento.”*<sup>214</sup>

[403] En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta la adopción por el Comité de Expertos del MESICIC de la *“Ley modelo sobre declaración de intereses, ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas”*, el Comité estima pertinente reformular esta medida, como sigue (ver el Anexo I, recomendación 2, medidas (c) y (d)):

[404] (c) *Hacer cumplir las sanciones existentes en la Ley de la Comisión de Integridad y considerar la implementación de sanciones adicionales y otros tipos de penas, como la inhabilitación del servicio públicos en aquellos casos en que el funcionario declarante hubiese dejado su cargo sin haber presentado la declaración final, con vistas a asegurar que las sanciones vigentes sean suficientemente disuasivas, tomando en cuenta los artículos pertinentes de la “Ley modelo sobre declaración de intereses, ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas”.*<sup>215</sup>

[405] (d) *Establecer las sanciones pertinentes por el incumplimiento de la entrega de nombres y otra información actualizada de los declarantes por las instancias públicas de conformidad con el Anexo 1 de la Ley de la Comisión de Integridad 1997 anualmente.*

Medida (d) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

---

<sup>214</sup> Ver la Resolución la Asamblea Nacional No. 13 del Décimo Parlamento de Guyana, Primera Sesión (2012). Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_res13.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_res13.pdf).

<sup>215</sup> Texto disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/model\\_law\\_declaration.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_declaration.pdf).

*Revisar la posibilidad de ampliar el plazo de cinco años que establece la sección 23(b) de la LCI como límite para instituir procedimientos legales en relación con actos ilícitos contra el funcionario que haya cesado en sus funciones públicas (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 2.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[406] En su respuesta,<sup>216</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[407] *“La sección 23(b) es pertinente para los delitos identificados en la sección 22. Esta sección se refiere y es aplicable a los titulares de todos los cargos contenidos en el Anexo. Mientras que la sección 23(b) señala que “5 años después de la fecha en que la persona con respecto a cuya declaración se cometió el supuesto delito dejó de ser una persona en la vida pública”.*

[408] *La sección 21(3) se refiere a los miembros de la Comisión y a 5 años después de que dejan de ser comisionados.*

[409] *El Comité debería tomar en consideración que no hay prescripción para los delitos descritos en el capítulo 8:01 de la Ley Penal (anexo) y otros estatutos relevantes.*

[410] *Título 13, Fraude, conversión fraudulenta, fraude relacionado con empresas, falsificación de cuentas; El Título 17, Falsificación y delitos similares. El Título 22, secciones 333 a 338 incluye al Presidente, a los miembros del Gabinete, etc., de la Ley Penal (delitos) y no hay prescripción ni restricciones temporales. El perjurio (declaración falsa) tampoco tiene límite.*

[411] *Por lo tanto, si alguien hubiera renunciado a su cargo y hubiera transcurrido el plazo de cinco años establecido en la Ley de la Comisión de integridad, nada impediría que se llevara a cabo una investigación o que se imputaran cargos después de ese lapso.*

[412] *El Comité podría observar que la Ley de Prescripción de Guyana, en su capítulo 7:02, no aborda la prescripción de los delitos penales.*

[413] *Guyana, por lo tanto, no ve la necesidad de la ampliación en la Ley de la Comisión de Integridad que se propone en esta recomendación.”*

[414] A pesar de lo afirmado por el país analizado, el Comité sostiene su punto de vista de que la sección 23(2) establece de hecho una prescripción para los delitos contenidos en la Ley de la Comisión de Integridad 1997. El texto de la sección 23(2) no restringe esta disposición a los miembros de la Comisión de Integridad. Se aplica a cualquier persona en la vida pública obligada a presentar una declaración ante la Comisión de Integridad.

[415] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la medida (d) de la recomendación 2 del capítulo IV, sección 2, de este informe.

Medida (e) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

---

<sup>216</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 51.

*Considerar la conveniencia de otorgar a un órgano o funcionario, distinto al Presidente de la República, la administración, verificación y aplicación del sistema de declaración de ingresos, activos y pasivos, en relación con los miembros de la Comisión de Integridad* (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 2.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).

[416] En su respuesta,<sup>217</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[417] *“Desde que se promulgó la Ley de la Comisión de Integridad ha habido cuatro presidentes. El Presidente presenta sus declaraciones a la Comisión de Integridad y los miembros de esta Comisión le presentan las suyas a él.*

[418] *En principio, empero, el Presidente tendría interés en que sus designados cumplieran con la Ley de la Comisión de Integridad, en particular los miembros del Gabinete, incluidos los asesores presidenciales y los secretarios permanentes.*

[419] *También está bajo consideración un Código de Conducta propuesto para el Gabinete que mejorará más la política de cero tolerancia en el foro político más elevado y el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, en especial la de la Comisión de Integridad. Se ha acordado que este documento se pondrá a disposición del público para que este conozca el código al que se sujetarán los miembros del Gabinete.”*

[420] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la medida (e) de la recomendación 2 del capítulo IV, sección 2, de este informe.

Medida (f) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes para dar publicidad a las declaraciones juradas patrimoniales, cuando corresponda, con sujeción a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno* ( el fundamento de esta medida está contenido en la sección 2.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).

[421] En su respuesta,<sup>218</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la medida anterior:

[422] *“Como ya se dijo, el tema de la publicación de las declaraciones está bajo consideración en las enmiendas propuestas a la Ley de la Comisión de Integridad.”*

[423] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la medida (f) de la recomendación 2 del capítulo IV, sección 2, de este informe.

### **3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCION)**

---

<sup>217</sup> *Ibid.*, pág. 52.

<sup>218</sup> *Ibid.*, pág. 54.

Recomendación formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Considerar fortalecer o crear los órganos de control superior en las funciones que desarrollan sobre el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 4 y 11 del artículo III de la Convención, dotándolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una periódica evaluación y seguimiento de las mismas (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 3.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[424] En su respuesta,<sup>219</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la recomendación anterior:

[425] *“Tras la revisión de la Constitución en 2003 se han hecho esfuerzos de buena fe en nueva legislación relativa a los órganos de control superior para asegurar el cumplimiento. En la primera parte de esta respuesta se habló en cierto detalle sobre el funcionamiento de los órganos de control superior seleccionados. El principal desafío es asegurar que estos órganos de control superior implementen su mandato eficaz y eficientemente, de conformidad con los estatutos relevantes.*

[426] *Anteriormente en el informe, Guyana suministró información sobre la mejora por los órganos de control superior de los mecanismos de rendición de informes, la dotación de personal y la asignación presupuestal, incluyendo el uso de nuevas tecnologías y sitios Web.”*

[427] El Comité observa, sin embargo, que algunos órganos de control superior importantes responsables de asegurar el cumplimiento de las disposiciones del capítulo III, párrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convención no fueron analizados en el capítulo II de este informe, como la Comisión de Integridad y el Defensor del Pueblo.

[428] La Comisión observa además que, de hecho, estos dos órganos de control superior se han visto obstaculizados por las prolongadas demoras en el nombramiento de sus respectivas autoridades.

[429] Cabe mencionar, por otro lado, que casi todas las organizaciones de la sociedad civil entrevistadas durante la visita *in situ* hicieron notar este muy importante punto y expresaron la necesidad urgente de que se nombrara al Defensor del Pueblo, así como de un compromiso político respecto a los nombramientos del Presidente y los comisionados de la Comisión de Integridad.<sup>220</sup>

[430] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la recomendación 3 del capítulo IV, sección 3, de este informe.

[431] Es importante señalar, además, que durante la visita *in situ*, los representantes del Instituto de Transparencia de Guyana expresaron lo siguiente sobre el Defensor del Pueblo: *“Es, de hecho, sumamente decepcionante que no haya habido un Defensor del Pueblo desde que la última persona, el señor S.Y. Mohamed, renunció al cargo alrededor de 2005. Los ciudadanos, por ende, no han contado con los servicios del ‘abogado de los pobres’ durante siete años. Sean cuales fueran las*

---

<sup>219</sup> *Ibid.*, pág. 55.

<sup>220</sup> Al respecto, Guyana informó que el Defensor del Pueblo fue nombrado en diciembre de 2013 y prestó juramento en enero de 2014. El Juez Retirado Winston Moore ya entró en funciones e informó a los medios de comunicación en febrero, semanas después de asumir su cargo, que ha recibido 15 quejas. La Defensoría del Pueblo tiene un presupuesto asignado y un cuadro de personal pequeño. Se prevé que en el Presupuesto Anual de 2014 se le asignarán más recursos para fortalecer la oficina y sus operaciones.

*razones para esta desafortunada situación, no es posible considerar positivamente a Guyana en comparación con sus contrapartes en el Caribe —Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Dominica, Santa Lucía y Antigua— que cuentan con un sistema en operación para investigar las quejas de los ciudadanos a través del Defensor del Pueblo.”<sup>221</sup>*

#### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)**

##### **4.1. Mecanismos de participación en general**

Recomendación formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Considerar la necesidad de que Guyana revise y fortalezca su enfoque general para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos encaminados a prevenir la corrupción.*

[432] En su respuesta,<sup>222</sup> el país analizado suministra información e informa sobre nuevos desarrollos relacionados con la anterior recomendación, de los cuales el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[433] “(...) - *Una serie de cuatro debates televisados sobre corrupción en 2012 relativos a importantes proyectos de infraestructuras, en los que participaron miembros de los partidos políticos de oposición. En cada una de estas sesiones se le permitió al público enviar preguntas y comentarios por texto al panel durante el transcurso del debate.*

[434] - *Nuevo sitio Web “ipaidabribeguyana”, creado el 24 de mayo de 2013*

[435] - *Se aumentó la cobertura en los medios de comunicación de denuncias de corrupción.*

[436] - *Programas de radio y televisión que reciben llamadas con respecto a la policía, la autoridad hacendaria y diversos ministerios y agencias proveedores de servicios.”*

[437] Asimismo, el Comité desea subrayar el nivel de apertura demostrado por el país analizado con respecto a la invitación a las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales para que participaran en la visita *in situ*.

[438] Sin embargo, como indicaron algunas de estas organizaciones durante la visita *in situ*, como la Asociación de Mujeres Abogadas de Guyana (GAWL) y la Cámara de Comercio e Industria de Georgetown (GCCl), se puede hacer más para aumentar la participación de la sociedad civil en los esfuerzos para prevenir la corrupción. En este sentido, el representante de la GAWL indicó que: “*Con frecuencia se consulta con la GAWL y con muchas otras organizaciones de la sociedad civil y se las invita a presentar aportes sobre legislación propuesta y a asistir a foros en los que se debaten algunos temas generales de interés nacional. Sin embargo, la asociación no ha participado directa ni específicamente en asuntos relativos a la corrupción, excepto hace algunos meses, cuando se la*

<sup>221</sup> Véase la presentación del Instituto de Transparencia de Guyana, págs. 12 y 13. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_trans.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_trans.pdf).

<sup>222</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 56.

*invitó a presentar aportes por escrito con respecto al Proyecto de Ley (de Enmienda) Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo 2013.*<sup>223</sup>

[439] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 4.1 del capítulo IV, sección 4, de este informe y de la necesidad de que el Estado continúe prestando atención a la misma.

[440] Por otro lado, cabe mencionar que el informe presentado por el Transparency Institute of Guyana Inc. (capítulo de Transparencia Internacional de Guyana) señala que “*El Transparency Institute of Guyana Inc. (TIGI) fue establecido a través de iniciativas privadas de ciertos miembros de la sociedad preocupados por los efectos de la corrupción. El gobierno no avala todavía la labor del TIGI.*”<sup>224</sup>

[441] *Como ya se indicó, el Ministerio de Asuntos Internos creó un sitio Web en el que el público puede denunciar casos de solicitud de sobornos por los funcionarios de policía.*

[442] *El gobierno periódicamente realiza actividades de extensión para concientizar al público sobre sus programas y actividades. También existen programas televisivos que se utilizan para transmitir los mensajes del gobierno.*<sup>225</sup>

## **4.2. Mecanismos para el acceso a la información**

### **Recomendación:**

*Fortalecer los mecanismos para asegurar el acceso público a la información.*

### **Medida (a) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:**

*Desarrollar y reglamentar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas oportunamente, para la apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen, y para el establecimiento de sanciones en los casos de incumplimiento de la obligación de suministrar información pública.*

[443] En su respuesta,<sup>226</sup> el país analizado suministra información e informa sobre nuevos desarrollos relacionados con la anterior recomendación, de los cuales el Comité subraya como un paso que lo lleva a concluir que la recomendación ha sido considerada satisfactoriamente:

[444] – *La promulgación de la Ley de Acceso a la Información 2011 y el nombramiento del Comisionado de Información el 1 de julio de 2013.*

---

<sup>223</sup> Véase la presentación de la Asociación de Mujeres Abogadas de Guyana (GAWL), pág. 4. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_GAWL.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_GAWL.pdf).

<sup>224</sup> El Gobierno de Guyana no sabe qué implica la expresión “avala la labor del TIGI”. El Gobierno, incluida la Asesora Presidencial sobre Gobernanza así como el Ministro de Finanzas, han asistido a varios seminarios y talleres cuando se les ha invitado y participan en los debates. El TIGI adopta una postura confrontativa en relación con el gobierno y sus deficiencias percibidas en lugar de una postura de trabajar con el gobierno para lograr mejoras y revertir las deficiencias de Guyana.

<sup>225</sup> Ver el documento presentado por el Instituto de Transparencia de Guyana, págs. 27 y 28. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_sc.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_sc.pdf).

<sup>226</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 58.



[445] *La Ley de Acceso a la Información reglamenta los procesos a través de los cuales se reciben y responden las solicitudes de acceso a la información. La sección 16(1) de esta Ley dispone que una persona que desea obtener acceso a un documento oficial debe presentar una solicitud, ya sea utilizando el formulario que aparece en el Anexo de la Ley o en el sitio Web del Comisionado de Información o al Comisionado a través de otro medio electrónico.*

[446] *La sección 18(1) establece que al recibir la solicitud, el Comisionado de Información deberá confirmar su recepción dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de recepción y notificar al solicitante si su solicitud ha sido aprobada o denegada dentro de un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha en que se recibió la solicitud. El Comisionado de Información puede extender este período, de acuerdo con la sección 18(2), sesenta (60) días más, y deberá informar al solicitante los motivos para ello. La sección 18(3) dispone además que se considerará denegada la solicitud si el Comisionado de Información no permite el acceso dentro de este período.*

[447] *Con respecto a las apelaciones de las decisiones del Comisionado de Información, la sección 43 (1) permite que un agraviado por una decisión del Comisionado de conformidad con la Ley de Acceso a la Información 2011 solicite una revisión de la decisión ante la Corte Superior. Esta solicitud, de conformidad con la sección 43(2), deberá ser oída y determinada por un juez de salas, excepto si la Corte, con el consentimiento de la partes, indica lo contrario.*

[448] *La sección 50 incluye una lista de sanciones para quienes incumplen las disposiciones de la Ley.*

[449] Asimismo, durante la visita *in situ*, el Comisionado de Información señaló que había cumplido ya con la sección 8(1) de la Ley de Acceso a la Información 2011, que requiere que el Comisionado se encargue de la publicación de información en la gaceta oficial y en un diario de circulación en Guyana sobre la implementación de la Ley por las autoridades públicas.

[450] El Comisionado informó, sin embargo, que su oficina no había recibido ninguna solicitud de información a la fecha de la visita (en octubre de 2013), porque la Ley no está operando plenamente hasta que su oficina reciba financiamiento y personal suficientes, lo que expresó que debe ocurrir en 2014. Por lo tanto, su oficina no cuenta todavía con un sitio Web a través del cual se puedan canalizar las solicitudes de acceso a la información de conformidad con la sección 16(1)(b) de la Ley.

[451] El Comité observa además que la sección 5(3) de la Ley establece que el Comisionado de Información debe ser dotado del apoyo presupuestal y el personal que requiere para cumplir sus funciones según la Ley.<sup>227</sup>

[452] Asimismo, el Comité toma nota de varios otros artículos importantes, como las secciones 27 a 38, relativas a los documentos exentos; la sección 44, que requiere la preparación de informes anuales sobre la operación de la Ley en la Asamblea Nacional; la sección 45, que, entre otras cosas, dispone el desarrollo de programas educativos para promover la comprensión entre el público sobre las maneras de ejercer los derechos que confiere la Ley, incluyendo la compilación de una guía, dentro de un plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la Ley, que contenga información fácil de comprender de manera que se permita a cualquiera ejercer sus derechos consagrados en la ley; y la sección 46, que dispone que el Ministro puede formular un reglamento para la Ley sujeto a la resolución negativa de la Asamblea Nacional.

---

<sup>227</sup> Al respecto, Guyana informó que el Comisionado de Información ha contratado personal adicional y en el presupuesto de 2014 se han adoptado previsiones presupuestales adecuadas para asegurar que esta oficina pueda ser eficiente.

[453] Por último, el Comité observa que las secciones 50(7) y (8) establecen sanciones, como la pena de privación de la libertad de seis (6) meses a un (1) año, para cualquier persona que divulgue cualquier contenido de los documentos exentos o publique información exenta en un sitio Web, blog, medio de comunicación social o cualquier otro medio de comunicación. Aunque comprende las razones generales de estas sanciones, el Comité observa que pueden imponer varias dificultades a la labor de los periodistas investigadores que descubren casos de corrupción en ausencia de legislación exhaustiva sobre la protección de los informantes que denuncian de buena fe actos de corrupción.

[454] En vista de lo anterior, aunque estima que la medida en su formulación original ha sido considerada satisfactoriamente por el país analizado, el Comité considera pertinente reformular esta medida, como sigue (ver Anexo I, recomendación 4.2, medidas (a), (b), (c), (d), (e) y (f):

[455] *(a) Dotar al Comisionado de Información con los recursos humanos y financieros que requiere para el desempeño adecuado de sus funciones, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos.*

[456] *(b) Considerar especialmente la implementación de la sección 45 de la Ley de Acceso a la Información en relación con los programas para educar al público sobre la importancia del acceso información pública y sobre las maneras de ejercer sus derechos con base en dicha Ley.*

[457] *(c) emitir el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información de 2011, tomando en cuenta que no debe incluir restricciones o exenciones adicionales a las que figuran en dicha Ley.*

[458] *(d) Contemplar la posibilidad de acortar los límites temporales establecidos en la sección 18 de la Ley de Acceso a la Información de 2011, con vistas a que el proceso sea más expedito.*

[459] *(e) Crear y mantener un sitio Web para la Oficina del Comisionado de Información y hacer uso de este u otros medios electrónicos para recibir y responder a solicitudes de acceso a la información con base en la Ley.*

[460] *(f) Mantener y publicar estadísticas sobre la implementación de la Ley, como cuántas solicitudes ha recibido el Comisionado de Información, cuántas han sido denegadas y las razones de la denegación, cuántas se han otorgado total o parcialmente, cuántas autoridades públicas han incumplido los requisitos de la Ley y cuántas sanciones se han aplicado, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas.*

[461] Por otro lado, cabe mencionar que el informe presentado por el Transparency Institute of Guyana Inc. (capítulo de Transparencia Internacional de Guyana) señala que “la Ley de Libertad de Información fue promulgada hace tiempo, pero no se puso en funcionamiento porque uno de los requisitos previos es el nombramiento de un Comisionado de Información. El nombramiento se ha efectuado desde entonces, pero es demasiado pronto para evaluar el impacto.”<sup>228</sup>

Medida (b) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Considerar la creación o aprobación de sistemas que aseguren que el público tenga acceso, cuando sea apropiado, a información sobre las entidades públicas y sus actividades financieras y*

---

<sup>228</sup> Véase el documento presentado por el Instituto de Transparencia de Guyana, pág. 29. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_sc.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_sc.pdf).

*programáticas, especialmente incluyendo a los órganos de control superior que se ocupan de temas incluidos en este informe.*

[462] En su respuesta,<sup>229</sup> el país analizado suministra información e informa sobre nuevos desarrollos relacionados con la anterior recomendación, de los cuales el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[463] *“La Ley de Acceso a la Información prevé la implementación de esta recomendación.*

[464] *Los órganos de control superior seleccionados en este informe —la Oficina de Auditoría de Guyana, la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones y la Dirección de la Fiscalía— cuentan con sitios Web establecidos y en funcionamiento. Asimismo, contribuyen al acceso adicional otros sitios Web nuevos: e-procure y los de la Comisión de Integridad, el Ministerio de Hacienda y otros ministerios, como el Ministerio de Finanzas, la Procuraduría General y el Ministro de Asuntos Jurídicos.*

[465] *Una vez completados el rediseño y la modernización del sitio Web del Parlamento, todos los registros presentados, debatidos y resueltos en la Asamblea Nacional estarán disponibles para el público. La digitalización de los registros del Parlamento se inició en 2008 y ha avanzado de los registros en curso a la incorporación paulatina de años anteriores. El objetivo es digitalizar todos los registros desde principios de la década de 1900.”*

[466] Dado que la implementación de la Ley de Acceso a la Información está todavía en proceso, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida (b) de la recomendación 4.2 del capítulo IV, sección 4,2 de este informe, así como de la necesidad de que el país analizado continúe prestando atención a la misma.

#### **4.3. Mecanismos de consulta**

Recomendación 4.3.1 formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Desarrollar normas y procedimientos que apoyen mecanismos de consulta para facilitar a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos la generación de opiniones y propuestas.*

[467] En su respuesta,<sup>230</sup> el país analizado suministra información e informa sobre nuevos desarrollos relacionados con la anterior recomendación, de los cuales el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[468] *“Aunque no existe legislación específica sobre mecanismos consulta con la sociedad civil, el artículo 13 de la Constitución prevé el “suministro de oportunidades crecientes para la participación de los ciudadanos y de sus organizaciones en los procesos de administración y toma de decisiones del Estado, con énfasis especial en aquellos ámbitos de la toma de decisiones que afectan directamente su bienestar”.*

[469] *Las políticas gubernamentales dictan que no se puede presentar nueva legislación ante el Gabinete sin haberla sujetado a un proceso de consulta con las partes interesadas relevantes; de la*

<sup>229</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 59.

<sup>230</sup> *Ibid.*, págs. 60 y 61.

*misma manera, cualquier cambio de políticas del Gabinete normalmente se envía a un proceso de consulta antes de adoptar una decisión definitiva.*

[470] *Los proyectos de ley complicados o controvertidos se remiten a comités selectos especiales del Parlamento, y es posible que se invite al público a presentar sus puntos de vista y cambios propuestos.*

[471] *En el noveno Parlamento se procesaron de esta manera 16 proyectos de ley. El Proyecto de Ley sobre Acceso a la Información se le remitió al Comité Selecto Especial del Parlamento en 2011 y se recibieron aportes del público, tanto por escrito como en presentaciones orales ante el Comité. Lo mismo ocurrió con el Proyecto de Ley Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y con el de Licencias para Transferencia de Dinero en 2009.*

[472] *En el décimo Parlamento, 8 proyectos de ley se están considerando en comités selectos especiales, el más reciente de los cuales es el Proyecto de Ley (de Enmienda) Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo orientado a asegurar el cumplimiento de las obligaciones de Guyana en el marco del CFATF/GAFI. Se ha invitado al público a enviar sus contribuciones con respecto a este proyecto de ley y el 3 de julio de 2013 comparecerán personas ante el Comité.*

[473] *Los asuntos que se envían a un comité selecto especial no necesariamente tienen que ser proyectos de ley, sino algo como las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a Guyana sobre la abolición del castigo corporal, la abolición de la pena capital y la despenalización de las relaciones consensuales entre adultos del mismo sexo y la discriminación contra personas LGBT que están actualmente bajo consideración de un comité y el público ha hecho aportes y se le ha invitado a comparecer ante los comités.*

[474] *No existen normas formales, pero sí hay medidas y mecanismos que prevén la consulta como elemento de la toma de decisiones consagrados en la Constitución, así como un modelo para compartir el poder. Se definen específicamente términos como “consulta significativa”.*

[475] *Sin embargo, el modelo existente, que ha venido evolucionando desde 2003, ha suministrado lecciones importantes y ha asegurado que el gobierno tenga que escuchar los puntos de vista de las personas y responder mejor a sus inquietudes. Las reuniones comunitarias en todo el país con los ministros, por ejemplo, exponen los niveles de ineficiencias, denuncias de corrupción, trabajos de mala calidad, transacciones dudosas y mal desempeño de los funcionarios. Esta forma de medios no legislativos es de carácter más populista, pero le ha suministrado a Guyana un mecanismo útil de vigilancia inestimable para el funcionamiento del gobierno, la protección de recursos escasos y la exposición de prácticas corruptas. Los residentes de estas comunidades se expresan y ventilan sus frustraciones, pero también proponen algunos enfoques nuevos y esperan resultados.*

[476] *La legislación que rige a las agencias e instituciones estatutarias y el nombramiento de sus consejos requieren que haya cierta representación de las partes interesadas de la sociedad civil, dependiendo del consejo en cuestión. El Consejo de Radiodifusión tiene un nominado del Líder de la Oposición y uno de la sociedad civil; el Consejo de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones descrito arriba tiene representantes del sector privado.*

[477] *Si se suman las listas de organizaciones de la sociedad civil que se consultaron para el nombramiento de las cuatro comisiones de derechos humanos y las tres Comisiones de Servicio, probablemente se incluirían más de 300 organizaciones de la sociedad civil.”*

[478] Aunque el Comité toma nota de estos importante ejemplos de consulta con la sociedad civil efectuados por el país analizado, el Comité reitera la importancia de establecer un marco jurídico para reglamentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión pública, incluyendo consultas, en especial en relación con la lucha contra la corrupción.

[479] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 4.3.1 del capítulo IV, sección 4, de este informe y de la necesidad de que el Estado continúe prestando atención a la misma.

Recomendación 4.3.2 formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de consulta, y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, como también a los funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos.*

[480] En su respuesta,<sup>231</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la recomendación anterior:

[481] *“La implementación de la Ley de Acceso a la Información exigirá la capacitación del personal en distintas dependencias gubernamentales, así como programas de difusión pública.*

[482] *A través de su exposición a una amplia gama de consultas y comunicación, los funcionarios públicos se sienten más cómodos con este enfoque de formulación de políticas y solución de problemas, descrito en la sección anterior. También se lleva a cabo capacitación continua.”*

[483] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la recomendación 4.3.2 del capítulo IV, sección 4, de este informe y de la necesidad de que el Estado continúe prestando atención a la misma.

#### **4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

Recomendación formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*El Comité consideró útil formular las recomendaciones 4.3.1 y 4.3.2 de esta sección con respecto a los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública.*

[484] En su respuesta,<sup>232</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la recomendación anterior:

[485] *“Este es un proceso en curso, en el que se están poniendo a prueba nuevas iniciativas e innovaciones para mejorar y fortalecer la confianza en las ramas legislativa, judicial y ejecutiva de gobierno.”*

---

<sup>231</sup> *Ibid.*, pág. 63.

<sup>232</sup> *Ibid.*, pág. 64.

[486] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la recomendación 4.4 del capítulo IV, sección 4, de este informe y de la necesidad de que el Estado continúe prestando atención a la misma.

[487] Por otro lado, cabe mencionar que durante la visita *in situ*, la Asociación de Mujeres Abogadas de Guyana (GAWL) indicó que “*la GAWL no participa activamente en el proceso de toma de decisiones del gobierno. Su participación se limita a las consultas. A la luz del artículo 13 de la Constitución de Guyana, que señala que el objetivo de nuestro sistema político es establecer una democracia incluyente suministrando oportunidades crecientes para la participación de los ciudadanos y de sus organizaciones en los procesos de gestión y toma de decisiones del Estado, la GAWL recomienda que se cuente con arreglos institucionales de consulta. Se deben establecer órganos y comisiones asesores ad hoc, que incluyan a las organizaciones de la sociedad, para contribuir a la formulación e implementación de las políticas anticorrupción.*”<sup>233</sup>

#### **4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública**

Recomendación formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*El Comité consideró útil formular las recomendaciones 4.3.1 y 4.3.2 de esta sección con respecto a los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública.*

[488] En su respuesta,<sup>234</sup> el país analizado suministra información e informa sobre nuevos desarrollos relacionados con la anterior recomendación, de los cuales el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[489] – *El nuevo papel de la Unidad de Gobernanza en la Presidencia, que está cambiando de una coordinación ad hoc de informes de los estados parte a la Convención Interamericana contra la Corrupción y otros convenios internacionales a un mecanismo de coordinación más formal.*

[490] *Este nuevo mecanismo de coordinación será una interagencia permanente, encabezada por el Asesor Presidencial sobre Gobernanza y comprenderá a representantes del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Asuntos Jurídicos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Asuntos Internos, la Oficina de Auditoría de Guyana, la Dirección de la Fiscalía, la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio de Hacienda, la Asociación Bancaria y la Comisión del Servicio Público.*

[491] *Se podrá invitar a los representantes a reuniones específicas del sector privado, del Instituto de Contadores Certificados y del Instituto de Auditores Internos o de cualquier otra institución de la sociedad civil según sea necesario.*

[492] El Comité toma nota de este importante desarrollo presentado por el país analizado; sin embargo, observa que la participación de las organizaciones de la sociedad civil en este nuevo mecanismo se limita a su participación en casos específicos.

---

<sup>233</sup> Véase la presentación de la Asociación de Mujeres Abogadas de Guyana (GAWL), págs. 4 y 5. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_guy\\_GAWL.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_guy_GAWL.pdf).

<sup>234</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, págs. 60-61.

[493] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 4.5 del capítulo IV, sección 4, de este informe y de la necesidad de que el Estado continúe prestando atención a la misma.

## **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV)**

Recomendación 5.1 formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Asegurar que tanto los tratados de asistencia mutua que celebre como la propia CICC se apliquen en casos específicos de corrupción* (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 5.1.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).

[494] En su respuesta,<sup>235</sup> el país analizado suministra información e informa sobre nuevos desarrollos relacionados con la anterior recomendación, de los cuales el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[495] *“Guyana informó durante la Tercera Ronda de Análisis del MESICIC que Guyana ratificó la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, la Convención sobre Corrupción de las Naciones Unidas y el Tratado de Cooperación en Materia de Asistencia Mutua Penal de la CARICOM. Este último se promulgó en la legislación interna.*

[496] (...)

[497] *Ningún país ha solicitado asistencia de Guyana en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción.”*

[498] Se le dificulta al Comité determinar la implementación de esta recomendación en ausencia de solicitudes de asistencia jurídica mutua formuladas a Guyana en relación con delitos de corrupción.

[499] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 5.1 del capítulo IV, sección 5, de este informe y de la necesidad de que el Estado continúe prestando atención a la misma.

Recomendación 5.2 formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Promover la adopción y la efectiva aplicación del Proyecto de Ley de Asistencia Recíproca en Materia Penal* (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 5.1.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).

[500] En su respuesta,<sup>236</sup> el país analizado suministra información e informa sobre nuevos desarrollos relacionados con la anterior recomendación, de los cuales el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

---

<sup>235</sup> *Ibid.*, págs. 67-71.

<sup>236</sup> *Ibid.*, pág. 71.

[501] *“Se están realizando esfuerzos para asegurar que la Ley de Asistencia Recíproca en Materia Penal se esté utilizando eficazmente en la lucha contra el delito y para el arresto de personas acusadas de actos de corrupción.*

[502] *La Oficina del Ministro de Asuntos Internos ha transmitido solicitudes de asistencia a las Autoridades Centrales en el marco de la Ley de Asistencia Recíproca en Materia Penal 2009 con respeto a ciudadanos guyaneses acusados con base en la sección 191 de la Ley Penal (delitos), capítulo 8:01, en relación con malversación por un secretario o servidor, como sigue:*

[503] *Trinidad y Tobago (2010)- localización del acusado en el país receptor de la solicitud para fines de enjuiciamiento en Guyana;*

[504] *Suriname y República Bolivariana de Venezuela (2011) - idem; y*

[505] *Estados Unidos de América (2011) - idem.*

[506] *Estas solicitudes no han conducido a la institución de cargos contra las personas, ya que no han sido localizadas.*

[507] *Ningún país ha solicitado asistencia de Guyana en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción.”*

[508] Como se indicó antes, se le dificulta al Comité determinar la implementación de esta recomendación en ausencia de solicitudes de asistencia jurídica mutua formuladas a Guyana en relación con delitos de corrupción.

[509] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 5.2 del capítulo IV, sección 5, de este informe y de la necesidad de que el Estado continúe prestando atención a la misma.

Recomendación 5.3 formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales considere de utilidad la cooperación técnica de otros Estados partes para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 5.2.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).*

[510] En su respuesta,<sup>237</sup> el país analizado suministra información e informa sobre nuevos desarrollos relacionados con la anterior recomendación, de los cuales el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[511] *“Guyana, como parte de la CARICOM, ha estado recibiendo asistencia técnica en el marco de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe de Estados Unidos. La ONUDD también presta asistencia. El Programa de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Guyana y el BID (contrato de préstamo) ha contribuido a mejorar seguridad ciudadana. Guyana también recibe asistencia de convenios de cooperación bilaterales y de socios para el desarrollo multilaterales.”*

---

<sup>237</sup> Ibid., pág. 75.



[512] Se le dificulta al Comité determinar, en ausencia de información adicional, cómo estas iniciativas están fortaleciendo las capacidades de Guyana para prevenir, detectar, investigar y sancionar prácticas corruptas.

[513] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 5.3 del capítulo IV, sección 5, de este informe y de la necesidad de que el Estado continúe prestando atención a la misma.

## **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTICULO XVIII)**

Recomendación 6.1 formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Designar a la Autoridad Central prevista en el artículo XVIII de la Convención para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en ese instrumento, ya sea a través de la aprobación de las disposiciones que sobre esta materia contempla el Proyecto de Ley de Asistencia Recíproca en Materia Penal a la que hace referencia la Respuesta al Cuestionario o de la toma de las decisiones administrativas que correspondan* (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 6.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).

[514] En su respuesta,<sup>238</sup> el país analizado suministra información e informa sobre nuevos desarrollos relacionados con la anterior recomendación, de los cuales el Comité destaca como un paso que lo lleva a concluir que la recomendación ha sido considerada satisfactoriamente:

[515] “*El Ministro de Asuntos Internos fue designado como la Autoridad Central de Guyana de conformidad con la sección 3(1) de la Ley de Asistencia Recíproca en Materia Penal 2009, lo que se extendería al envío y la recepción de solicitudes de asistencia previstas en la Convención.*”

[516] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el país analizado de la recomendación 6.1 formulada en el capítulo IV, sección 6, de este informe.

Recomendación 6.2 formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Notificar oficialmente a la Secretaría General de la OEA la designación de la citada autoridad central, de acuerdo con las formalidades previstas para ello* (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 6.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).

[517] En su respuesta,<sup>239</sup> el país analizado suministra información e informa sobre nuevos desarrollos relacionados con la anterior recomendación, de los cuales el Comité destaca como un paso que lo lleva a concluir que la recomendación ha sido considerada satisfactoriamente:

[518] “*Se ha notificado al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos sobre la designación del Ministro de Relaciones Exteriores como la autoridad central de Guyana para los fines de asistencia y cooperación internacional, de conformidad con el artículo XVIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción el 10 de junio de 2011.*”

---

<sup>238</sup> *Ibid.*, pág. 74.

<sup>239</sup> *Ibid.*, pág. 75.

[519] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el país analizado de la recomendación 6.2 formulada en el capítulo IV, sección 6, de este informe.

Recomendación 6.3 formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Asegurar que, una vez designada dicha autoridad, cuente con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones* (el fundamento de esta medida está contenido en la sección 6.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda).

[520] En su respuesta,<sup>240</sup> el país analizado suministra información e informa sobre nuevos desarrollos relacionados con la anterior recomendación, de los cuales el Comité subraya como un paso que lo lleva a concluir que la recomendación ha sido considerada satisfactoriamente:

[521] *“La Oficina del Ministro de Asuntos Internos cuenta con una dotación de personal y equipamientos adecuados para funcionar como la autoridad central de acuerdo con la Ley de Asistencia Recíproca en Materia Penal 2009.*

[522] *La Oficina del Ministro de Relaciones Exteriores cuenta con una dotación de personal adecuada y recibe apoyo adicional de la Unidad de Gobernanza de la Presidencia, el Ministro de Asuntos Internos y el Secretario del Gabinete.”*

[523] El Comité observa también que Ministerio de Asuntos Internos, al momento de la preparación de este informe, estaba en proceso de contratar a un Funcionario de Tratados para que, entre otras cosas, prestara orientación al Ministro y actuara en relación con todos los asuntos relacionados con los tratados asistencia mutua en materia penal de los que forma parte Guyana.<sup>241</sup>

[524] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el país analizado de la recomendación 6.3. formulada en el capítulo IV, sección 6, de este informe.

## **7. RECOMENDACIONES GENERALES**

Recomendación 7.1 formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación dirigidos a los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.*

[525] En su respuesta,<sup>242</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la recomendación anterior:

[526] *“Con la introducción de los manuales que se han suministrado en este informe y que están disponibles en los sitios Web correspondientes, todos ellos han ido acompañados por programas de*

---

<sup>240</sup> Ibid., pág. 74.

<sup>241</sup> Ver: [http://eprocure.gov.gy/index.php?option=com\\_content&view=article&id=989:vacancy&catid=93:home-affairs&Itemid=171](http://eprocure.gov.gy/index.php?option=com_content&view=article&id=989:vacancy&catid=93:home-affairs&Itemid=171).

<sup>242</sup> Véase la respuesta de Guyana al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 77.

*capacitación en los organismos pertinentes para asegurar que los usuarios comprendan, manejen y apliquen correctamente estos manuales. Esta actividad es continua.”*

[527] El Comité observa, sin embargo, que, como se indicó en secciones anteriores de este informe, las actividades de capacitación analizadas no guardaba relación específicamente con los temas analizados en la Primera Ronda, como conflictos de intereses, sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos y acceso a la información, entre otros.

[528] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la recomendación 7.1 del capítulo IV, sección 7, de este informe.

Recomendación 7.2 formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA. El país analizado también podría tomar en cuenta cualquier información derivada del análisis de los mecanismos creados de conformidad con la recomendación 7.3 a continuación.*

[529] En su respuesta,<sup>243</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la recomendación anterior:

[530] *“Al final de cada una de las rondas, el informe se distribuye a los miembros del Gabinete y a los titulares de las agencias correspondientes para que se familiaricen con las recomendaciones y para estimular, cuando es posible, enmiendas y cambios como forma de seguimiento. Estos asuntos se incluyen en la agenda del Subcomité de Gobernanza y Asuntos Externos y Parlamentarios del Gabinete a fin de que se sigan con respecto a ellos las diversas etapas de toma de decisiones.*

[531] *En la preparación de esta respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, las agencias pertinentes (la Auditoría General, la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Asuntos Internos, la Dirección de la Fiscalía, la Procuraduría General, el Departamento de Policía y la Comisión del Servicio Público) han contribuido al contenido de este documento.”*

[532] En vista de que la información suministrada por el país analizado no aborda específicamente el desarrollo de procedimientos e indicadores para verificar el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la Primera Ronda, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la recomendación 7.2 del capítulo IV, sección 7, de este informe.

Recomendación 7.3 formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

---

<sup>243</sup> *Ibid.*, pág. 79.

*Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.*

[533] En su respuesta,<sup>244</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la recomendación anterior:

[534] *“La información contenida en este informe indicó los esfuerzos realizados.”*

[535] Como ya se dijo en las secciones 1.2, 2.2. y 3.2 del capítulo II de este informe, el Comité estima que convendría a Guyana establecer una estrategia anticorrupción articulada. El Comité considera asimismo que uno de los aspectos de esta estrategia debería ser una revisión exhaustiva de las recomendaciones formuladas por el MESICIC.

[536] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la recomendación 7.3 del capítulo IV, sección 7, de este informe.

Recomendación 7.4 formulada por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Segunda y Tercera Rondas:

*Optimizar los registros estadísticos generales de los órganos de control que permitan el análisis objetivo de los resultados del marco jurídico y de otras medidas adoptadas.*

[537] En su respuesta,<sup>245</sup> el país analizado suministra la siguiente información sobre la recomendación anterior:

[538] *“Esta actividad es continua, como se señaló en el párrafo 201 de la Tercera Ronda de Análisis, con mejor conectividad y la automatización de los sistemas de información gubernamentales. El proyecto de gobierno electrónico está en marcha y generará mayores capacidades, un acceso más ágil a los datos y el suministro más oportuno de estadísticas.”*

[539] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la implementación de la recomendación 7.4 del capítulo IV, sección 7, de este informe.

---

<sup>244</sup> *Ibid.*, pág. 80.

<sup>245</sup> *Ibid.*, pág. 81.

## **ANEXO I**

### **RECOMENDACIONES VIGENTES Y REFORMULADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA**

#### **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

##### **1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

###### **Recomendación:**

Considerar la posibilidad de fortalecer la implementación de normas sobre conflictos de intereses, asegurando que sean aplicables a todos los funcionarios y empleados públicos, permitiendo la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.

###### **Medidas sugeridas:**

a) Elaborar normas específicas, cuando sea apropiado, que delimiten la actuación de los servidores públicos en situaciones concretas, atendiendo a las funciones y actividades propias de cada institución y a las particularidades e importancia de los distintos cargos de la administración pública, así como mecanismos para hacerlas efectivas.

b) Ampliar las funciones de la Comisión de Integridad para incluir un papel de asesoría o consultivo en relación con los conflictos de intereses, a fin de permitirle recibir y responder a las consultas de las personas de la vida pública sobre estos asuntos.

c) Fortalecer las entidades pertinentes a fin de perfeccionar su habilidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos definidos en los cargos y asegurar que efectivamente no se produzcan, en el servicio público, nombramientos contrarios al régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigentes.

d) Desarrollar, cuando sea necesario, otros mecanismos que identifiquen o detecten causas sobrevinientes que pudieran ocurrir en el transcurso del ejercicio de la función pública y que pudieran constituir conflictos de interés tales como la declaración de intereses privados por parte del funcionario.

e) Desarrollar, cuando corresponda, disposiciones que señalen o limiten la participación de los ex funcionarios públicos en situaciones que conlleven el aprovechamiento indebido de esa condición, por un plazo de tiempo razonable.

f) Considerar el fortalecimiento del régimen de sanciones vigente incorporando otro tipo de sanciones administrativas distintas a las ya previstas, por ejemplo la suspensión del cargo, el despido, la renuncia a los intereses particulares en conflicto o la invalidez o nulidad de las decisiones que adopte el funcionario público bajo estas circunstancias, así como su retiro de la participación oficial en el asunto.

##### **1.2. Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

Recomendación:

Llevar a cabo un análisis exhaustivo de las causas de los persistentes sobrepagos a contratistas y al personal señalados en los informes anuales de la Oficina de Auditoría y adoptar las medidas necesarias para hacer frente a este asunto, cerciorándose de que existan sistemas para evitar la reocurrencia de estos sobrepagos, además de perseguir vigorosamente la recuperación de los montos pagados en exceso.

**1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

Recomendación:

Considerar fortalecer los mecanismos con los que cuenta para exigir a los funcionarios públicos informar o denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción que en el desempeño de la función pública tengan conocimiento.

Medidas sugeridas:

- a) Establecer medidas y sistemas que exijan, a la generalidad de los funcionarios públicos, denunciar o informar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento y facilitar, a través de los medios que estime adecuados, el cumplimiento de esta obligación.
- b) Adoptar e implementar medidas de protección para alentar a los servidores públicos a denunciar los actos de corrupción de los que tengan conocimiento.
- c) Revisar la disposición contenida en la sección 28(3) de la LCI a fin de asegurar que la misma no se convierta en un impedimento o causa que desmotive, inhiba o intimide a los funcionarios públicos a presentar informes o denuncias sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.
- d) Implementar medidas adecuadas, incluyendo programas de capacitación, dirigidos a los servidores públicos en cuanto a la forma y requisitos de presentación de informes y denuncias por actos de corrupción y sobre los mecanismos de protección a favor de los denunciantes de buena fe.

**2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS  
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCION)**

Recomendación:

Considerar fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.

Medidas sugeridas:

- a) Maximizar el uso de sistemas para analizar los contenidos de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, y adoptar medidas adecuadas para que puedan también usarse para detectar y prevenir conflictos de intereses y casos de enriquecimiento ilícito, utilizando tecnologías modernas, cuando sea posible, para agilizar o hacer más expedita su presentación y como una herramienta para mejorar

los sistemas, análisis o investigaciones de los casos, tomando en cuenta los artículos de la “Ley modelo sobre declaración de intereses, ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas.”<sup>246</sup>

b) Considerar la conveniencia de efectuar adecuaciones o reformas legales en relación con las facultades que otorga la LCI a la Comisión o al Presidente de la República, según corresponda, a fin de que puedan, sin la autorización de ningún otro órgano o funcionario, imponer las sanciones administrativas que correspondan.

c) Hacer cumplir las sanciones existentes en la Ley de la Comisión de Integridad y considerar la implementación de sanciones adicionales y otros tipos de penas, como la inhabilitación del servicio públicos en aquellos casos en que el funcionario declarante hubiese dejado su cargo sin haber presentado la declaración final, con vistas a asegurar que las sanciones vigentes sean suficientemente disuasivas, tomando en cuenta los artículos pertinentes de la “Ley modelo sobre declaración de intereses, ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas”.<sup>247</sup>

d) Establecer las sanciones pertinentes por el incumplimiento de la entrega de nombres y otra información actualizada de los declarantes por las instancias públicas de conformidad con el Anexo 1 de la Ley de la Comisión de Integridad de 1997 anualmente.

e) Revisar la posibilidad de ampliar el plazo de cinco años que establece la sección 23 (b) de la LCI como límite para instituir procedimientos legales en relación con actos ilícitos contra el funcionario que haya cesado en sus funciones públicas.

f) Considerar la conveniencia de otorgar a un órgano o funcionario, distinto al Presidente de la República, la administración, verificación y aplicación del sistema de declaración de ingresos, activos y pasivos, en relación con los miembros de la Comisión de Integridad.

g) Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes para dar publicidad a las declaraciones juradas patrimoniales, cuando corresponda, con sujeción a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno.

### **3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR RESPONSABLES DE LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCIÓN)**

#### Recomendación:

Considerar fortalecer o crear los órganos de control superior en las funciones que desarrollan sobre el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 4 y 11 del artículo III de la Convención, dotándolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una periódica evaluación y seguimiento de las mismas

### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)**

<sup>246</sup> Texto disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/model\\_law\\_declaration.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_declaration.pdf).

<sup>247</sup> Texto disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/model\\_law\\_declaration.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_declaration.pdf).

#### **4.1. Mecanismos de participación en general**

##### Recomendación:

Considerar la necesidad de que Guyana revise y fortalezca su enfoque general para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos encaminados a prevenir la corrupción.

#### **4.2 Mecanismos para el acceso a la información**

##### Recomendación:

Fortalecer los mecanismos para asegurar el acceso público a la información.

##### Medidas sugeridas:

- a) Dotar al Comisionado de Información con los recursos humanos y financieros que requiere para el desempeño adecuado de sus funciones, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos.
- b) Considerar especialmente la implementación de la sección 45 de la Ley de Acceso a la Información en relación con los programas para educar al público sobre la importancia del acceso información pública y sobre las maneras de ejercer sus derechos con base en dicha Ley.
- c) Emitir el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información de 2011, tomando en cuenta que no debe incluir restricciones o exenciones adicionales a las que figuran en dicha Ley.
- d) Contemplar la posibilidad de acortar los límites temporales establecidos en la sección 18 de la Ley de Acceso a la Información de 2011, con vistas a que el proceso sea más expedito.
- e) Crear y mantener un sitio Web para la Oficina del Comisionado de Información y hacer uso de este u otros medios electrónicos para recibir y responder a solicitudes de acceso a la información con base en la Ley.
- f) Mantener y publicar estadísticas sobre la implementación de la Ley, como cuántas solicitudes ha recibido el Comisionado de Información, cuántas han sido denegadas y las razones de la denegación, cuántas se han otorgado total o parcialmente, cuántas autoridades públicas han incumplido los requisitos de la Ley y cuántas sanciones se han aplicado, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas.
- g) Considerar la creación o aprobación de sistemas que aseguren que el público tenga acceso, cuando sea apropiado, a información sobre las entidades públicas y sus actividades financieras y programáticas, especialmente incluyendo a los órganos de control superior que se ocupan de temas incluidos en este informe.

#### **4.3. Mecanismos de consulta**

##### Recomendación 4.3.1:

Desarrollar normas y procedimientos que apoyen mecanismos de consulta para facilitar a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos la generación de opiniones y propuestas.



Recomendación 4.3.2:

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de consulta, y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, como también a los funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos.

**4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

Recomendación:

El Comité consideró útil formular las recomendaciones 4.3.1 y 4.3.2 de esta sección con respecto a los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública.

**4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública**

Recomendación:

El Comité consideró útil formular las recomendaciones 4.3.1 y 4.3.2 de esta sección con respecto a los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública.

**5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)**

Recomendación 5.1:

Asegurar que tanto los tratados de asistencia mutua que celebre como la propia CICC se apliquen en casos específicos de corrupción.

Recomendación 5.2:

Promover la adopción y la efectiva aplicación de la Ley de Asistencia Recíproca en Materia Penal.

Recomendación 5.3:

Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales considere de utilidad la cooperación técnica de otros Estados partes para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción

**7. RECOMENDACIONES GENERALES**

Recomendación 7.1:

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación dirigidos a los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

Recomendación 7.2:

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el

listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA. El país analizado también podría tomar en cuenta cualquier información derivada del análisis de los mecanismos creados de conformidad con la recomendación 7.3 a continuación.

Recomendación 7.3:

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

Recomendación 7.4:

Optimizar los registros estadísticos generales de los órganos de control que permitan el análisis objetivo de los resultados del marco jurídico y de otras medidas adoptadas.

## **ANEXO II**

### **AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* A LA REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA**

<b><u>Lunes, 7 de octubre de 2013</u></b>	
10:00 a.m. – 11:00 a.m. <i>Cara Lodge Guyana</i>	<b>Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</b>
11:00 a.m. – 12:00 p.m. <i>Cara Lodge Guyana</i>	<b>Reunión de coordinación entre los representantes del país analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</b>
<b><u>Martes, 8 de octubre de 2013</u></b>	
9:00 a.m. – 10:30 a.m. <i>Cara Lodge Guyana</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.<sup>248</sup></b>
	<b>Tema:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Perspectivas de la sociedad civil sobre los órganos de control superior gubernamentales que previenen, detectan, sancionan y erradican las prácticas corruptas.</b></li></ul>

<sup>248</sup> La organización de la sociedad civil “Transparency Institute of Guyana Inc. – Capítulo de Guyana de Transparencia Internacional” participa en estas reuniones en virtud de lo previsto en la disposición 26 de la Metodología para la Realización de las Visitas *In Situ*, por cuanto presentó un documento relativo al Cuestionario para la Cuarta Ronda de Análisis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34(b) del *Reglamento del Comité*. Se sugiere invitar a participar a otras organizaciones y personas en virtud de lo previsto en la disposición 27 de dicha Metodología, que permite invitar a participar en estas reuniones a organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.

	<p><u>Participantes:</u></p> <p><b><i>Transparency Institute of Guyana (TIGI)</i></b> Sr. Anand Goolsarran, <i>Presidente</i> Sr. Gino Persaud, <i>Director</i> Sr. Clifton Nigel Hinds, <i>Director</i></p> <p><b><i>Instituto de Contadores Certificados de Guyana (ICAG)</i></b> Sr. Ronald Alli, <i>Presidente</i> Sr. Ramesh Lal, <i>Miembro del Consejo</i></p> <p><b><i>Asociación de Mujeres Abogadas de Guyana (GAWL)</i></b> Sra. Simone Morris Ramlall, <i>Presidente</i> Sra. Sadie Amin, <i>Vicepresidente</i> Sra. Chandrawattie Persaud, <i>Miembro del Comité</i></p> <p><b><i>Consultative Association of Guyanese Industry Ltd. (CAGI)</i></b> Sr. S. J. Goolsarran, <i>Director Ejecutivo</i> Sr. Chandradat Chintamani, <i>Asesor</i></p> <p><b><i>Cámara de Comercio e Industria de Georgetown (GCCCI)</i></b> Sr. Clinton Urling, <i>Presidente</i></p> <p><b><i>Federación de Sindicatos Independientes de Guyana</i></b> Sr. Seepaul Narine, <i>Tesorero</i></p>
10:45 a.m. – 12:30 p.m. <i>Cara Lodge Guyana</i>	<p><b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.</b></p>
	<p><b>Tema: Seguimiento de las recomendaciones de la primera ronda</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Conflictos de intereses.</b></li><li>• <b>Sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos.</b></li><li>• <b>Acceso a la información pública.</b></li><li>• <b>Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción</b></li></ul>

	<p><u>Participantes:</u></p> <p><b><i>Transparency Institute of Guyana (TIGI)</i></b>  Sr. Anand Goolsarran, <i>Presidente</i>  Sr. Gino Persaud, <i>Director</i>  Sr. Clifton Nigel Hinds, <i>Director</i></p> <p><b><i>Instituto de Contadores Certificados de Guyana (ICAG)</i></b>  Sr. Ronald Alli, <i>Presidente</i>  Sr. Ramesh Lal, <i>Miembro del Consejo</i></p> <p><b><i>Asociación de Mujeres Abogadas de Guyana (GAWL)</i></b>  Sra. Simone Morris Ramlall, <i>Presidente</i>  Sra. Sadie Amin, <i>Vicepresidente</i>  Sra. Chandrawattie Persaud, <i>Miembro del Comité</i></p> <p><b><i>Consultative Association of Guyanese Industry Ltd. (CAGI)</i></b>  Sr. S. J. Goolsarran, <i>Director Ejecutivo</i>  Sr. Chandradat Chintamani, <i>Asesor</i></p> <p><b><i>Cámara de Comercio e Industria de Georgetown (GCCI)</i></b>  Sr. Clinton Urling, <i>Presidente</i></p> <p><b><i>Federación de Sindicatos Independientes de Guyana</i></b>  Sr. Seepaul Narine, <i>Tesorero</i></p>
12:30 p.m. – 2:00 p.m.	<b>Almuerzo</b>
2:00 p.m. – 5:00 p.m. <i>Cara Lodge Guyana</i>	<b>Oficina de Auditoría</b>
2:00 p.m. – 3:20 p.m.	<p><b>Panel 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Breve presentación de los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos)</b></li> <li>• <b>Excepciones a la jurisdicción del Auditor General</b></li> <li>• <b>Titularidad del Auditor General</b></li> <li>• <b>Recursos humanos</b></li> <li>• <b>Capacitación/Unidad de Auditoría Forense</b></li> <li>• <b>Mecanismos de control interno</b></li> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas/Planes estratégicos y anuales</b></li> </ul>

	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Sr. Deodat Sharma, <i>Auditor General</i></p> <p>Sr. Sheldon Hazelwood, <i>Gerente de Recursos Humanos</i></p> <p>Sr. Dhanraj Persaud, <i>Gerente (ag.) Unidad de Auditoría Forense</i></p> <p>Sr. Lakeram Ramkoomar, <i>Gerente de Auditoría</i></p> <p>Sr. Philip Smith, <i>Director de Obras y Estructuras</i></p> <p>Sr. Heeralal Gendon, <i>Gerente de Finanzas</i></p> <p>Sr. Rohit Kalicharan, <i>Gerente de Sistemas de Información</i></p> <p>Sr. Bryan Viera, <i>Investigador de Fraudes</i></p>
3:30 p.m. – 5:00 p.m.	<p><b>Panel 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coordinación con otros órganos gubernamentales de conformidad con sus mandatos</b></li> <li>• <b>Régimen presupuestal</b></li> <li>• <b>Resultados obtenidos en el desempeño de sus responsabilidades</b></li> <li>• <b>Dificultades para el logro de sus fines</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u></p> <p>Sr. Deodat Sharma, <i>Auditor General</i></p> <p>Sr. Sheldon Hazelwood, <i>Gerente de Recursos Humanos</i></p> <p>Sr. Dhanraj Persaud, <i>Gerente (ag.) Unidad de Auditoría Forense</i></p> <p>Sr. Lakeram Ramkoomar, <i>Gerente de Auditoría</i></p> <p>Sr. Philip Smith, <i>Director, Obras y Estructuras</i></p> <p>Sr. Heeralal Gendon, <i>Gerente de Finanzas</i></p> <p>Sr. Rohit Kalicharan, <i>Gerente de Sistemas de Información</i></p> <p>Sr. Bryan Viera, <i>Investigador de Fraudes</i></p>
5:00 p.m.	<p><b>Reunión informal<sup>249/</sup></b> entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</p>
<p><b><u>Miércoles, 9 de octubre de 2013</u></b></p>	
08:30 a.m. – 10:30 a.m.	<p><b>Comisión del Servicio Público (PSC)</b></p>

<sup>249</sup>. El segundo párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las visitas in situ* señala: “Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas.”

<i>Cara Lodge Guyana</i>	
	<p><b>Panel 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breve presentación de los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos)</li> <li>• Reglamento del Servicio Público</li> <li>• Recursos humanos</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Régimen presupuestal</li> <li>• Mecanismos de control interno</li> <li>• Resultados de los procedimientos disciplinarios/Coordinación con otros órganos gubernamentales</li> <li>• Mecanismos de rendición de cuentas</li> <li>• Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflictos de intereses</li> </ul> </li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Sr. Carvil Duncan, <i>Presidente</i></p> <p>Sr. Cecil Seepersaud, <i>Miembro</i></p> <p>Sr. Michael Desmond Hope, <i>Miembro</i></p> <p>Sra. Vedyawattie Looknauth, <i>Miembro</i></p> <p>Sr. Jaigobin Jaisingh, <i>Secretario</i></p> <p>Sra. La Vaughn Stewart, <i>Directora de Personal</i></p>
10:45 a.m. – 1:15 p.m. <i>Cara Lodge Guyana</i>	<b>Dirección de la Fiscalía (DPP)</b>
10:45 a.m. – 11:45 a.m.	<p><b>Panel 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breve presentación de los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos)</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Mecanismos de control interno</li> <li>• Mecanismos de rendición de cuentas</li> <li>• Coordinación con otros órganos gubernamentales de conformidad con sus mandatos</li> </ul>



	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Sra. Shalimar Ali-Hack, <i>Fiscal General</i></p> <p>Sra. Jo-Ann Barlow, <i>Subfiscal General</i></p> <p>Sra. Merlyne Lall, <i>Directora Administrativa</i></p>
12:00 p.m. – 1:15 p.m.	<p><b>Panel 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Régimen presupuestal</b></li> <li>• <b>Resultados obtenidos en el desempeño de sus responsabilidades</b></li> <li>• <b>Dificultades para el logro de sus fines</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Sra. Shalimar Ali-Hack, <i>Fiscal General</i></p> <p>Sra. Jo-Ann Barlow, <i>Subfiscal General</i></p> <p>Sra. Merlyne Lall, <i>Directora Administrativa</i></p>
1:15 p.m. – 2:45 p.m.	<b>Almuerzo</b>
3:00 p.m. – 4:45 p.m. <i>Comisión del Servicio Judicial</i>	<b>Comisión del Servicio Judicial (JSC)</b>
	<p><b>Panel 6:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Breve presentación de los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos)</b></li> <li>• <b>Reglamento del Servicio Judicial</b></li> <li>• <b>Recursos humanos</b></li> <li>• <b>Capacitación</b></li> <li>• <b>Régimen presupuestal</b></li> <li>• <b>Mecanismos de control interno</b></li> <li>• <b>Resultados de los procedimientos disciplinarios/Coordinación con otros órganos gubernamentales</b></li> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas</b></li> </ul>

	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Sr. Carl A. Singh, <i>Canciller de la Judicatura (ag) y Presidente de la Comisión del Servicio Judicial</i></p> <p>Sr. Ian Chang, <i>Presidente de la Corte, Miembro de la Comisión del Servicio Judicial</i></p> <p>Sr. Carvil Duncan, <i>Presidente de la Comisión del Servicio Público y Miembro ex-officio de la Comisión del Servicio Judicial</i></p>
5:00 p.m.	<b>Reunión</b> informal entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<b><u>Jueves, 10 de octubre de 2013</u></b>	
08:30 a.m. – 10:30 a.m. <i>Cara Lodge Guyana</i>	<b>Comisión de Integridad</b>
	<p><b>Panel 7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breve presentación de los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos)</li> <li>• Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflictos de intereses</li> <li>- Sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar sobre actos de corrupción</li> <li>- Órganos de control superior</li> </ul> </li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Sra. Amanda Jaisingh, <i>Secretaria/Directora</i></p> <p>Sra. Vidyantie Pritipaul, <i>Secretaria Contable</i></p>
10:45 a.m. – 12:30 p.m. <i>Cara Lodge Guyana</i>	<b>Oficina del Comisionado de Información</b>
	<p><b>Panel 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breve presentación de los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos)</li> <li>• Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mecanismos para el acceso a la información</li> </ul> </li> </ul>

	<u>Participantes:</u> Sr. Charles R. Ramson, <i>Comisionado de Información</i>
12:30 p.m. – 2:00 p.m.	<b>Almuerzo</b>
2:00 p.m. – 4:00 p.m. <i>Cara Lodge Guyana</i>	<b>Consejo Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones</b>
	<b>Panel 9:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breve presentación de los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos)</li> <li>• Recursos humanos</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Mecanismos de control interno</li> <li>• Mecanismos de rendición de cuentas</li> <li>• Régimen presupuestal</li> <li>• Resultados obtenidos en el desempeño de sus responsabilidades / Dificultades para el logro de sus fines</li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Sr. Donald DeClou, <i>Presidente</i> Sra. Lavern Lawrence, <i>Vicepresidente</i> Sr. Ron Rahaman, <i>Director de Vialidades y Puentes / Miembro del Directorio</i> Sr. Michael DeJonge, <i>Coordinador de capacitación / Especialista en adquisiciones</i> Sr. Arvind Parag, <i>Jefe de Tecnología de Información</i>
4:00 p.m. – 4:30 p.m.	<b>Reunión informal</b> entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
4:30 hrs. – 5:30 p.m.	<b>Reunión final</b> <sup>250/</sup> entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

<sup>250</sup>. El tercer párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las visitas in situ* señala: “Al final de la visita in situ se realizará una reunión en que participarán los Expertos del Subgrupo, la Secretaría Técnica y el Experto Titular del Estado analizado y/o el funcionario que éste haya designado para apoyarlo de acuerdo con lo previsto en la disposición 10, segundo párrafo, de la presente Metodología. En dicha reunión se precisará, si fuere el caso, la información que excepcionalmente quede aún pendiente de suministrar el Estado analizado por conducto de la Secretaría Técnica y el término en que lo hará y se coordinará cualquier otro tema pendiente que resulte de la visita in situ.”

**AUTORIDAD QUE SIRVIÓ DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO PARA LA COORDINACIÓN DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA**

**ESTADO ANALIZADO:**

**REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA**

Gail Teixeira

Experta Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC  
Asesora Presidencial sobre Gobernanza

**ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:**

**HAITÍ**

Antoine Atouriste

Experta Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC  
Directora General, Unidad para Combatir la Corrupción (ULCC)

Joseph Jean Figaro

Experto Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC  
Director de Operaciones, Unidad para Combatir la Corrupción (ULCC)

Yvlore Pigeot

Experta Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC  
Directora, Departamento Legal, Unidad para Combatir la Corrupción (ULCC)

**TRINIDAD Y TOBAGO**

Joan Furlonge

Experta Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC  
Asesora Jurídica del Procurador General  
Ministerio del Procurador General

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC**

Luiz Marcelo Azevedo

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica  
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA